

# AUTOCULTIVO

y uso de

# CANNABIS

en

# ESPAÑA:



DE LA CLANDESTINIDAD  
A LA PROPUESTA DE REGULACIÓN



OBSERVATORIO EUROPEO DEL CONSUMO  
Y CULTIVO DE CANNABIS

AUTOCULTIVO Y  
USO DE CANNABIS  
EN ESPAÑA



# AUTOCULTIVO Y USO DE CANNABIS EN ESPAÑA

DE LA CLANDESTINIDAD A  
LA PROPUESTA DE REGULACIÓN

---

OBSERVATORIO EUROPEO DEL CONSUMO  
Y CULTIVO DE CANNABIS



Primera edición: mayo 2019

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

[www.Letrame.com](http://www.Letrame.com)

[info@Letrame.com](mailto:info@Letrame.com)

© Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis

Diseño de edición: Letrame Editorial.


ISBN: 978-84-17935-12-2

DEPÓSITO LEGAL: AL 1095-2019

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

Este libro colabora con:  **Save the Children**

IMPRESO EN ESPAÑA – UNIÓN EUROPEA

*A todas las personas que en un esfuerzo anónimo nos han traído hasta aquí.  
En el camino empleamos décadas. Ya estamos cerca.*



# ÍNDICE

1.- Prólogo	11
2.- Introducción	15
3.- Autocultivo y autocultivadores de cannabis en España. Desarrollo del movimiento	25
4.- La peritación del autocultivo de cannabis. Referencias y propuesta	53
5.- Aspectos claves del cannabis medicinal	67
6.- Regulación del cannabis: aspectos sociológicos	75
7.- Aspectos penales del cannabis en España	83
8.- Otros aspectos legales del cannabis	127
9.- Propuestas de regulación	153
10.- Epílogo	161
11.- BIBLIOGRAFÍA	167
12.- BIOGRAFÍAS	183
13.- ANEXO: ley catalana de las asociaciones de consumidores de cannabis	189



# 1.- Prólogo

Antonio Escohotado

Antes de terminar el siglo pasado, en 1997, publiqué *La cuestión del cáñamo, una propuesta constructiva sobre haschisch y marihuana*, roturando una materia que los miembros del OECCC recobran dos décadas después, de un modo mucho más detenido y puntual, como cabía esperar, por otra parte. En 2019 no solo resisten varias revistas de alcance nacional, también hay una densa red de growshops y otra de clubs para fumadores, porque el cáñamo lo han probado o usan de modo más o menos asiduo al menos un tercio de los adultos, y no carga con el estigma de drogas como la cocaína y la heroína.

De ahí que establecer reglas de juego para la producción y consumo de este producto (como propone el OECCC) sea solo una alternativa a cierta realidad ya autoorganizada, a través de miles de pequeños y medianos empresarios, para atender la demanda de millones. Dicen que el avestruz cree protegerse del león hundiendo la cabeza en tierra, con lo cual destaca sus deseadas posaderas. A mi juicio, no hay duda de que una reacción análogamente absurda pretende proteger al adulto de tales y cuales psicofármacos, logrando los efectos más contrarios a su intención.

Sea como fuere, en Holanda, desde los años 60, y cada vez en más Estados de la Unión norteamericana desde hace poco, las fantasmagorías de aquelarres medievales han dado paso a una industria tan pujante como las demás del capítulo I + D. En nuestro país, de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) depende navegar en la oportunidad, o seguir alimentando el híbrido de ineficacia, arbitrariedad e inseguridad reinante. A la vista de todos están las singulares circunstancias españolas, que incluyen vastas extensiones cultivables y soleadas, una aclimatación cultural y so-

cial del cáñamo, una tradición del festejo sin paralelo en las zonas septentrionales del Viejo Mundo y, ante todo, la posibilidad de blanquear un mercado negro que hoy no paga impuestos, pero ofrece pagarlos a cambio de seguridad jurídica y transparencia.

¿Necesita alguien recordar que nadie nunca murió por sobredosis de cáñamo, o que el síndrome de abstinencia (el mortal delirium tremens del alcohólico, el mono de benzodiacepinas y el algo menos severo síndrome de retirada de opiáceos) sencillamente no existe en el caso del cáñamo? Los padres y abuelos sabemos que su toxicidad es mínima. La ausencia de síndrome abstinencial para nada hace más tolerable el empleo asiduo del *porro* en la precisa época de la vida donde toca aprender a estudiar, pero ¿cómo recuperar la confianza de los jóvenes si seguimos sufragando campañas anuales al estilo del Plan Nacional, donde el gusano aparecido en la nariz o los sesos fritos en sartén terminan invariablemente en una rechifla que se aplica en esas imágenes a todo sin lograr así lo pretendido?

Tras empezar correlacionando magnitudes tan precisas como el gramo de producto maduro y el vatio, la pesquisa ofrecida por el OECCC va mostrando punto por punto cómo asumir lo real sin hipocresía, respetando el rendimiento y lo consensuado, a expensas del despilfarro y la tiranía. En vez de cargar con estímulos tan vigorosos como la rebeldía, este campo se incorporará de pleno derecho a su situación, y tanto la empresa como el empleo (el trabajo por cuenta propia y ajena) saldrán ganando, sin promover lo más mínimo la demanda. Más de medio siglo demuestra que los coffee shops holandeses no han aumentado, sino más bien disminuido, la atracción por el cáñamo, si se compara con la situación alemana, la italiana, la inglesa o la francesa. En lo sucesivo, un mínimo de buena fe debería influir en la conducta de nuestras autoridades, aunque solo sea para quedar apeados de un oscurantismo nacido en Norteamérica, cuando ella misma empieza a dar marcha atrás.

Podemos añadir al estado de cosas un control de calidad, una renta fiscal saneada y un empleo estable para docenas de miles de familias, como en Holanda, California, Colorado, etcétera. Tam-

bién podemos seguir igual e incluso retroceder, como en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando la normativa sobre clubs de consumidores; pero el único cambio efectivo será nadar en contra o a favor de la corriente, preferir la ineficiencia a la eficiencia, el prejuicio al juicio y la barbarie al civismo. En manos de nuestro legislador está aliarse o no con la atracción ancestral por lo prohibido, y las meticulosas pesquisas y propuestas contenidas en este volumen son, sin duda, la información más actual (entre la hoy disponible) para formar elementos de juicio.

Al legislador se le está ofreciendo dialogar con un interlocutor probadamente indestructible, que con gusto pagará impuestos y respetará estándares objetivos si dicha contribución al bien común, y a la redistribución fiscal de la riqueza, se ve correspondida con respeto por la seguridad jurídica. Quizá una vez más el conocimiento pretenda suplirse con ignorancia, y el orden venido desde dentro con órdenes venidas de fuera, como en conventos y cuarteles, aunque ignorar lo que el OECCC explica y argumenta equivaldrá a llover sobre mojado. Pasen y lean, señores legisladores, juzgadores y administradores, si no quieren quedar apeados de un tren que ya transita por su puerta.



## 2.- Introducción

Aunque los fundadores del OECCC<sup>1</sup> defendemos las ideas que se exponen desde hace décadas, la línea de trabajo que lleva a esta propuesta comenzó a principios del 2014 con la publicación de varios documentos divulgativos previos. El desencadenante fue comprobar cómo en el contexto internacional se han consolidado avances de gran relevancia respecto a la regulación del cannabis. Queríamos estar preparados para, cuando llegara la onda expansiva a España, ofrecer a la sociedad y a los legisladores una propuesta sólida además de inclusiva, democrática y con encaje en el marco jurídico actual, por lo que resulta ideal como primer paso hacia la regulación del cannabis.

El OECCC busca poner el enfoque en las personas, el auténtico eje en cualquier proceso de este tipo. Nos centramos en incrementar la participación de los usuarios en la regulación. También se centra en la defensa de sus derechos y capacidad de autogestión por encima de intereses empresariales, que no por eso no tienen que olvidarse. Esta es la perspectiva que entronca con el núcleo central de todo estado democrático de derecho, el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Por esto, se hace especial hincapié en la regulación del autocultivo, así como en la tenencia y uso. Además de hacer una propuesta sobre el autocultivo individual, incluimos como anexo la ley catalana sobre las asociaciones de consumidores de cannabis, el texto legal más completo sobre cultivo colectivo que se ha aprobado hasta el momento. El Tribunal Constitucional anuló esta ley por invadir competencias del Estado, pero sin duda es un buen punto de partida para regular el autocultivo colectivo, ya que es el resultado de un proceso de diálogo de distintos partidos políticos, expertos, asociaciones de consumidores y juristas.

<sup>1</sup> Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, OECCC, grupo multidisciplinar de expertos sin ánimo de lucro que propone alternativas a los modelos legales prohibicionistas.

Sobre las razones por las que defendemos la necesidad de un Proyecto de Ley sobre autocultivo y uso del cannabis, así como la metodología que hemos seguido para elaborarlo, hicimos una presentación oral en el I Congreso Internacional del Cannabis, celebrado en Catoira (Pontevedra). Este evento recibió duras críticas de algunas entidades antiprohibicionistas al considerar que solo incluía los puntos de vista afines al Plan Nacional Sobre Drogas, entidad que subvencionaba dicho evento y puso broche final al mismo con las conclusiones a cargo del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. Algunas de las afirmaciones que se efectuaron en el citado Congreso pueden no compartirse, pues siguen estando arraigadas en el inmovilismo, especialmente las de contenido jurídico. También es cierto que, desde los primeros contactos, se reconoció por los organizadores la calidad del trabajo que desarrollamos sobre el autocultivo, y aceptaron nuestra comunicación oral, legitimando posiciones distintas a las tradicionalmente mantenidas por los organismos oficiales.

A continuación, un breve resumen de nuestra intervención, recogida en las actas del I Congreso Internacional del Cannabis (Madera y Brotons, 2018), ya que los aspectos detallados son justo los adecuados en una introducción de esta obra. Este resumen resulta pertinente por la importancia simbólica del momento así como por nuestro deseo de transparencia. En el OECCC mantenemos el mismo discurso en todo momento, desde una intervención en una feria cannábica o una asociación, a una reunión con los legisladores, o una comunicación en un congreso oficial. Nuestro mensaje es único, claro y mantenido en el tiempo, el mismo que exponemos en las siguientes páginas.

En cuanto a la metodología, esta propuesta de Proyecto de Ley sigue en sus argumentaciones y conclusiones el método científico, con atención al estudio de textos legales y más de 1.000 casos reales de procedimientos judiciales, así como al contexto histórico y sociológico. Además se realizó una revisión bibliográfica y un estudio exploratorio de autocultivadores.

Al llevar a cabo nuestra revisión histórico social, comprobamos que esta va en paralelo a la jurídica, sobre todo en lo relacionado con el autocultivo, en los puntos históricos importantes que marcan hitos, aparece también un aspecto legal. En especial, medidas criminalizadoras que fracasan. Así, comenzamos a tener conocimiento del autocultivo en España cuando se dan las primeras detenciones y juicios, a partir de 1954, sin que por ello el fenómeno deje de aumentar. Se aprueban textos importantes en el sentido prohibicionista, como son la preconstitucional ley de estupefacientes de 1967, el Código Penal de 1973 o la Convención Internacional de 1988, en 1992. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana impone multas a usuarios por consumir y más restrictivamente por portar cannabis. Tampoco así consiguen cambios en el fenómeno social del consumo y el autocultivo. Incluso, para algunos expertos, este aumento de la represión es el detonante del asociacionismo y la extensión del autocultivo.

Con el crecimiento de growshops y autocultivadores aparece, a partir del año 2000, la teoría de que hay agentes sociales que realizan apología del cannabis, lo que acaba en dictamen de un Fiscal del Tribunal Supremo, el conocido como informe Sazatornil, donde se aclara que la venta de semillas de cannabis y equipación para el autocultivo, así como la publicidad relacionada, son actos sin transcendencia penal. Asimismo, aporta datos técnicos e interpretación de la normativa internacional, para determinar qué se ha de entender por cannabis, así como para dejar clara la exclusión del autocultivo del artículo 368 del Código Penal. Tras ello, llegamos al 2017, donde la ley sigue en el centro de debate, aunque por primera vez se supera el estadio punitivo, para llegar al de la meta-reflexión sobre la legislación misma, con instrumentos como Propositiones No de Ley, Iniciativas Legislativas Populares, preguntas parlamentarias, proposición de ponencias o Proyectos de Ley.

A pesar de la escasa investigación sobre los autocultivadores de cannabis, el presente documento incluye más de 200 referencias bibliográficas. Además, se justifica la propuesta de considerar autocultivo el aprovisionamiento anual de hasta diez gramos diarios,

lo que es inclusivo con la perspectiva de los autocultivadores. Los únicos que aseguran necesitar más cantidad son los que consumen hachís de elaboración propia, así como en algunos casos que emplean tinturas u otros tipos de extracciones para uso medicinal.

La norma que castiga penalmente el cultivo de cannabis es muy escueta y ambigua. El artículo 368 del Código Penal (de aquí en adelante, C.P.) castiga a «los que ejecuten actos de cultivo que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de cannabis». Por otro lado, la jurisprudencia, al aplicar este artículo con respecto al cannabis, considera que esta sustancia no causa grave daño a la salud y le aplica una pena de uno a tres años de prisión y multa del tanto al duplo del valor del cannabis.

Además, según la interpretación jurisprudencial prácticamente unánime de esta norma penal, y he aquí lo relevante, si no existe una intención de difundir esa sustancia a terceros, no existiría delito. A pesar de esto, la policía suele intervenir cuando observa o tiene indicios de que hay un cultivo, al igual que los jueces suelen dictar órdenes de entrada y registro. Sin embargo, no hay datos estadísticos de cuando se deniegan estas solicitudes, aunque nos consta que se da el caso.

Se ha de recordar que nos encontramos ante un delito de peligro abstracto, denostado por la doctrina penal, por la inseguridad y lesividad incierta que conlleva. Y que estamos precisamente ante un tipo, el del artículo 368 CP, claramente deficiente por la ambigüedad que conlleva su interpretación. El Tribunal Supremo así lo ha definido, como un tipo de límites desbocados, lo que genera sentencias totalmente contradictorias, algo intolerable en la aplicación del derecho penal.

A nivel europeo, la Decisión Marco del Consejo de 25 de octubre del 2004 señala el cultivo de cannabis como una de las conductas punibles, si bien excluye esta conducta cuando sus autores hayan actuado exclusivamente con fines de consumo personal, tal como lo defina la legislación nacional.

La posición mayoritaria de la doctrina científica declara penalmente relevante el cultivo y la posesión cuando tal comporta-

miento sea peligroso para la salud pública, peligrosidad que vendrá determinada por la posibilidad de que la materia prima pueda ser destinada a terceras personas (Díez y Muñoz, 2012, p.12).

Todos aquellos cultivos de sustancias tóxicas que no tengan o bien capacidad objetiva para ser difundidos y por lo tanto afectar a la salud pública, o bien subjetivamente no estén destinados a la difusión del consumo ilegal, sino a otros fines, son atípicos por no cumplir con los requisitos generales exigidos (Jubert, 1999, p.120).

Además, al no obtener el autocultivador un precio por la cosecha, dicho elemento contribuiría a no poder subsumir dicha conducta dentro del tipo. Tal y como indica Gómez-Aller (2013): «En los casos de transmisión compasiva, consumo compartido, etc., la jurisprudencia considera que la ausencia de contraprestación es un requisito imprescindible para la atipicidad» (pp. 19-20). Hay doctrina y jurisprudencia que opina que debe concurrir el ánimo de lucro como dato integrador del elemento subjetivo del tipo.

Para parte de la doctrina, por tanto, el autocultivo sería legal, de la misma manera que el consumo. Dado que es evidente que el consumo en un ámbito privado no está sancionado, no puede considerarse ilegal el mismo y, en consecuencia, tampoco su cultivo para ese fin. Aunque esto ha sido interpretado por los tribunales de forma distinta, entendiendo que la tenencia y el consumo son ilegales, sin perjuicio que no sean sancionados. Una acción que no afecta a los bienes o derechos de terceros, o cuanto menos, que no esté sancionada, nunca podría ser considerada ilegal, tanto por el principio de culpabilidad como por la propia configuración del Estado como democrático y liberal.

En los más de 1.000 casos defendidos, desde el estudio jurídico BROTSANBERT<sup>2</sup>, han existido absoluciones con hasta 7 kilogramos, incluso con 14 kilogramos cuando se realizan extracciones del cannabis. Una vez realizado un estudio en profundidad de la jurisprudencia penal existente en España en materia de cannabis, encontramos condenas con solo 250 gramos, dependiendo

---

<sup>2</sup> Abogados especialistas en derecho penal, laboral, administrativo y civil, con más de 15 años de experiencia, nacional e internacional, en temas relacionados con el cannabis.

del aprovisionamiento que se considere. Este aprovisionamiento puede ser el de 5 a 15 días, criterio que ha sido trasladado del enjuiciamiento de otras sustancias estupefacientes, o del cannabis ya procesado. Por otro lado, se ha tenido en cuenta en una mayoría de casos la realidad biológica: que el cannabis tiene un ciclo de cultivo, ya sea anual en exterior, o cuatrimestral en interior, como ha dejado claro una sentencia del Tribunal Supremo (2015a) cuando dice: «El cannabis, como es sabido, es uno de los estupefacientes con ciclo natural de cosecha» (p.26).

Además, en nuestro análisis jurisprudencial, hemos observado variabilidad sobre lo que se considera cannabis: hay sentencias que no consideran necesario la presencia de THC (contrariamente a lo que dice la Agencia Española del Medicamento, órgano competente para establecer este concepto); otras que entienden no incluibles en el objeto del delito las plantas macho; y otras, que la sustancia fiscalizable está compuesta únicamente por las flores y hojas anexas, tal como indica la Convención Única sobre Estupefaciente de Nueva York de 1961. Sin embargo, otras sentencias incluyen también las hojas grandes, los tallos pequeños, o incluso toda la planta.

Asimismo, hemos encontrado resoluciones judiciales donde el consumo medio de los autocultivadores estaría entre los cinco y los diez gramos diarios de cannabis (el Acuerdo del pleno del TS de 19 de octubre 2001 recoge hasta 20 gramos, a partir de informe del Instituto Nacional de Toxicología). Así como también los hay de cantidades menores. Estos datos los hemos obtenido de las periciales psicológicas sobre cantidades de consumo aportadas a los procedimientos judiciales. Por lo tanto, es evidente que nos encontramos ante una regulación del autocultivo que plantea serias dudas en su aplicación, lo que afectaría de modo significativo al principio de seguridad jurídica.

Del estudio de los diferentes procedimientos en los que el estudio jurídico BROTSANBERT se ha encargado de la defensa de los acusados, puede concluirse que, aunque en la mayoría de ellos se consiga una sentencia absolutoria, por no existir el propósito

de traficar con la sustancia, los investigados han tenido que pasar por un largo procedimiento de varios años, y se enfrentan a una posible pena de varios años de prisión y a una multa de varios miles de euros. Esto supone el consiguiente estrés del acusado, así como el estigma social, familiar y/o laboral, además de los gastos de la defensa judicial. En muchas ocasiones, provoca una afección a la salud mental y a la tranquilidad de los acusados, que resulta especialmente grave cuando se trata de consumidores terapéuticos.

La actual configuración legal supone la vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios y cultivadores de cannabis, y compromete el derecho a la seguridad jurídica. Respecto a otros derechos sustantivos, se vulneran derechos individuales (como el de la autodeterminación personal, o el de la salud), en cuanto se impide a los usuarios cultivar su propia sustancia y evitar acudir al mercado negro, en el que no existe un control de salubridad. Esto se acentúa en los casos de autocultivo medicinal, personas que con el autocultivo y uso de cannabis pretenden paliar los síntomas de sus enfermedades.

La actual regulación también afectaría al derecho a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE), por el agravio comparativo que sufren los cultivadores y usuarios de cannabis comparados con los consumidores de otras drogas, como el tabaco o el alcohol.

Existe también una afección al derecho a una información veraz (artículo 20.1 CE), pues la criminalización impide que la misma pueda darse, ya que el cannabis es una sustancia que puede producir tanto beneficios como perjuicios, por lo que más que prohibirla o promocionarla, lo correcto sería que desde los poderes públicos y los agentes sociales se diese una información adecuada, sin mitos ni falsedades. El cannabis ni es tan malo, ni es tan bueno. El cannabis, como otras sustancias, es susceptible de provocar problemas de salud si se lleva a cabo un consumo de abuso; pero también puede paliar los síntomas de determinadas enfermedades, además de poder ser utilizado de manera lúdica para socializarse o simplemente por placer, sin crear con esto ningún problema (como sucede con el alcohol en la mayoría de la población, seguramente, con menos riesgos).

Pasando a un plano más filosófico y ontológico, la actual regulación afecta al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto no deja libertad a cada individuo para que se realice a sí mismo de la manera que considere más conveniente, siempre que no afecte a los derechos de otros ciudadanos o a bienes jurídicos colectivos.

Como afirma un voto particular de una sentencia del Tribunal Supremo (2016): «la salud individual no puede protegerse penalmente contra la voluntad libremente formada de su titular. El cultivo de cannabis exclusivamente para el propio consumo es un acto de libre desarrollo de la personalidad en el que no hay lesividad alguna». En este sentido, Díez-Picazo (2003) ha señalado que: «El derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado, que cree saber mejor que las personas lo que conviene a estas y lo que deben hacer con sus vidas» (pp. 64-66).

Es decir, los ciudadanos tienen que elegir el sentido de su propia existencia de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas o gustos, entre otros factores.

Todo lo anterior se ha de considerar desde el prisma del principio de proporcionalidad: así, el Tribunal Constitucional (1995) ha llegado a afirmar que «se ha de exigir en el ámbito del derecho sancionador, que la medida objeto de control sea proporcionada o equilibrada, por derivarse de la misma más ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto».

Con los mensajes criminalizadores no se logra la verdadera protección del bien jurídico en cuestión: la salud pública. Este tipo de mensajes producen efectos perniciosos, como la desacreditación de las instituciones y agentes sociales intervinientes, tales como las asociaciones o los clubes de usuarios y consumidores. Por el contrario, con mensajes sensatos, contacto libre con los usuarios y campañas informativas, así como con una adecuada regulación de los usos de la sustancia, se aumentará la efectividad en la solución del problema. Además, se producirá un notable ahorro económico, pues la movilización de fuerzas de seguridad, fiscales y jueces es

matar moscas a cañonazos, y esto, además de inútil, resulta costoso en pólvora.

Después de tantos años de buscar la salvación en medidas sancionadoras y criminalizadoras, imposible afirmar que se hayan obtenido resultados satisfactorios. Es significativo que el consumo de sustancias fiscalizadas, entre ellas el cannabis, no ha dejado de aumentar en nuestro país en los últimos años.

A todo ello hay que añadir los costes y demás daños colaterales de la actual situación de ilegalidad del cannabis, tales como encarcelamientos masivos, falta de protección de la salud, proliferación del narcotráfico y lo que ello conlleva (violencia, corrupción y otras externalidades negativas) o pérdida de ingresos para la hacienda estatal.

Además, la regulación relativa al cultivo de cannabis se encuentra desfasada, pues básicamente se trata de normas preconstitucionales (Ley de 1967 y Orden Ministerial de 1963) y del ambiguo artículo 368 del Código Penal. Esta situación es una máquina de generar inseguridad jurídica en ámbitos varios. Resulta urgente una nueva regulación, donde se acepte la licitud del autocultivo y del uso personal del mismo, además de establecer los parámetros en que este debe llevarse a cabo, siempre con especial atención a los derechos fundamentales.

Además del Congreso Internacional del Cannabis de Catoira, los autores de este Proyecto de Ley del Cannabis hemos asistido a los principales Congresos en materia de cannabis llevados a cabo desde principios de siglo xxi, como, por ejemplo, *Actualización en uso y abuso del cannabis* (Universidad de Oviedo, Gijón, 2001), *Cannabis: Mitos y realidades* (Plan Nacional Sobre Drogas, Madrid, 2003), *II Seminario de formación sobre el cannabis* (Plan Nacional sobre Drogas, Madrid, 2005), o el *Congreso 20 años FAD*, o *Sociedad, familia y drogas* (Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción, Madrid, 2006).

Los debates generados en el seno de estos congresos y jornadas resultaron poco fructíferos, por lo que entendemos que es ya tiempo de superar las etiquetas que encasillan a los precursores y a

los detractores del cannabis en posiciones estáticas. El lenguaje de la confrontación conviene dejarlo atrás. Ofrece mejores resultados analizar las motivaciones que subsisten tras cada posición, buscar los puntos en común de todos los actores, hasta lograr nuevos consensos. Por ejemplo, todas las partes están conformes en que debe protegerse a los menores de edad, así como todos deben compartir el deseo de buscar políticas sobre el cannabis lo más eficaces posibles en cuanto conjugación de salud y respeto de los derechos individuales.

Como forma concreta de regulación, el Proyecto de Ley que aquí se presenta considera como autocultivo hasta un máximo de aprovisionamiento de diez gramos diarios durante 365 días, cantidad inclusiva y razonable, pues en la actualidad se considera de notoria importancia a partir de diez kilos (20 gramos diarios por 500 días). Hemos podido constatar, tanto en el trabajo de campo previo como en su presentación por toda la geografía española, que esta cifra gozaría de gran apoyo entre los cultivadores.

Cualquier regulación en un Estado democrático ha de tener en cuenta en primer lugar a las personas. El autocultivo y uso de cannabis tienen el respaldo de una gran normalización social, por su amplio recorrido histórico y por su objetivo de búsqueda del autoabastecimiento. Su regulación eliminará la inseguridad jurídica y empezará un nuevo acuerdo social sobre el cannabis.

**Héctor Brotons**

**Hugo Madera**

**Junta Directiva Observatorio Europeo de Cultivo y**

**Consumo de Cannabis**

**Catoira, 25 de noviembre del 2017**

# 3.- Autocultivo y autocultivadores de cannabis en España.

## Desarrollo del movimiento

*Hugo Madera*

### 3.1 El concepto de autocultivo

El concepto del autobastecimiento acompaña a la humanidad desde sus principios y está en pleno resurgimiento. El británico John Seymour (2004), uno de los pioneros de este renacer, habla de autosuficiencia como: «progreso hacia una nueva y mejor calidad de vida, hacia una vida más grata», «aceptación de una realidad plena por lo que se hace o deja de hacer», «alegría que nace de ver el desarrollo completo de cada tarea», «alimentos frescos, buenos y orgánicamente elaborados» (p.7).

Aunque el cultivo de vegetales para consumo propio está en auge en la actualidad, apenas se utiliza el término autocultivo en este contexto, sino autosuficiencia, autobastecimiento, huerto urbano o huerto familiar. Podemos comprobarlo en los títulos de los manuales más famosos, como el citado *La vida en el campo y el horticultor autosuficiente* (Seymour, 2004) o *El huerto familiar ecológico* (Bueno, 2004). El diccionario de la RAE (2014) incluye términos como autosuficiencia o autoconsumo, que define como: «estado o condición de quien se basta a sí mismo» (p.247) y «consumo de bienes y recursos, especialmente agrarios, por parte de quien los produce» (RAE, 2014, p.244), respectivamente. En cambio, falta el término autocultivo. Al introducir autocultivo en el buscador Google, con un navegador puesto en modo anónimo, podemos comprobar que el concepto está muy ligado al cannabis. Durante

la redacción de este texto, en la primera página de Google casi todos los resultados están relacionados con el cannabis, a excepción de uno relacionado con el autocultivo de setas. En las búsquedas relacionadas que ofrece Google ocurre lo mismo: a excepción de una búsqueda relacionada con setas, el resto tiene que ver con cannabis.

¿Por qué los cultivadores de cannabis han preferido de forma tan masiva el término autocultivo? Para la redacción del presente capítulo realicé varios cuestionarios a autocultivadores, tanto por mail como en el foro [cannabiscafe.net](http://cannabiscafe.net)<sup>3</sup>, además de entrevistas telefónicas a informadores de especial relevancia. Uno de estos informantes fue Juan Carlos Abellán, conocido como Karulo, la primera persona que vendió en España semillas de cannabis aplicándoles IVA. Una de las máximas de Abellán es «autocultivo para autoconsumo son las palabras mágicas que nos han traído hasta aquí, cuanto más nos alejamos de ellas, más aumenta el peligro». Durante el acto de cultivo, hay un peligro de ser acusado de cultivar para la venta y ser juzgado por tráfico de drogas (delito contra la salud pública). Quizás por eso, el inconsciente colectivo de los cannabicultores ha optado por la palabra autocultivo para definirse, ya que hace un especial énfasis en que ese cultivo es para consumo propio, por lo que carece de relevancia penal.

Al igual que algunos defensores de la autosuficiencia agrícola, algunos autocultivadores de cannabis asocian significados simbólicos profundos: «Es también, sin lugar a dudas, un arte [...], actividad enriquecedora que conecta el espíritu con la naturaleza» (Reñé, 2002).

Además, adquiere un elemento de autosuficiencia y desconexión con la lógica comercial. Así, el primer manual de Rosenthal (1978) traducido al español incluía una reseña donde aseguraba que «Ed Rosenthal quiere que los consumidores de cannabis eviten a los camellos. Tiene una propuesta que, según él, ayudará a

---

<sup>3</sup> El foro [Cannabiscafe.net](http://Cannabiscafe.net) reúne autocultivadores y usuarios de cannabis de toda España, lo mantiene la AICC, primera asociación de usuarios de cannabis inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.

descomercializar el mercado de la hierba» (p.75). Otro ejemplo es el catálogo de Positronics (1994), donde afirman estar basados en los viejos ideales hippie, por lo que deseaban: «ser más que un punto para comprar. (...) Positronics no solo da un buen servicio como fabricante, sino que te ofrece asesoría solida e integral desde el punto de vista hippie» (p.3).

### 3.2 Inicios históricos del autocultivo

Sin duda, el autor de referencia para entender la historia de los autocultivadores en España es Juan Carlos Usó, en sus numerosos artículos ofrece detalles de gran interés.

Explica Usó (2012) que:

«La moderna ola del autocultivo de cannabis en España nace durante el siglo xx en el protectorado español en Marruecos, donde las autoridades practicaban la tolerancia con la costumbre local de cultivar cannabis, siendo en esta zona del Rif donde algunos españoles comenzaron a cultivar cannabis. Cuando comenzó la guerra civil, llegaron a la península las tropas africanas, como los legionarios y la denominada *guardia mora* al servicio de Francisco Franco, quienes trajeron consigo sus costumbres, entre ellas la de cultivar y consumir Kif. Tras la victoria de las tropas del General Franco, serian estos soldados los primeros en organizar la importación y venta en España del Kif marroquí, que se comenzó a extender entre las clases populares en los años 40 del Siglo XX, con la tolerancia del Régimen, e incluso había quien plantaba el cáñamo en terreno propio.» (p.3).

Pero el abastecimiento fallaba en muchas ocasiones, así que algunos usuarios comenzaron a cultivar su propio cannabis. Desde sus inicios en España, el autocultivo de cannabis fue una actividad que se realizaba en privado y con discreción, por lo que solo tenemos constancia de estos pioneros del autocultivo por las noticias de sus detenciones. Verbigracia, en 1954 aparece una plantación en

Alcalá de Guadaira (Sevilla) y otra en Vega de Tajo (Toledo). En 1966 aparecen tres pequeñas plantaciones en Langreo (Asturias). Usó (2009) destaca que ya existe autocultivo medicinal del cannabis:

«Los cultivadores eran obreros metalúrgicos, casados, con hijos, sin antecedentes penales, que habían residido en Marruecos y que, ante la dificultad de proveerse de grifa en tierras asturianas, habían optado por sembrar cannabis cerca de casa. Por lo demás, se da la circunstancia de que en sus declaraciones ante la policía uno de ellos confesó que tenía intención de regalarle un maletín lleno de grifa a un hermano suyo que vivía en Alcalá de Henares (Madrid) y padecía “una lesión en la columna vertebral como consecuencia de un accidente minero”, lo cual sugiere la existencia de ciertos empleos terapéuticos, más allá de los meramente lúdicos o recreativos.» (p.50)

El aumento del precio y del número de consumidores en los años 70 llevó a cada vez más usuarios hacia el autocultivo, ya que el cannabis se adaptaba con facilidad al clima español. La policía iría descubriendo plantaciones por toda España. Uso (2009) expresa:

«En julio y agosto de 1973, en dos parajes próximos a Manresa (Barcelona); en agosto de ese mismo año, en un lugar no determinado cerca de Madrid; en abril de 1974, en la Ribera de Navarra; en mayo de ese mismo año, en un punto no concretado cerca de Valencia; en octubre de 1974, en el término municipal del Puerto de Santa María (Cádiz), en mayo de 1975, en una finca de Torremolinos (Málaga), etcétera.» (p. 51).

Incluso se llegó a cultivar cannabis en la Cárcel Modelo y la de Carabanchel, con cómicas explicaciones. Según Usó (2009) el director de la Modelo aseguró que así no se entretenían organi-

zando fugas (p. 54). En el periódico *El País* (1979) se detalló que el director de Carabanchel primero pidió que no se hiciera público y después aseguró que todas las plantas eran machos.

En los años 70 el autocultivo también se extendía en Estados Unidos, sobre todo en California, que en la actualidad ya ha hecho grandes cambios en su regulación del cannabis. Explica Escohotado (2002) los orígenes de los actuales referéndums sobre el tema:

«De hecho, ya en 1972, una iniciativa de hípsters y progresistas californianos había obtenido notable éxito al solicitar la despenalización para el uso y tenencia de la marihuana, incluyendo el cultivo para uso propio. Prácticamente sin fondos y luchando contra una oposición “vigorosa y bien financiada”, obtuvo los cientos de miles de firmas en todo el estado para que la iniciativa fuese sometida a plebiscito. La llamada Proposición 19 (Iniciativa de California sobre la Marihuana) no logró triunfar entonces, aunque sí obtuvo el 33 por 100 de los votos emitidos. A partir de esas fechas, y sobre todo desde 1976, la posesión de cáñamo deja de constituir delito en California, donde los tribunales rechazan detenciones policiales justificadas por ese concepto. Aunque no fuese reconocido oficialmente, el cultivo privado de marihuana pasa a ser una de las explotaciones agrícolas habituales, dentro de ese estado y la nación en general.» (p. 980).

### 3.3 Asociaciones y autocultivo

El 21 de abril de 1987 se presentan los estatutos de la Asociación de Consumidores De Cannabis (ACDC, en adelante), situada en Madrid, llega a contar con 150 miembros. «Estaban más centrados en la legalización del hachís que en el autocultivo» (Manzano, 1987).

La asociación que marca el inicio de la ola asociacionista cannábica es la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC, en adelante), fundada el 20 de junio de 1991, en el ambiente de la referencia en el comic *underground*, desde donde

se articulaba parte de la cultura de Barcelona y toda España. Inicialmente se intentó registrar como asociación de usuarios, pero las autoridades no lo permitieron. Entonces, se inscriben como estudiosos, con referencia en su nombre a Ramón Santos, abogado fallecido unos años antes de la fundación de la entidad, que había prestado asesoría legal a muchos consumidores de cannabis.

En 1992 se aprueba una nueva Ley de Protección sobre Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como «Ley Corcuera». Incrementa la represión sobre los usuarios de cannabis, con registros corporales (cacheos) y sanciones económicas significativas, cuyo importe ha seguido en continuo aumento hasta hoy. Diversas opiniones sugieren que la aparición de esta norma incrementó el autocultivo.

Las políticas de control impuestas desde 1992 han tenido otras consecuencias inesperadas. En primer lugar, han ayudado a extender el cultivo casero, en el que ahora participan decenas de miles de usuarios en nuestro país. Así, el cultivo de cannabis (marihuana) para el consumo propio y compartido con amigos ha dado un nuevo sentido al consumo y ha favorecido el interés de muchos usuarios por muchos aspectos de la cultura cannábica. Recuérdese que es bastante excepcional que alguien cultive su propia droga. El cultivo casero es la avanzada de la cultura «cannábica» en España y se percibe por los militantes del movimiento como una forma de resistencia frente a la prohibición (Gamella y Jiménez, 2005, p.45).

Es paradójico que la entrada en vigor de la mencionada Ley de Protección sobre Seguridad Ciudadana incremente el autocultivo. Otra razón para dudar de la eficacia de la utilidad y eficacia de las estrategias prohibicionistas en los objetivos declarados (Uso, 2005, p.30).

Tras ARSEC aparecen otras muchas asociaciones, utilizando a modo de ejemplo a seguir los Estatutos de la pionera, llegando a fundarse la coordinadora Estatal por la Normalización del Cannabis, un grupo de personas y entidades que no llegó a inscribirse legalmente, pero que sirvió de germen para la estructuración del movimiento cannábico en España.

La principal acción de la ARSEC fue un cultivo colectivo, realizado en Montbrió. Tras la intervención policial del cultivo, fueron juzgados y absueltos los impulsores del mismo. Tras el recurso de fiscalía, en 1995 el Tribunal Supremo condena a la Junta Directiva con una pena de cuatro meses de arresto y multa de 500.000 pesetas para los cuatro condenados. A pesar de ser un movimiento incipiente, el activismo cannábico consigue articular varias respuestas de gran calado, cuyas consecuencias llegan hoy en día. Así, por ejemplo, ARSEC publicó *Cannabis. Manual de cultivo para el autoconsumo* (ARSEC, 1997) que ayudó a extender el cultivo de autoabastecimiento de cannabis por toda España; y, asimismo convocaron en 1996 en Madrid la primera manifestación cannábica, actividad que sigue realizando en nuestros días.

La Coordinadora Estatal por la Normalización del Cannabis, como hemos indicado, nunca llegó a registrarse, pero consiguió lanzar en 1997 la campaña «Contra la prohibición, me planto», que extendió el autocultivo, tanto individual como colectivo. En dicha campaña se defendía el derecho a la autoproducción de cannabis y se planteaba la realización de plantaciones colectivas para apoyar a los miembros de la ARSEC, que en ese momento se hallaban pendientes de sentencia del Supremo. También se llamaba a los usuarios de cannabis a «plantarse y plantar», a fin de hacer imposible la aplicación de la ley (Barriuso, 2005, p.101).

La Asociación de Estudio del Cannabis de Euskadi (Kalamudia) llegó a realizar varios cultivos colectivos en los años 1997, 1999 y 2000. Estos cultivos colectivos exitosos, unidos al informe de Muñoz y Soto, fueron las bases de la extensión posterior de los clubes cannábicos. En el año 2001 se resucita la idea de la coordinadora de asociaciones, y Martín Barriuso realizó su primera intervención en el Parlamento, ante la Comisión Mixta del Problema de las Drogas en donde el reputado activista analizó los resultados de la política de prohibición del cannabis y ofreció alternativas a esa política y, en segundo lugar, hizo un balance y propuso una modificación de la Ley de seguridad ciudadana en los siguientes términos:

«Proponemos, en primer lugar, la aplicación literal del artículo 19.2 de la Ley, es decir, que la diligencia de identificación y registro de los objetos personales se limite exclusivamente a la investigación de delitos, y solamente hacia aquellas personas sobre las que recaigan sospechas de haber participado en algún delito concreto y no la aplicación que se está haciendo en este momento. Pensamos que ello es bien sencillo, ya que la norma necesaria para que esto sea así es una circular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que su actuación diaria se ciña a lo que dicta la ley que, por cierto, habla de registros superficiales y no de lo que se suele hacer en estos momentos, que es un registro exhaustivo de todas las pertenencias, bolsillos, etcétera.» (Barriuso, 2001).

Esta misma propuesta de Barriuso es la que ha acabado por consagrarse con la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad (2018).

A ARSEC le siguieron, por citar solo las que alcanzaron mayor relieve, AMEC en Madrid, SECA en Aragón, Kalamudia en Euskal Herria, ARSECA en Andalucía, Bena-Riamba en Valencia, y así un largo etcétera.

Un grupo de foreros hispanohablantes acabó fundando el foro [cannabiscafe.net](http://cannabiscafe.net). Para tener cobertura legal y una cuenta de banco donde domiciliar gastos, inscriben, por primera vez, una asociación cannábica en el registro nacional, la Asociación de Internautas del Cannabiscafé (AICC, en adelante) (Madera, 2002). Ese mismo año 2000, el Cannabiscafé celebra la «I Cannabis Parade» en el pueblo ocupado de Navalkejigo. Allí llega un representante del primer Club Social de Consumidores (CSC, en adelante), recién inscrito. En su exposición indica que acaba de registrar el primer club, que la legalización ya estaba allí y que era necesario relanzar una nueva coordinadora y registrarla legalmente, ya que la anterior no se llegó a registrar. Pidió ayuda a los asistentes, activistas de distintas localidades para fundar lo que acabó siendo la Federación

de Asociaciones Cannábicas (FAC, en adelante). Los socios de la AICC comentaron que no estaban interesados en los CSC, pues contaban ya con su propia estrategia, en la que se apuesta por el autocultivo. Se asegura por el representante del primer CSC que la idea era que la nueva coordinadora solicitara que los poderes públicos autorizaran el cultivo de 25 plantas por cultivador, lo que convenció a los asistentes, quienes dieron el apoyo solicitado. Finalmente, en el año 2003, junto con otras entidades y asociaciones, se registra la nueva coordinadora, bajo el nombre de Federación de Asociaciones Cannábicas, con estatutos realizados por el abogado del cannabis Warnock y presidencia de Fernanda de la Figuera.

Mientras tanto, se comenzaron a crear otros Cannabis Social Clubs (CSC). Así, en la reunión de Oñati se presentaron cinco clubes con actividad real, todos estaban en Euskadi: Pannagh, Ganjazz, Bhang, Paotxa y Ama Lurra (Val, 2004). Los CSC comenzaron a aparecer por toda España y se acabaron convirtiendo en la mayoría de los federados de la FAC. En la actualidad, aún sobreviven algunas de las asociaciones tradicionales, como AICC, AMEC, Ave María Vigo o Alacannabis.

Durante estos años la FAC continuó con su actividad política, en la que destacan otras tres intervenciones de Barriuso (2007) en el Parlamento español: el 17 de abril habla sobre cannabis y jóvenes; el 19 de noviembre del 2007 entrega 18.000 firmas contra Ley de Seguridad Ciudadana (*El Mundo*, 2007) y el 28 octubre de 2014 vuelve a intervenir en el Parlamento en nombre de la FAC, en compañía de otras dos plataformas, FEDCAC y PAUC. También la FAC ha realizado intervenciones en otros parlamentos regionales como los de Cataluña, Euskadi, Aragón o Baleares, además del Parlamento y Senado Español y el Parlamento Europeo.

### 3.4 Growshops

En 1997 se abre en España la primera tienda de cultivo interior, Houseplant, con luminarias, fertilizantes y sustratos específicos. Así me resume esta aventura su fundador, Enrique Lastra:

«Estuve en Estados Unidos estudiando varios años, allí fumaba yerba de mucha calidad y conocí sus hydroshops, cuando volví a España no me gustaba nada el hachís que se vendía aquí, por lo que subía mucho a Holanda para fumar buena yerba. Allí también conocí las growshops holandesas, cada vez iba más a Holanda, hasta que un día se me ocurrió que, ya que subía allí tanto, podía abrir una tienda de cultivo de interior para ganarme la vida. Han sido años de mucho esfuerzo, aunque siempre he intentado pasarlo bien en el trabajo y tener buena relación con los clientes. Ahora Houseplant pasa los 20 años, ¿quién iba a decir que llegaríamos tan lejos? (Entrevista personal, Enrique Lastra, noviembre 2016)».

Tras el ejemplo de Houseplant empiezan a abrir otros establecimientos en la misma línea. La explosión llega en 1999, cuando Juan Carlos Abellán abre L'Interior Growshop y empieza a declarar la venta de semillas de cannabis y pagar los correspondientes impuestos, incluyendo el IVA. Abellán era hijo de un autocultivador pionero que tenía un cultivo de guerrilla, sobre este punto me explica:

«Mi padre y sus amigos fumaban hachís que les traían del sur, pues él era de Jumilla, también Kif, o sea la planta machacada y mezclada con taba, un tabaco negro. Ya a los cuatro o cinco años me llevaba al bar de su amigo Pitoto, que cerraban para jugar partidas de cartas y dominó. Yo los veía quemar una piedra y luego fumarla y preguntaba qué era y me decían que eran piedras mágicas de Egipto, lo que me llamaba mucho la atención. Los fines de semana me llevaba con sus amigos a una zona de parrillas en Mataró, mientras unos preparaban la carne, otros atendían un cultivo de guerrilla que tenían entre unos cañaverales, un día conseguí que uno de sus amigos me diera unas semillas y así empecé a cultivar. (Entrevista personal Juan Carlos Abellán, noviembre 2016)».

Tras estos inicios, Abellán se metió en el activismo con ARSEC, el primer cultivo colectivo, y la apertura de L'Interior. Tenía claro que esa tienda no era solo vender material, sino difundir información, así me detalla:

«El 20 de junio de 1991 abre ARSEC, luego hicimos el primer cultivo colectivo en Montbrió en 1993, en tierras que nos cedió el conde de Reus. También publicamos el manual de autocultivo. En 1995 hacemos un viaje a Ámsterdam que me influencia mucho, hasta salimos en un documental de Canal+ que se llama *Colgados en Ámsterdam*. En aquel viaje visité la Casa de Paz de Drogas y también Positronics, donde pude ver las bases del cultivo de interior. A mí al principio me costaba gastarme 7.000 pesetas en un paquete de diez semillas. En la ARSEC regalábamos las semillas a puñados y con 7.000 pesetas me podía pasar una semana en Ámsterdam, pero cultivaba y veía que no conseguía los mismos resultados que fumaba en Holanda. Así que me decido a comprar mi primer paquete de semillas. Cuando las cultivo, me doy cuenta de que es la base de un cultivo de calidad, sin buenas semillas es imposible sacar buena marihuana, para crear un cambio de conciencia hacían falta semillas. Entonces me asesoro con un amigo juez, miembro de Jueces para la democracia, José Luis Félix. Cuando ve el catálogo de Sensi Seeds, me dice que parecía un álbum de cromos de colección, que las podía vender como artículo de coleccionista. Así que me puse a organizar L'Interior. Tenía claro que la tienda era una forma de activismo, para difundir el autocultivo para el autoconsumo. El término *growshop* lo acuño en mi primer anuncio. Inauguro en abril de 1999, ya tenía antes la tienda preparada, pero no quise abrir hasta recibir los primeros paquetes de semillas que fueron de Serious Seeds. Así que me senté en unos sacos de sustrato que tenía allí y esperé a que me viniera a detener la policía. Nunca me vienen a detener, así que meses después otros

empiezan a vender semillas, como lo hacía por activismo, le expliqué a los demás la manera de abrir su propia tienda. (Entrevista personal Juan Carlos Abellán, noviembre 2016)».

Las *growshops* empiezan a abrir por todos los rincones de España, lo que ayuda a generalizar el autocultivo. Nos dice Marín (2008) que:

«Los “growshops” son empresas que además de vender productos para el cultivo de cannabis, ofrecen asesoramiento a sus clientes en cuestiones principalmente sobre el mismo. Tienen, además, funciones latentes; una de ellas sería la de poner en contacto a personas con los mismos gustos e intereses. Muchos se convierten en centros de reunión de personas donde tienen animadas conversaciones sobre todo tipo de temas relacionados con la planta: desde germinación, periodos de iluminación, utilización de abonos, formas de consumo hasta cómo crear su propio hachís.» (p.458)

Con el desarrollo de este tipo de negocios, comienzan a crearse asociaciones de *growshops*, como la Asociación Andaluza de Comerciantes de Grows, ACOGROS; Asociación Central del Cáñamo, ACECA; Gremi Growshops Catalunya, o Asociación de Empresarios del Sector del Cannabis, AESCANN. Sus objetivos serían, principalmente, lograr un epígrafe propio en el impuesto de actividades económicas, ya que, a pesar de su legalidad, se les mantiene en un vacío legal; asimismo también apuestan por desarrollar códigos éticos en el sector. De hecho, AESCANN (2014), en su Declaración de Intenciones indica: «Es realmente imprescindible, además de la obtención del epígrafe específico de nuestro sector, desarrollar un código ético de conducta profesional que regule las relaciones y transacciones entre todos los agentes que operan en el sector».

Las *growshops* son la parte más visible de un sector comercial muy completo, que incluye mayoristas, fabricantes de aparatos y

productos de cultivo, bancos de semillas, y varias ferias, entre otros. Así, la edición 2017 de la *International Highlife Guide* incluye en su sección española 890 *growshops*, 100 mayoristas y 70 bancos de semillas, además de otros epígrafes. Otro ejemplo es el catálogo del mayorista Hortitec, su primera edición fue la del 2004/2005, tenía 60 páginas y en su declaración de principios afirma que aspira a ser «el más completo de su clase» (Hortitec, 2004). En su edición del año 2018/2019 alcanza las 876 páginas, con unas 14.000 referencias en su versión digital (Hortitec, 2018).

### 3.5 Bancos de semillas

Los bancos de semillas de España son destacados a nivel internacional, sobre todo en variedades feminizadas, autoflorecientes o con CBD (cannabidiol). Tradicionalmente la simiente se encontraba en yerba importada, además del encargo por correo a los bancos de semillas holandeses pioneros, como Sensi Seeds. También estas se compartían entre amigos. El primer banco de semillas ibérico continuó esa esencia *amateur*, ya que surgió de una asociación, Associació Lliure Antiprohibicionista (ALA, en adelante). Un anuncio de un banco de semillas propio, con una variedad Indica, una variedad Sativa y una variedad Skunk, apareció en el año 1999, en el número cuatro de su revista, HUL (ALA, 1999, p.26).

Sería a finales del año 2001 cuando se da el salto a la profesionalización, con la presentación de los bancos de semillas, Cannabiogen y Good House Seeds. Pronto aparece un anuncio a doble página de Cannabiogen (Yerba, 2002), así como un reportaje (Yerba, 2002b). En la revista *Cáñamo* (2002), divulgan un anuncio de Good House Seeds, mientras que en diciembre de ese año aparece una entrevista a este banco de semillas (Gallego, 2002).

En el 2005 aparecen los primeros bancos de semillas feminizadas Dinafem (Madera, 2012) y Sweet Seeds (Madera, 2013). La novedad de estas variedades es que toda la descendencia son plantas hembra. Otra innovación fue el desarrollo y mejora de las variedades autoflorecientes, que no dependían del fotoperiodo, por lo que podían florecer en cualquier época del año. En el año 2006,

Buddha Seeds introduce una de estas variedades (Madera, 2006). Sweet Seeds presenta en 2013 las variedades Fast, fotodependientes, con un toque de genética autofloreciente que adelanta su floración (Madera, 2017, p.73).

También España ha liderado la ola de semillas con nuevos perfiles de cannabinoides. Empieza con Reggae Seeds en 2006, cuando presenta una colección completa de variedades con presencia de CBD (Madera, 2014). Resin Seeds ofrece en 2008 una semilla feminizada alta en CBD, de la que surge la expansión internacional de estas variedades (Madera, 2016).

Las variedades CBD que han salido de la crianza española se hacen famosas por todo el mundo desde el 2009. Son la base de las variedades CBD que se cultivan en Israel (Madera, 2014), América (Madera, 2016) o Suiza (Madera, 2017). Hasta las variedades que venden las farmacias de Uruguay fueron realizadas por criadores españoles (Madera, 2017b).

La crianza española sigue en auge. Por ejemplo, a principios de 2017, Dinafem ofrece de forma masiva y publicitada una variedad de dominancia CBD feminizada (Madera, 2017c), dentro de una gama muy completa de variedades CBD con distintos ratios de THC y CBD, resultado de años de trabajo (Madera, 2016b y Madera, 2016c). También Elite Seeds presentó estos años importantes novedades, así, en 2015 introdujeron semillas autoflorecientes con la misma cantidad de CBD que de THC (Madera, 2016d, p. 19), mientras que en 2017 dieron a conocer una nueva fuente de CBD (Madera, 2017c), así como variedades con altos contenidos en CBDV y THCV estabilizados (Madera, 2017d).

En países como Uruguay o Colombia los criadores ibéricos reciben registros fitosanitarios, y las autoridades les acogen como expertos de relevancia mundial. Mientras tanto, en España, esos mismos criadores no reciben ninguna facilidad de la AEMPS para registrar sus variedades vegetales, lo que les deja indefensos frente al plagio, a la vez que facilita que otros países hagan negocio con los frutos de la crianza española. Esta situación dilapida todos los impuestos y riqueza que podrían aportar estas empresas, si se les permitiera trabajar sin trabas.

### 3.6 Medios de comunicación

Dentro del desarrollo de las iniciativas empresariales y culturales relacionadas con el mundo del cannabis, merecen especial atención las revistas con esta temática.

En 1997 nacen tres revistas: *Cáñamo*, *El Cogollo* y *Mundo High*. En 2002 surge la edición española de *Soft Secrets*, fundada en Holanda en 1985. En estos años aparecen y desaparecen diversas revistas, pero siempre hay una variada oferta. En la actualidad continúan *Cáñamo* y *Soft Secrets*, además de dos revistas editadas por Feria del Cáñamo: *Cannabis Magazine* y *El Cultivador*. A esto se suman varias televisiones por internet, como Marihuana Televisión y Underground TV, así como numerosos portales web, como el histórico *lamarihuana.com*. Desde 1997 los medios de comunicación cannábicos han difundido una cantidad ingente de información sobre autocultivo, activismo y legalidad, constituyéndose como una herramienta eficaz de la cultura cannábica. «Se puede hablar específicamente de la cultura del cannabis. Esta cultura es especialmente relevante para la aparición del cultivo en los países desarrollados [...]. Resulta difícil imaginar que pueda ocurrir algo similar con otras drogas más duras: no existe una “Copa de la heroína” y tampoco hay libros o revistas llamados *Heroin Times* o *Cocaine Culture*» (Decorte, 2012).

### 3.7 Prohibición: fracasos y despilfarros

En el año 2000 comienza una reacción por parte de los activistas, consumidores y demás interesados en el mundo del cannabis, siendo un punto de inflexión el *Estrategias y organización de la cultura pro-cannabis*, donde se asegura que: «Se trata de una dinámica cultural promovida y ligada a los valores de un sector concreto de la población de mediana edad, alejado de las condiciones culturales y motivaciones del consumo de cannabis de los más jóvenes. Esta estrategia sirve para abrir nuevos espacios comerciales, profesionales y de poder.» (Calafat, *et al.*, 2000, p. 231).

Estas revistas alcanzan una significativa relevancia social, hasta el punto de que, en el año 2002, el Delegado del Gobierno para el

Plan Nacional Sobre Drogas plantea a la Fiscalía General del Estado si estas publicaciones, así como los revistas y *growshops*, pudieran suponer algún tipo de apología del consumo de estupefacientes (Balbas, 2002). Pero la iniciativa consiguió unos efectos totalmente contrarios a los pretendidos, pues Fernando Sequeros Sazatornil (2003), fiscal del Tribunal Supremo, publica el estudio *La venta de semillas de cannabis, de equipos y materiales para su cultivo, así como su propaganda, como actos con trascendencia penal*, donde afirma que: «la venta de semillas de cannabis y equipos para su cultivo, así como su publicidad, es legal, siempre que no se excedan los límites del autocultivo».

Se dan otras iniciativas tendentes a limitar la actuación de estos actores del sector cannábico. Así se crean unos grupos de trabajo en esta línea (Efe, 2003), llegan a publicar un documento, denominado *Informe sobre el cannabis 2004: análisis de situación y propuestas de actuación*, publicado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (GESD, 2004), aunque nunca llegó a desarrollarse.

Sobre la expresión cultura procannabis y la teoría de que los autocultivadores adultos perjudican a los jóvenes, Barriuso fue muy claro en su segunda actuación en el Parlamento español:

«La teoría de una especie de conspiración para fomentar el consumo de cannabis entre los jóvenes es una simple cortina de humo para evitar que se hagan preguntas embarazosas en voz alta acerca de para qué sirven los abundantes fondos públicos (y privados) destinados a evitar la extensión del uso de drogas ilícitas, especialmente entre los más jóvenes. Rechazamos la existencia de tales conspiraciones. Es más, nuestro colectivo lleva tiempo avisando de lo que estaba pasando. Por ejemplo, en mi intervención del año 2001 (...). Como colectivo de personas adultas usuarias de cannabis, creemos que se están coartando nuestros derechos y libertades con la excusa de obtener unos resultados que no solo no llegan nunca, sino que cada día parecen más lejanos.» (Barriuso, 2007).

Las hipótesis de Calafat también fueron puestas en tela de juicio por otros investigadores sobre el cannabis.

«Este análisis contiene muchos elementos de interés, pero su carácter hostil al fenómeno estudiado le resta valor como intento de comprensión de un movimiento social que, aún en sus exageraciones o inexactitudes, responde a percepciones y valores ampliamente compartidos por millones de jóvenes europeos. Pasa por alto, a nuestro juicio, dos aspectos que resultan cruciales en el análisis de esta facción y la tradición en que se basa. Primero su carácter popular, que surge de abajo hacia arriba, es decir, que el aprecio masivo por el cannabis es previo a las asociaciones, publicaciones y tiendas de semillas y revistas, por mucho que ambos se retroalimenten. Segundo, que, tratándose en gran medida de un fenómeno de resistencia social, es imposible comprender su ideología y sus estrategias sin analizar los poderes a los que se enfrentan y la ideología que anima a esos poderes y que, en la mayoría de los casos, no es menos manipuladora, arbitraria ni mixtificadora.» (Gamella y Jiménez, 2005, p.57).

En 2015, con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se produce un aumento significativo en el importe de las sanciones pecuniarias para conductas relacionadas con la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, además de tipificar nuevas infracciones directamente relacionadas con el cultivo (artículo 36.18 -«La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal»). Pero hay autores que consideran que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, al sancionar las plantaciones expuestas al público, de algún modo reafirmaría la legalidad de las no exhibidas, siempre que estas se destinasen al autocultivo, obviamente: «el cultivo de cannabis ya estaba descriminalizado en España, pero la

nueva ley de seguridad ciudadana lo confirma de manera explícita» (OCD, 2015, p.18).

Respecto a la sentencia condenatoria a Pannagh dictada por el Tribunal Supremo, deja claro que el autocultivo es una actividad que carece de relieve penal e implica un ciclo natural: «El cultivo para el exclusivo consumo personal es contrario a la legalidad, pero carece de relieve penal. El cannabis, como es sabido, es uno de los estupefacientes con ciclo natural de cosecha.» (STS, 2015b, p. 26).

### 3.8 Del vacío a la regulación del autocultivo y uso

El Observatorio Vasco de Drogodependencias (2002) apuntó una serie de criterios para determinar quién debía considerarse como autocultivador. Este debería ser aquel:

- que consuma lo que cultiva,
- que la cantidad que cultiva sea la que precisa para su consumo,
- que sea miembro de alguna asociación,
- que no posea útiles relacionados con el tráfico,
- la ubicación de las plantas (p.165).

Otra definición de autocultivador nos la ofrece Martínez Oró (2018): «Entendemos por autocultivador de cannabis aquella persona mayor de edad con capacidad legal, que planta, cultiva y procesa el cannabis sin obtener ningún tipo de rédito económico de los productos derivados de su cosecha» (p. 17).

En todo caso, los autocultivadores viven en la ambigüedad, incluso el movimiento cannábico se ha pasado años sin propuesta común. En este sentido, Barriuso (2005b) indicó que «es muy probable que cuando diferentes actores del movimiento cannábico hablan de normalizar el cannabis se refieran a cosas muy diversas» (p.206).

En 2015 distintos actores del movimiento cannábico se unieron para presentar una propuesta unitaria: *Los cinco pilares de una*

*regulación integral del cannabis*. El primero de estos pilares estaba dedicado al autocultivo, con una propuesta que trataba los puntos principales relacionados con la materia como el cultivo, el transporte, el almacenamiento, la tenencia y la conducción. Este pilar contó con un amplio respaldo cuando se sometió votación por la representación más amplia del movimiento cannábico conseguida hasta la fecha, con asistencia de las principales plataformas. El texto base de este primer personal lo elaboró personalmente quien firma este capítulo, con el asesoramiento de Héctor Brotons. Establece una producción anual de hasta diez gramos diarios por usuario, cantidad que cubre las necesidades de la gran mayoría de cultivadores, al tiempo que ofrece una sólida base legal, pues es la mitad de lo considerado cantidad de consumo diario (TS, 2001). Además de este pilar, los autores ya publicamos un resumen de este artículo (Madera, 2017), un primer dictamen jurídico sobre su idoneidad (Brotons, 2015b), así como los puntos claves para su defensa (Madera, 2016e) y argumentación jurídica (Brotons, 2016). El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, OECCC, continúa esta línea de trabajo, orientada a desarrollar, argumentar, consensuar, publicar y defender una propuesta de regulación del autocultivo y uso del cannabis.

El planteamiento de considerar autocultivo el aprovisionamiento para un consumo anual de diez gramos diarios es acogido con gran apoyo en el movimiento antiprohibicionista. Por ejemplo, aparece en propuestas posteriores, como la del Grupo de estudio de políticas sobre el cannabis (GEPCA, en adelante), la del Círculo Podemos Cannábico, o la Iniciativa Legislativa Popular de Representación Cannábica de Navarra-Nafarroako Ordezkaritza Kannabikoa (RCN-NOK, en adelante).

En el 2017 el GEPCA, coordinado por el activista cannábico Martín Barriuso, publicó un amplio informe donde se propone la regulación integral del cannabis. Entre los expertos redactores del informe, destaca Eusebio Megías, antiguo director del Plan Nacional Sobre Drogas y actual Director Técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y del Centro Reina Sofía sobre

Adolescencia y Juventud. Este aval pone de relieve que las dudas sobre la prohibición del cannabis han llegado hasta los más altos estamentos oficiales.

También resulta a tener en cuenta la aportación del Círculo Sectorial Estatal Podemos Cannábico (2018) sobre la Regulación del Autocultivo, con un documento que rechaza el «registro indiscriminado» de autocultivadores, así como los «límites aleatorios». Por esta entidad se propone:

- 1) Una regulación transversal no puede dar un paso atrás y debe estar desligada de la corriente neoliberal actual, contemplando el derecho al cultivo personal y colectivo, así como a la tenencia para consumo propio de manera responsable y adulta.
- 2) No se creará ninguna clase de lista, ni será obligatorio el registro indiscriminado de consumidores o cultivadores privados o colectivos. La privacidad y la protección de datos de las personas usuarias y cultivadoras debe ser respetada en todo momento.
- 3) No se establecerán límites aleatorios que establezcan una cantidad máxima de plantas o metros autorizados para consumo propio o colectivo, ya que cada variedad y método de cultivo produce cantidades diferentes, tanto en peso como en efectividad. En caso de establecerse algún máximo, se tendrá en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, no siendo necesaria inscripción o registro alguno en el caso de producir por debajo del mismo. Es importante tener en cuenta las cantidades necesarias para la elaboración de derivados como aceites, extracciones, mantequillas, cremas, etc. y que se contabilice siempre en cómputo anual (período más usual de cosecha). (PODEMOS CANNÁBICO, 2016).

Sobre esta declaración trabajan el borrador *Proyecto de Ley integral del cannabis* (PODEMOS CANNÁBICO, 2018). Mientras que en los usos profesionales exigen los correspondientes registros, en

el caso de los particulares estos quedan exentos (Artículo 3, «Licencias administrativas para profesionales», p. 11). Proponen que el almacenaje no supere el aprovisionamiento anual de diez gramos diarios de flor seca, con un límite de 1.000 gramos anuales en caso de almacenarse en forma de resinas, aceites o similares (Artículo 4, «Presunción y límite al uso particular», p. 11).

Durante todo el año 2017, el activismo cannábico se reúne con distintos agentes sociales, políticos, económicos o científico-médicos, con una gran cantidad de iniciativas por la regulación, con intervenciones en Parlamentos regionales, Parlamento Nacional e incluso Parlamento Europeo o cursos universitarios de verano. La acumulación de acciones es la estrategia conocida como #Regulación2017, es decir, crear durante el 2017 una masa crítica de actividad a todos los niveles, hasta posicionar este debate en el Parlamento Nacional.

A final del año 2017, todas las Comunidades Autónomas cuentan con una PNL o iniciativa similar registrada o aprobada, a lo que se suman cuatro iniciativas nacionales a cargo de ERC, Ciudadanos, Podemos y PSOE, además de una ILP nacional, así como dos actos en el Parlamento durante el 2018, uno sobre la regulación integral del cannabis y otro sobre reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Dentro del 2017, hay varias fechas claves, como la gran «ManiFiestaAcción» del 28 de mayo, donde anualmente se reúnen unas 25.000 personas, con discursos de representantes políticos de los diversos partidos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, por ejemplo), así como de artistas de primer nivel.

Quien suscribe este capítulo redactó personalmente el manifiesto del citado evento. Acompañado de otro miembro de la Junta directiva del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, Álvaro Zamora, hicimos entrega del mismo personalmente en las sedes de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, el 26 de mayo del 2017. Acudimos a las sedes en un autobús de dos pisos, decorado con un cogollo de más de tres metros, con seguimiento en directo en el hashtag #ManiFiestaSol, que fue durante

varias horas *trending topic*, es decir, uno de los temas más hablados de Twitter. La regulación del autocultivo y uso es el eje central de este manifiesto que entregamos a los partidos y leímos al comienzo de la ManiFiestaAccion.

«El informe del Fiscal General del Tribunal Supremo, Sequeros Sazatornil, ya avaló en el 2004 el autocultivo, a esto se suma que en el 2015 el pleno de este Tribunal Supremo ha reconocido la intrascendencia penal del autocultivo. Además, la Ley Orgánica 4/2015 indica que el autocultivo no es sancionable, siempre que sea para este fin y no esté ubicado en un lugar visible, pero hoy no está debidamente regulado. La vía de la jurisprudencia se combina con la de la realidad judicial. Hay acumulados decenas de miles de casos de autocultivadores absueltos, muchos con cantidades muy altas, con diez kilos como la cantidad de notoria importancia, aunque algunos consumidores de resinas han llegado a justificar cantidades mayores. En este año 2017 han aparecido numerosas PNL por la regulación del cannabis, en las cuatroniciones de Podemos, PSOE, Ciudadanos y ERC se menciona el autocultivo. Además, aparece en la Iniciativa Legislativa Popular del RCN, que recoge firmas en este momento. También se habla del autocultivo en las PNL que se han presentado en casi todas las Comunidades Autónomas. A nivel regional incluso el PP ha llegado a apoyar la regulación del autocultivo. A pesar de este copioso apoyo legal teórico, en la aplicación real cunde la inseguridad jurídica. Mientras el mundo avanza hacia la legalización, a nosotros aún nos cachean y ponen multas por transportar y usar el cannabis, confiscan las semillas en las *growshops*, arrancan las plantas, aplican que dan falsos positivos y no tienen control metrológico, someten a presiones de los fiscales y condenan a pena de calabozo, declaración, banquillo y antecedentes. Un dispendio de recursos públicos disparatado. Es urgente hacer un proyecto de ley que regule el autocultivo, pues ya

es una realidad aceptada en todos los niveles (...). En el año 1997 abrió el primer *growshop* de España en Madrid y en 1999 se vendieron las primeras semillas con IVA en Barcelona. Llevamos 20 años pagando impuestos y las *growshops* ya merecen un epígrafe propio. Además, somos potencia mundial en crianza de semillas, los criadores españoles son respetados en todo el mundo y perseguidos en su país. Ya es hora de que puedan hacer registros fitosanitarios de las variedades que les piratea la industria farmacéutica (...). También tenemos noticia de que el Gobierno ha concedido licencias a farmacéuticas. Ya que estas van a utilizar nuestras genéticas y conocimiento, es justo que se den licencias a asociaciones y bancos de semillas, así como permitir también el autocultivo medicinal, lo que evitará monopolios. Como el modelo colombiano, en el que además de licencias a grandes compañías, también queda espacio para las pequeñas y se permite 20 plantas sin registro al autocultivador» (ManiFiestaAcción, 2017).

Otro manifiesto de gran relevancia ha sido el de #Cannabis-ConMixta, publicado por la plataforma #RegulaciónYa el 12 de septiembre del 2017. Se mantuvo durante ocho horas *trending topic* en Twitter, con apoyo de parlamentarios nacionales y regionales, sobre todo de Podemos, aunque también de Ciudadanos y PSOE. Igualmente, aquí quien suscribe este capítulo tuvo el honor de redactar el manifiesto leído en el acto, manifiesto donde se explica la necesidad de abrir un debate sobre el cannabis en el Parlamento Nacional.

«Un punto muy importante para conseguir la regulación del cannabis es un debate previo, donde los partidos políticos sean informados de todos los avances que se están produciendo en la regulación mundial, con importantes beneficios para la salud pública y la seguridad ciudadana, además de la recaudación de impuestos y descarga del sistema

penal y judicial. La legalización del cannabis es el futuro y por eso queremos esta comisión, en la que se produzca un debate abierto, documentado, honesto y sincero. El lugar adecuado para este debate es la Comisión Mixta Congreso Senado, donde se podrán evaluar las consecuencias de esta regulación, así como los pasos necesarios para implementarla. Por eso hoy pedimos #CannabisConMixta. (Regulación Ya, 2017)».

### 3.9 Tiempo de diálogo

Esta ebullición social sobre el cannabis deja claro que la regulación del uso y autocultivo de cannabis resulta una solicitud de amplio apoyo social, desde la calle a internet, clamor que primero llega a los Parlamentos regionales y que rápido pasa al Parlamento y Senado nacionales. La represión a usuarios y autocultivadores ha fracasado. Es tiempo del diálogo para buscar un nuevo modelo. Ahora mismo la pelota está en el nivel nacional.

Tras la primera introducción del Proyecto de Ley de autocultivo y uso del cannabis elaborado por el OECCC el 25 de noviembre de 2017 en el I Congreso Internacional del Cannabis, el OECCC ha realizado un año de ronda de presentación de este proyecto. Desde diciembre del 2017 acuden, al menos una vez al mes, a mesas redondas y reuniones con usuarios, políticos y expertos, para presentarles el proyecto y enriquecerlo con sus aportaciones. A continuación, algunas de las citas públicas más importantes.

**28 diciembre 2017. Gijón.** Hugo Madera presenta el Proyecto de Ley de uso y autocultivo del cannabis a socios de CSC federados en AsturFAC, y da otra charla sobre los aspectos sociológicos de la propuesta.

**20 enero 2018. Charlas sobre cannabis de AcmeFuer. Fuerteventura.** Presentación de Héctor Brotons.

**9 febrero 2018. Barcelona.** Héctor Brotons participa en rueda de prensa y firma un convenio de colaboración con CATFAC

y Gremi de Growshops de Catalunya, para colaborar en el desarrollo y promoción de este Proyecto de Ley.

**9 marzo 2018. Barcelona. Cannabis World Conferences.** Héctor Brotons y Andrés García participan en una mesa redonda, donde se presenta este Proyecto de Ley.

**21 abril 2018. I encuentro estatal. Castellón.** Presentación de Esther Sánchez en las jornadas para debatir sobre el futuro del cannabis en España, organizado por Podemos en Castellón.

**4 mayo 2018. Jornadas «Sembrando el Cambio». Madrid.** Presentación de Héctor Brotons.

**5 mayo 2018. Marcha Mundial de la Marihuana. Madrid.** Participación de Héctor Brotons en la lectura del manifiesto final.

**6 junio 2018. Corts Valencianes. Valencia.** Aprobación de la Propuesta No de Ley valenciana sobre Cannabis, donde el OECCC asesoró en lo relacionado con el uso y autocultivo.

**9 y 10 de junio. The Weedkend. Gijón.** Organización Workshops. Joan Bertomeu, Esther Sánchez, Noemí Sánchez y Héctor Brotons presentan este Proyecto de Ley, además de una charla específica sobre drogotest y otra sobre autocultivo del cannabis, tanto lúdico como medicinal. Firma de convenio de colaboración con AsturFAC.

**5 julio 2018. Congreso de los Diputados. Madrid.** Presencia de Héctor Brotons en el acto organizado por la Plataforma Ciudadana «No somos delito» que aboga por la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

**12 julio 2018. Tribunal Supremo. Madrid.** Absolución a la junta directiva de Pannagh, con defensa dirigida por Héctor Brotons, en una sentencia donde se tratan temas del autocultivo detallados en este Proyecto de Ley.

**17 agosto 2018. Rototom Social Forum. Benicassim.** Intervienen Joan Bertomeu y Héctor Brotons

**24 agosto 2018. I Conferencias ACBB sobre Cannabis Medicinal. Santander.** Intervienen Noemí Sánchez y Héctor Brotons

**14 septiembre 2018. II Cannabis Box Forum. Irún.** Presentación con Marta de Luxan y Héctor Brotons.

**17 septiembre 2018. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo.** Héctor Brotons presenta una demanda al Estado Español por el procedimiento administrativo sancionador por presencia de drogas en el organismo, comentada en el Proyecto de Ley.

**18 octubre 2018. Congreso de los Diputados. Acto «Hacia la regulación integral del Cannabis». Madrid.** Organizado por Podemos en la sala Ernest Lluch. Participación de Noemí Sánchez y Héctor Brotons.

**29 y 30 noviembre 2018. I Jornadas FCV. Cannabis desde un enfoque integral. Valencia.** Presentación del Proyecto de Ley, con intervenciones de Esther Sánchez, Noemí Sánchez, Héctor Brotons y Francisco Azorín. El recorrido iniciado, a finales de noviembre del 2017, con una pequeña presentación en el congreso universitario de Catoira, lo acaba el OECCC por la puerta grande, un año más tarde, colaborando con la celebración de este congreso en la Universidad de Valencia.

**28 al 30 de mayo 2018. Sedes nacionales partidos políticos, Congreso y Senado. Madrid.** Además del broche final, con congreso universitario incluido, el OECCC señala la especial importancia de la acción desarrollada en mayo del 2018. Para urgir a la acción a los partidos y recordar el registro del Manifiesto del 26 de mayo de 2017, la Junta Directiva del OECCC, representada por Álvaro Zamora y Hugo Madera, vuelve a visitar, del 28 al 30 de mayo de 2018, las sedes nacionales de los partidos políticos, así como Parlamento y Senado. El documento *Debate sobre el cannabis: argumentos para la apertura de una ponencia* (OECCC, 2018) fue registrado por PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, PdCat, ERC, IU, Compromís y Grupo Mixto del Senado. Un número notable de visitas, si tenemos en cuenta que era la semana de la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez.

En este documento se resumen las solicitudes de esta ponencia, desde el contexto regional y nacional. También se tocan aspectos como los cambios en el ámbito internacional, así como la vulneración de derechos y daños a la salud pública que provoca la prohibición. Sin duda, el largo camino del movimiento social cannábico merece que se haga una regulación consensuada del autocultivo y uso del cannabis. Aunque hay otras opciones para efectuar cambios legales, la ponencia es el escenario ideal para alcanzar un amplio consenso social, así como llegar al mayor número de partidos políticos respaldando el cambio.

Para resumir el cambio informativo de 15 años, basta comparar el titular ya citado de Efe en el 2003, con el titular de Efe sobre la rueda de prensa de esta iniciativa, el 23 de julio de 2003 fue «Un grupo de expertos estudiará medidas legales contra la apología del consumo de cannabis» (Efe, 2003). Quince años después, el 5 de junio de 2018, así se pudo leer «Proponen la regularización del cannabis para combatir el narcotráfico» (Efe, 2018).

En la rueda de prensa, Héctor Brotons hizo una declaración que resume la gran demanda social de abrir ya una ponencia (Efe, 2018): «La regulación española sobre el cannabis se diseñó en

convenios del siglo pasado y urge una actualización, teniendo en cuenta el nuevo contexto social y jurídico. Hay distintas opiniones y soluciones, por eso conviene que se abra ya la ponencia, pues allí se expondrán distintas informaciones, perspectivas y medidas concretas que permitan llegar a un consenso social sobre el cannabis».

# 4.- La peritación del autocultivo de cannabis.

## Referencias y propuesta

*Hugo Madera*

### 4.1 La peritación

Según *Marijuana Availability Watch Group* (en adelante, MAWG), un grupo apoyado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las estimaciones de la cantidad de cannabis cultivado en EE.UU. son de cuatro a diez veces el consumo interno, lo que no cuadra con la realidad (Bouchard, 2007, p.5). Este error podría aparecer en la mayoría de las estimaciones oficiales, como, por ejemplo, se estiman producciones de hasta un kilo por planta, mientras que una media más realista sería de 34 gramos por planta de interior o 0.5 gramos por vatio de cada cosecha y de 53,8 gramos en planta de exterior. Otro estudio (Vanhove, Van Damme y Meert, 2011), realizado con variedades comerciales, consiguió un rendimiento medio por planta de 28,1 gramos, además de señalar la intensidad lumínica y la variedad de la planta como factores determinantes, por lo que se pronuncian en contra de peritaciones directas en función del número de plantas. Este mismo estudio indica que la entidad Bedrocan consigue unos rendimientos por metro de entre 251 a 315 gramos según variedad (p.162).

Conrad (2007) señala una serie de dificultades para hacer peritaciones de cantidad de sustancia a obtener según el número de plantas, ya que en exterior pueden producir grandes cantidades, mientras que los cultivadores que emplean la técnica *Sea Of Green* necesitan gran cantidad de pequeñas plantas. Como solución propone un criterio científico para que los usuarios puedan calcular

su producción anual, con una fórmula desarrollada en 1992 por Drug Enforcement Administration (DEA) publicada como *Cannabis Yields*, y basada en la Guía de Sonoma conocida como *Safe Access Now Guidelines*. Se trata sencillamente de formular que 100 pies cuadrados de canopia madura rendirán unas tres libras al año de cogollos listos para el consumo. Es decir, 1.360 gramos por 9,2 metros cuadrados, que son 146 gramos por metro cuadrado (p.4).

En un estudio de 38 autocultivadores finlandeses solo uno llegó hasta los tres kilos en exterior y necesitó cultivar entre 40 y 50 plantas para ello (Hakkarainen y Peralta, 2014). Este dato arrojaría una media por planta de entre 70 y 75 gramos.

Los cultivos pueden encontrarse, además, con problemas inesperados que arruinen la cosecha o reduzcan mucho su producción. En un estudio realizado en Australia (Knight, *et al.*, 2010), se llevaron a cabo tres cultivos de interior durante un año, todos ellos con resultados negativos: en el primero, las plantas resultaron hermafrodita y preñan el cultivo; en el segundo, una fertilización excesiva quemó las plantas; y en el tercero, la plaga de la araña roja produjo daños que disminuyeron mucho la producción (p.39). Es evidente que los cultivadores sufren imprevistos, se hace difícil determinar una cantidad de sustancia por el número de plantas. Incluso la experiencia del autocultivador es determinante, «la mano del cultivador determinará el producto final» (Reñé, 2002, p.8).

En un estudio sobre cultivadores profesionales holandeses (Toonen, Ribot y Jac, 2006) la media fue de 259 plantas por cultivador, con una densidad media de 15 plantas y 510 vaticos por metro cuadrado. La producción por metro cuadrado era de 505 gramos, es decir, una media de 0,99 por vatio. El estudio hace referencia a cultivadores holandeses experimentados, que se toman su actividad como una profesión, por lo que invierten gran cantidad de recursos económicos y tiempo.

Estas medidas y medias arrojadas coinciden con las señaladas por la literatura especializada, en la que se determina habitualmente la producción de un gramo por vatio como referencia a la que aspirar. Una aplicación práctica de este supuesto sería conseguir

una cosecha de 600 gramos de cannabis listo, seco y preparado para el consumo, con una luminaria de 600 vatios, en un espacio de 1,2 metros, con un ciclo de cultivo que duraría en torno a cuatro meses.

De hecho, existe incluso una *grow* que se llama Gramovatio como una marca de calidad, ya que aseguran que los clientes que siguen su sistema de cultivo consiguen llegar al gramo por vatio. En una entrevista a David Aransaray, fundador de esa *growshop*, explica que el gramo por vatio es una referencia difícil de alcanzar. «Es una meta a conseguir, es una realidad que pocos clientes llegan a conseguir. Para conseguir el gramo por vatio es necesario, además de unos conocimientos, que no se adquieren fácilmente, mucha perseverancia. El autocultivo no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Constancia, observación y trabajo diario.» (Madera, 2012).

Por la Oficina de las Naciones Unidas Para la Droga y el Delito (en adelante, UNODC) (2010) en *Métodos recomendados para la identificación y el análisis del cannabis y los productos del cannabis* se proponen 22-40 gramos/planta o 400-505 gramos/m<sup>2</sup> en interior y 75 gramos/m<sup>2</sup> en exterior (p.14).

El ingeniero agrónomo, especialista en cannabis, Xaquín Acosta realizó una compilación y resumen de los principales estudios (2013), en exterior la producción va desde 53 a 180 gramos por planta, mientras que en interior la producción va desde 22 a 45 gramos por planta (p.36).

También es ingeniero agrónomo y experto en cannabis el director técnico de la Fundación Canna, Iñaki García. Sobre la producción en interior nos aportó este comentario

«Al estimar la cantidad de producto final que necesita un consumidor para cubrir sus necesidades, no es posible utilizar el número de plantas como referencia, ya que el rendimiento por planta es muy variable, dependiendo de varios factores. Por ejemplo, en cultivos de interior, potencias lumínicas elevadas permiten plantas más altas y más produc-

tivas que cuando se usan potencias más bajas. Del mismo modo, muchos cultivadores de interior prefieren utilizar varias plantas con una inflorescencia central, mientras que algunos prefieren utilizar técnicas de poda u otras que permiten obtener varias inflorescencias por planta. Dichas técnicas también son utilizadas en plantas de exterior, siendo el objetivo en todos los casos obtener el mayor número y tamaño de inflorescencias por metro cuadrado, independientemente del número de plantas empleadas. Por esto, en función de la técnica utilizada y de otros factores como la duración de la floración, que es muy variable según el fenotipo de la planta, el tiempo que se requiere para obtener la cantidad necesaria de producto final puede variar enormemente de un cultivo a otro. En definitiva, lo más correcto para evaluar las necesidades de un consumidor en cultivos de interior sería utilizar la relación media en gramos de producto final por vatio y por día.»

Otro ingeniero agrónomo versado en cannabis, Rubén Valenzuela, aportó a este capítulo las siguientes apreciaciones sobre los principales estudios que emplea en la peritación:

«Teniendo en cuenta la información bibliográfica en estudios científicos relacionados con las producciones de Cannabis, existen multitud de estudios a tener en cuenta. En relación con los cultivos de exterior, en Canadá resultaron 53,86 gr/planta (Bouchard, 2007), en Marruecos 75 gr/ m<sup>2</sup> (Stambouli, 2007) y en México y Colombia resultaron entre 40,78 gr/m y 156,57 gr/m (Conrad, 2007). En relación con el cultivo de cannabis en interior, los resultados varían entre 22 gr/planta referenciados por la Europol en 2001 y 45,2 gr/planta (Díaz, 2013) con numerosos estudios con resultados entre estos dos valores, 42.52 gr/planta (Hough 2003), 33.7 gr/planta (Toonen 2006) y 40 gr/planta (Mahler 2007). Observamos que tanto los resultados como sus

parámetros de medida son bastante heterogéneos entre los diferentes estudios. Según los datos reflejados en la bibliografía citada, en una planta de exterior se obtienen entre 50 y 150 gramos, mientras que en una planta de interior entre 22 y 45 gramos dependiendo principalmente de la cantidad y calidad del sustrato en donde se desarrollan las plantas, de la densidad de cultivo y la cantidad de luz disponible.»

José T. Gallego es una de las grandes referencias de los autocultivadores ibéricos, a los que suele informar sobre autocultivo desde las páginas de las revistas *Cáñamo* y *Soft Secrets*, además de tener su propio manual de autocultivo. Sobre la producción de los autocultivadores, este especialista aseguró vía mail que:

«Muchos cultivadores no alcanzan ni medio gramo por vatio de luz, con frecuencia solo 0,3-0,4 g/w (...) solo hacen una o dos cosechas al año, ya que cada una les lleva entre tres y cuatro meses y durante el verano paran de cultivar por las altas temperaturas. En exterior, la producción media de una planta de exterior en condiciones reales suele ser de entre 50 y 100 gramos. Claro que hay plantas y cultivadores más productivos, pero son los menos.» (José T. Gallego, comunicación personal, noviembre 2016).

#### 4.2 Los autocultivadores

Al investigar sobre el autocultivo y los autocultivadores, aparecen muchas referencias bibliográficas sobre el cultivo, pues la cultura cannábica ha creado abundantes manuales y revistas, pero si buscamos sobre los autocultivadores, apenas existe información. Los autocultivadores domésticos «no solo han escapado de la atención de las autoridades, sino también de los investigadores» (Weisheit, 2014). Decorte también señala: «la infrainvestigación sobre los cultivadores de cannabis independientes a pequeña escala» (Decorte, 2010, p.271).

Los autocultivadores se han extendido por todo el mundo con motivaciones diferentes a los cultivadores comerciales, como, por ejemplo, buscar mejor calidad, uso medicinal, activismo o el placer de cultivar la planta. El cultivo de cannabis «ha florecido tanto en países represivos como en países tolerantes, sin distinciones y en muchos casos las razones son diferentes de las financieras.» (Decorte, 2012, p.116).

Una cosa parece evidente, al hablar de cultivadores de cannabis del primer mundo, son imposibles las generalizaciones, pues pueden cultivar por muchos motivos. Así Decorte, Potter, y Bouchard (2014) compilan hasta siete clasificaciones diferentes de los cultivadores occidentales. Una de las más completas es la de Potter y Dann en 2005, con añadidos posteriores de Potter en 2010. Con respecto a los cultivadores que no buscan beneficio, hablan de aquel que cultiva para su autoconsumo, del cultivador medicinal y del cultivador activista.

Los autocultivadores existen hasta en los rincones más prohibicionistas de Europa, como Finlandia, donde está prohibido todo acto de cultivo y hasta penalizada la posesión de semillas. En un estudio finlandés sobre autocultivadores (Hakkarainen y Perala, 2014), señalan valores muy parecidos a los que podemos ver entre los autocultivadores españoles entrevistados, como desobediencia civil, desvincularse del mercado negro, autosuficiencia o críticas al discurso oficial antidroga. Los autocultivadores, como se ha dicho, actúan por motivaciones diversas.

En un cuestionario respondido por 265 cultivadores españoles (Marín, 2008), predominan los jóvenes (61%), seguidos del grupo de mediana edad (29,4%), la mayoría trabajadores en activo (53%) y también estudiantes (22%) o que estudian y trabajan (16%). Aunque la mayoría manifiestan consumir a diario (69%), solo el 42% consigue autoabastecerse todo el año, y el 67% nunca ha vendido su cosecha.

#### 4.3 Estudio exploratorio: autocultivadores españoles en 2017

Para esta investigación realizamos un estudio exploratorio con 74 informantes. En los valores asociados al autocultivo y otros aspec-

tos, aparecen conceptos detallados en estudios sobre autocultivadores ya citados, por tanto, podemos considerar la muestra como una muestra teórica adecuada (Glaser y Anselm, 1968), lo que responde a razones como: ahorro, no colaborar con el mercado negro ni depender de nadie, sensibilidad, cultura, conocimiento, hobby, aprendizaje, saber lo que consume, anonimato, libertad, entretenimiento, independencia, amor por la naturaleza, reducción de riesgos; igual que producir tus verduras o huevos, anarquía, aprendizaje constante, medicina de calidad, cannabis al propio gusto, desconectar, conectar con otro organismo vivo, paciencia, disciplina, reducción de daños, igual que hacer tu patxarán, filosofía de vida, libre de residuos nocivos, placer de lo cultivado por uno mismo, responsabilidad, autocontrol, personalidad, valor, autodeterminación, constancia, perseverancia, paciencia, prudencia, rendimiento, economía, tolerancia, calidad, dedicación, autodeterminación, esfuerzo, felicidad, tan natural como cultivar tomates. Todo un repertorio de sentimientos y de sensaciones positivas y sobre desarrollo vital.

Sobre la producción en exterior, los resultados del estudio muestran que 52 de los consultados estarían por debajo de los 200 gramos y solo catorce los superan. Habría 34 cultivadores que están por debajo de los cien gramos y doce por debajo de los 50 gramos. Hasta cinco cultivadores señalan que no tienen peso, ni pesan nunca. Además, uno de los entrevistados explica que no hace cultivo de exterior por temor a los ladrones. Estas informaciones podrían señalar respuestas adaptativas al marco legal de la actual prohibición del cannabis, tanto el no tener peso como el eludir a los ladrones. Los cultivadores que no tienen peso cumplen mejor con los criterios señalados en el apartado legal. Asimismo, hay poca seguridad legal para denunciar a ladrones de cultivos de exterior, con resultados diversos en los casos que existen.

Sobre si la potencia del producto es el factor fundamental para elegir sus variedades, 42 de los cultivadores consultados responden que no es el factor determinante y otros 31 responden que sí es un factor determinante para ellos, con lo que vemos que hay división

de opiniones al respecto. Entre los que no consideran la potencia como esencial, señalan, en 25 casos, las características organolépticas, es decir, sabor y olor, como factor fundamental (en 19 casos el sabor y en 6 el olor), a continuación, aparece la calidad como factor general en 8 casos, la producción en 6, como un caso que señala «primero busco tener algo para consumir y de potencia suelo preferir que no sea demasiada, prefiero consumir dos en vez de uno. El sabor por supuesto es también importante.» (MesMais, comunicación personal, del 14 de diciembre 2016). Por último, en dos casos se señala la variedad. «Procuro tener plantas de todos los tipos. (...) Plantaría algunas plantas solo por hacerles fotos, independientemente de su potencia» (Kus, comunicación personal, 15 de diciembre de 2016). Otros cultivadores señalan la importancia que dan a la variedad de genéticas: «En exterior intento poner semillas nuevas cada temporada, como mínimo, media docena de cosas diferentes. Que haya variedad para no aburrirse de consumir siempre lo mismo, algo para cada momento y para evitar también la tolerancia. Igualmente, cultivar variedad me ayuda a tener una mejor perspectiva y conocimiento del panorama de variedades existentes.» (Manuel, comunicación personal, 14 de diciembre de 2016).

A la pregunta de si cultivan distintas variedades para distintos momentos, 62 de los consultados manifiestan que sí. De estos informantes hay 19 que eligen de forma espontánea la dicotomía «día y noche» para hablar de dos usos muy diferenciados. Otros 10 informantes contestan que no cultivan distintas variedades para distintos momentos.

A la pregunta de si predominara el uso lúdico o el medicinal, el lúdico predomina en 58 casos. Entre los casos que predomina el lúdico, hay 42 informantes que admiten también un uso medicinal como automedicación, con distintos grados de importancia, desde minoritaria a casi tan importante, como el lúdico.

Respecto a la propuesta de regular sobre un consumo anual de diez gramos diarios, 72 informantes consideran que sería suficiente para su consumo personal, y ninguno dice de forma ro-

tunda que sería insuficiente. Cuatro señalan espontáneamente que es más que suficiente y uno señala que es suficiente y le llegaría para extracciones. Josete hace referencia a que al elaborar extractos, podría ser insuficiente. Santi en estos momentos cree que sí le llegaría, aunque está seguro de que su consumo es bastante elevado, señala también que podría haber personas con necesidades superiores. Se puede considerar que todos los informantes que proporcionan información útil sobre este punto considerarían su consumo propio cubierto con una provisión anual de diez gramos diarios, con distintos grados.

Esta referencia de un consumo anual de diez gramos diarios pasó a la reciente ILP nacional del RCN. Pero en el autocultivo ambas propuestas tienen una diferencia fundamental. La ILP del RCN añade la creación de registros municipales de autocultivadores, en los que constará donde se llevaría a cabo el cultivo.

Entre los informadores que manifiestan preferencia sobre una opción, 54 prefieren que no haya registro. 6 de los consultados matizan que prefieren la propuesta sin registro, pero ninguna les representa. 32 estarían dispuestos a inscribirse en un registro con bastante facilidad, a estos se suman otros 9 informantes que se inscribirían, pero con ciertas reservas, en función de la garantía que diera este registro. Hay 15 informantes que no se inscribirían en ningún caso en un registro de cultivadores, de este grupo señalan como motivos principales los principios filosóficos (8 casos) y la desconfianza de que se pueda usar contra ellos en un futuro (6 casos).

#### 4.4 Estudio exploratorio consumos hachís

Los encuestados a los que un límite de diez gramos diarios les parece insuficiente argumentan dos motivos principales para ello. El primero, por principios personales. El segundo, porque les resulta insuficiente para realizar todo el hachís que fuman. Para comprobar si el hachís de calidad requiere estas grandes cantidades de materia vegetal, se realizó otro estudio con varios expertos en producción y consumo de hachís, reconocidos por participación

en artículos y libros, premios en copas y experiencia superior a diez años.

Feisal Damen es conocido por su participación en el colectivo Oilhunter, con el que ha ganado más de 25 copas cannábicas. Asegura que consume hasta diez gramos diarios de hachís. Sus extracciones favoritas ofrecen retornos muy bajos, así, en extracciones con agua y hielo refiere que, al conseguir material de primera calidad, el denominado de fusión completa, el retorno está en un 3% de material. En extracción en seco, la primera extracción ofrecería un rendimiento del 8% o 9%, pero hay que requiere de un nuevo limpiado con electricidad estática, por lo que el rendimiento final queda en un 1% o 2%.

Javier Ruano, responsable de Medical Seeds, es conocido por su libro, que revisa los principales métodos de extracción del hachís (2016). Según comunicación de personal este autor, un rendimiento razonable estaría entre el 5% y el 10%, para hacer extracciones de alta calidad el rendimiento descende por debajo del 2,5%.

Jorge Soto dirige la empresa de analítica Ananda y ha hecho una completa serie de artículos sobre el sistema de extracción denominado rosin, además de otros artículos de extracciones. Sobre los rendimientos señala que, con extracciones con agua y hielo, los porcentajes estarían comprendidos entre el 8% y el 10%, y que, en las extracciones en seco, las mejores calidades dan un retorno entre el 1% y el 2%, que puede llegar a bajar hasta el 0,5%.

David García es traductor de Jorge Cervantes y Ed Rosenthal, los dos escritores de referencia mundial en el autocultivo de cannabis. Además, es un experto en extracciones y publica artículos sobre este tema desde hace más de diez años. Sobre las extracciones en seco, coincide con Soto en uno de sus artículos: los rendimientos están por debajo del 1%:

«En el mundo de los concentrados, la posición más elevada la ocupa sin duda el hachís obtenido por separación en seco. El motivo es simple: la esencia de la planta se encuentra intacta. Sin embargo, lograr un producto de gran pureza

usando simplemente uno o más tamices es también el reto que entraña mayor dificultad, debido a la facilidad con que atraviesan las mallas los diversos elementos contaminantes. Este factor es la causa de que el rendimiento sea extremadamente bajo cuando se trata de conseguir un polvo de resina de máxima calidad. Un hachís de primera se funde por completo, licuándose y dejando una cantidad insignificante de residuos tras consumirse. Para lograr esto (o algo parecido) en seco, el rendimiento se sitúa muy por debajo del 1%.» (García, 2012, pp. 30-33).

Álvaro Zamora es gerente del mayorista *Leaf Life* y además organiza, desde hace más de 15 años, la fiesta Ganja Time, consagrada al cannabis y la música jamaicana. Zamora es conocido por ser un consumidor intensivo de hachís, asegura que consume 1,5 kilos anuales de hachís, por lo que necesita como mínimo 15 kilos de cogollos para autoabastecerse, esto, en el caso de extracciones con retorno del 10%. De modo que, en el caso de que alguien quisiera consumir un producto de alta calidad, necesitaría incluso más cantidad.

Adan Redondo, del banco de semillas The Kush Bothers, también ha ganado varias copas de extracciones. Señala como rendimiento normal un 7% y que, para obtener un material de alta calidad, puede llegar a bajar del 1%.

Víctor Santana es un conocido artista y un autocultivador muy veterano. El mismo señala como un consumo normal el de 1,5 kilos de hachís anuales, por lo que se necesita como mínimo entre 15 y 20 kilogramos de cogollos para obtener una calidad aceptable y válida.

José Luis Moya es criador y dueño del banco Exclusive Seeds, con gran cantidad de copas ganadas de extracciones en 2016 y 2017. Indica que los rendimientos de las extracciones más sibaritas se situarían entre el 1% y el 3%.

Ignasi Pérez es uno de los cinco socios del banco de semillas Ripper Seeds, ganadores de numerosas copas de extracciones. Señala

que cuando se desea obtener calidad, los rendimientos bajan muy rápido. Por ejemplo, en hachís extraído en seco, estarían cercanos al 1% o incluso menos, pues solo se utiliza la primera pasada, mientras que para hachís obtenido con agua y hielo los rendimientos estarían por debajo del 4%.

Juan Elorriaga es fundador de la *growshop* y distribuidora gallega Diosaplanta, y muy aficionado a realizar hachís para su consumo. El método que más utiliza es la filtración en seco, asegura que se pueden alcanzar rendimientos de hasta el 10%, pero el producto final no será de calidad, al haber mucha presencia de materia vegetal. Para extracciones de calidad señala rendimientos inferiores al 4%.

Antonio Romero es fundador del banco Eva Seeds y ganador de numerosos premios de extracciones. También asegura que los altos rendimientos vienen de presencia de materia vegetal, pero detalla que:

«El auténtico hachís es solo tricoma, entonces los rendimientos bajan mucho, fíjate que en Marruecos para sacar la mejor calidad con el método tradicional vorean un kilo de planta para sacar 1 gramo, que es un rendimiento del 0,1%, con métodos modernos de extracción el rendimiento aumenta hasta un 2% en seco y un 4% en agua.» (Comunicación personal, 10 de enero de 2017).

Estos son solo algunos ejemplos de las opiniones más representativas, aunque la muestra total de expertos en extracciones fue de 17. Como resumen podríamos señalar que se considera que los rendimientos normales en una extracción se encontrarían en torno al 7%-10%, mientras que para las extracciones que consumen aquellos que buscan un producto de mayor calidad, los retornos se encontrarían entre el 1% y el 3%.

Quedaría expuesto, por tanto, que a los grandes consumidores de hachís les sería necesario un acopio de más de diez gramos diarios.

#### 4.5 Conclusión. De los diez gramos al modelo abierto

Casi todos los autocultivadores españoles consideran que un aprovisionamiento de diez gramos diarios cubriría sus necesidades. Esta cantidad cuenta con una sólida jurisprudencia a favor.

Peritar un cultivo es complejo, ya que hacerlo por número de plantas puede dar lugar a errores y las estimaciones oficiales resultan excesivas. Sería más realista considerar 0,3 a 0,5 gramos vatio en interior, y de 50 a 150 gramos por metro cuadrado de exterior.

Más allá de aceptar la solución de diez gramos diarios, en la declaración de valores los informantes señalan dos modelos muy familiares para los activistas: el de los tomates, también asimilado a verdura y huevos, o el del pacharán y otras bebidas alcohólicas de baja graduación.

«En el apartado Modelo Patxarán abogamos por la existencia de un cannabis comercial y un cannabis de producción casera, como el pacharán. Promovemos el autocultivo compartido para un autoabastecimiento y consumo propio de cannabis, como mejor respuesta al mercado negro, la prevención de riesgos en el consumo de cannabis y la lucha contra la adulteración. Además, tenemos el convencimiento de que no va contra la ley.» (LES, 2007).

Así Rosenthal (2010) afirma:

«El modelo de cómo debería ser la legalización de la marihuana está ahí afuera. Son los tomates. Más tomates se producen en América por los cultivadores caseros que producidos comercialmente. Todavía hay espacio para un robusto mercado de tomates y productos del tomate de todo tipo: enlatado, salsas orgánicas, sopas, ketchup. Al mismo tiempo, los cultivadores especializados a pequeña escala lo hacen, bien vendiendo sus productos en mercados de granjeros, y los cultivadores caseros con tomates sobrantes intercambian su producción con sus vecinos, en trueques y tratos infor-

males. La marihuana se podría manejar de la misma manera. Los cultivadores comerciales se pueden desarrollar lado a lado con los cultivadores caseros y cultivadores especializados.» (p. XV).

Estos modelos podrían señalar modelos de aspiraciones a largo plazo, una vez que la sociedad haya normalizado totalmente el uso del cannabis.

## 5.- Aspectos claves del cannabis medicinal

*Noemí Sánchez Nàcher, Mariano García de Palau*

### 5.1 El cannabis provoca menor dependencia que el tabaco

La dependencia a sustancias se define en psicología como la necesidad de exposición continua a una droga que genera alteraciones a nivel físico y/o psicológico, inclusive cuando esta se retira. De hecho, se considera el resultado de cambios neuro-adaptativos generados en respuesta a la exposición repetida a la sustancia, de la que se necesita una administración continuada para evitar el síndrome de abstinencia. Tradicionalmente se ha realizado una distinción entre dependencia física y psicológica. Pese a que desde las neurociencias se entiende que dicha distinción resulta un artificio, ya que ambos son en sí mecanismos neurales (Nestler, 1992), se utilizará dicha distinción a lo largo del texto para una mejor comprensión.

Demostrar que existe una dependencia al cannabis ha sido siempre polémico, pues para ello primero habría que demostrar la existencia de síndrome de abstinencia respecto de dicha sustancia, como así consta acreditado respecto de otras sustancias, como, por ejemplo, el alcohol o la heroína.

Tras más de 20 años de estudios, se ha observado que en los consumidores crónicos de cannabis se da una regulación baja de los receptores CB1, esto significa que descende el número de receptores expresados en las células. Dicha disregulación se revierte en los primeros dos días de abstinencia y vuelve a los valores normales a las cuatro semanas. Es la causante de los síntomas conductuales y de estado de ánimo del síndrome de abstinencia al cannabis, en el que existen diferencias genéticas, de género, edad e incluso entre etnias (Bonnet y Preuss, 2017).

Otro factor que influiría es la concentración de THC en la sustancia consumida, pues correlaciona positivamente con el síndrome de abstinencia (Bonnet *et al.*, 2017). En un estudio realizado por Wiesbecky otros autores, se observó que únicamente el 16% de los consumidores frecuentes de cannabis mostraba síntomas de síndrome de abstinencia y estos eran de índole psicológica (nerviosismo, problemas de sueño o cambio de apetito), que es lo que se conoce como dependencia psicológica (Wiesbeck *et al.*, 1996). Estos síntomas se encontraron en porcentajes similares al síndrome de abstinencia al tabaco y menores a los del alcohol (Vandrey, Budney, Moore y Hughes, 2005), considerándose de intensidad leve o moderada (Bonnet *et al.*, 2017). En esta línea, un estudio que compara a consumidores de tabaco y consumidores de cannabis observó que el grupo de usuarios de cannabis mostraban menor prevalencia de *craving* (ansias o poderoso deseo de consumir) durante la abstinencia, también el *craving* era menor y menos contribuyente a la recaída que en el grupo de usuarios de tabaco (Budney, Vandrey, Moore y Hughes, 2008).

En base a la literatura científica analizada para la redacción de este trabajo, consideramos que existen factores psicosociales que determinan la dependencia al cannabis. Según un artículo de revisión de trabajos previos, puede observarse que el desarrollo de una dependencia al cannabis parece asociado a diversos procesos en los que los factores sociales, biológicos e intra-individuales interactúan de forma compleja (Scholssarek, Kempkensteffen, Reimer y Verthein, 2016).

Con toda esta información que acaba de exponerse, podemos inferir que el cannabis puede generar dependencia de tipo psicológica, en base a la posibilidad de dar lugar a un síndrome de abstinencia tras su retirada, el cual se caracterizaría por cambios de humor y comportamiento. Sin embargo, el síndrome de abstinencia a esta sustancia se considera similar e incluso inferior al generado por otras drogas legales, como son el tabaco o el alcohol. Además, dicho síndrome de abstinencia al cannabis es dependiente de factores individuales (genéticos, género, personalidad, etnia,

entre otros) y de concentración de *cannabinoides* en la planta, con lo que tal dependencia, además de generar un leve síndrome de abstinencia, no afectaría a todas las personas por igual.

Hay personas más susceptibles a presentar dependencia psíquica al cannabis, así como a otras sustancias o fármacos. Es, pues, un problema atribuible más al perfil del individuo y no tanto al potencial adictivo de la sustancia. En todo caso, esta dependencia psíquica al cannabis sería resultado de diferentes factores variables en cada individuo, como su perfil psicológico y conductual. De ahí la importancia de que en los entes asociativos de usuarios de cannabis exista un control psicológico y médico de sus miembros, de cara a detectar casos de adicción o abuso que pudieran generar disfunciones en el desarrollo personal, familiar, social y/o laboral del individuo.

## 5.2 El consumo de cannabis no genera psicosis

La mayoría de autores coincide en que el consumo de cannabis no es la causa de aparición de una patología psicótica. Si bien sí hay una opinión común que indica que el uso de sustancias psicoactivas en personas que ya presentan un sustrato patológico, que puede no haber debutado en forma de brote psicótico, lo haga tras el consumo de alguna sustancia psicoactiva como es el caso del THC en el cannabis, o cualesquiera otra con tal capacidad psicoactiva. De hecho, la gran mayoría de los consumidores de cannabis no desarrollan psicosis, con lo que el vínculo entre cannabis y psicosis aparece mediado por complejas interacciones contextuales, genéticas y moleculares (Greydanus *et al.*, 2013). En esta línea, la prevalencia a lo largo de la vida de esta enfermedad se establece clásicamente alrededor del 1% (Montes y Saiz, 2000). Sin embargo, según el informe OEDA, la prevalencia del consumo de cannabis «alguna vez en la vida» ha aumentado a más del doble entre 1995 y 2015.

Se teoriza que la posibilidad de desarrollar esquizofrenia inducida por cannabis viene determinada por una disfunción en la maduración cerebral post-natal, ya que el consumir cannabis en

un momento crítico, como la adolescencia, puede trastornar el desarrollo y maduración de los circuitos neuronales prefrontales (Bossong y Niesink, 2010). Como vemos, debe existir un sustrato neural alterado para que se dé el trastorno indicado. Podemos decir, pues, que el cannabis no genera psicosis, pero quizás, en una persona con patología de base, el consumo de dosis altas de THC puede generar la aparición de un brote psicótico, y por tanto, solo en personas con patología previa, en las que la enfermedad psicótica está ya presente antes de consumir cannabis. Si bien otras sustancias psicoactivas o eventos vitales podrían igualmente también desencadenar la aparición de dicho brote psicótico. Se ha observado que, incluso en individuos con alto riesgo a desarrollar psicosis, el uso de cannabis únicamente fue predictor de la transición a psicosis en aquellos individuos que cumplían los criterios para abuso o dependencia, sugiriendo una relación dosis-respuesta en el desarrollo de esquizofrenia en personas de alto riesgo (Kraan *et al.*, 2016).

En efecto, tras numerosos estudios, no se ha podido establecer una asociación clara entre el uso de cannabis y los síntomas psicóticos, especialmente en usuarios de cantidades moderadas o bajas de cannabis. De hecho, los estudios realizados con CBD (cannabidiol, uno de los 61 cannabinoides de la planta) muestran que dicho cannabinoide posee efectos antipsicóticos. Asimismo, mediante estudios de resonancia magnética funcional, se ha observado que el CBD tiene un efecto modulador, e incluso preventivo, en relación a la pérdida de volumen cerebral, para los pacientes esquizofrénicos, tal y como han indicado diferentes autores (Auther *et al.*, 2012; Bhattacharyya *et al.*, 2012; Hermann y Schneider, 2012; Zuardi *et al.*, 2012).

Por último, como apunta el doctor Hill, en la prestigiosa revista *Nature* (Hill, 2015), existen factores demográficos que pueden ser estudiados para descartar la relación causal entre cannabis y esquizofrenia. En esta línea explica que, por ejemplo, no existe una mayor prevalencia de esquizofrenia en EEUU, tras los años 60, cuando se comenzó a extender el consumo de cannabis, aunque

aumenta un 20% el consumo entre adolescentes, la incidencia de esquizofrenia se ha mantenido estable en todo el mundo. Tampoco existen diferencias en ratios de esquizofrenia entre países donde el uso de cannabis es más prevalente. Se conoce, a su vez, que las personas que padecen esquizofrenia consumen cannabis con mayor prevalencia que la población general, pero aunque el cannabis puede empeorar los síntomas positivos de la enfermedad (alucinaciones, delirios), también puede aliviar los síntomas negativos de la misma (ansiedad, aislamiento social). Por tanto, es posible que dichos pacientes se estén auto-medizando para tales síntomas, y por eso, exista mayor incidencia en el consumo de cannabis en dicha población.

### 5.3 El daño pulmonar generado por un cigarrillo de marihuana no equivale al producido por una cajetilla de tabaco

Diversos titulares de periódicos han afirmado que un «porro» genera más posibilidades de cáncer de pulmón que 5, 10 o finalmente 20 cigarrillos. La equivalencia de un cigarrillo de cannabis a 20 cigarrillos de tabaco, en cuanto a su potencial dañino pulmonar, resulta poco creíble por múltiples razones: es claro que el cannabis, y en concreto el THC, actúa como broncodilatador. Si se consume una combinación de tabaco y cannabis, los productos nocivos que nos aportaría el tabaco penetrarían con más facilidad en el árbol bronquial, por la broncodilatación que aporta el THC. No resulta recomendable la combinación de tabaco y cannabis, como igualmente sería menos dañino para los pulmones el consumo de cannabis inhalado mediante vaporizador, no fumado.

Pero es mucho más evidente que la cantidad de componentes nocivos que encontramos en 20 cigarrillos de tabaco, como la nicotina, el alquitrán, el amoníaco, entre otros, no se hallan en el cannabis. Por ello, parece poco probable que exista mayor riesgo pulmonar en un cigarrillo de cannabis que en varios de tabaco, sin perjuicio del efecto nocivo del consumo de cannabis fumado.

Cuando se consume cannabis combinado con tabaco, entre otras sustancias, se inhala cianuro de hidrógeno, alquitrán, nicotina,

nitrosaminas propias del tabaco, aminos aromáticas, óxido de nitrógeno, amoniaco, benzopirenos y trazas de plomo, selenio, arsénico, cromo y níquel, entre otras sustancias. Algunas de estas sustancias son muy cancerígenas y otras, tóxicas a determinadas dosis. Si se consume cannabis sin combinar con tabaco, se minimiza esta situación, si bien es cierto que se siguen introduciendo en el organismo sustancias cancerígenas derivadas de la combustión del cannabis.

#### 5.4 No existe constancia de sobredosis por cannabis

En la escasa literatura científica, no se ha encontrado referencia directa a alguna muerte por sobredosis de cannabis. Los datos sobre la que podía ser la dosis letal de cannabis para un humano se extrapolan de las dosis letales para ratones, pues, como indicamos, no se han producido muertes asociadas a la sobredosis por cannabis, con lo que es difícil que llegue a saberse exactamente cuál sería dicha dosis letal para humanos. Por ello, no puede administrarse una dosis letal, principalmente por vía inhalada, que es la manera más común de consumir cannabis.

De hecho, en forma herbal, no se puede administrar una dosis letal en el periodo de tiempo necesario para que resultara tóxica y mortal. Para conocer la dosis letal de una droga o fármaco, los estudios se hacen con animales de laboratorio, a los que se administra la sustancia a estudiar en dosis crecientes, hasta que la mitad de los animales no puede tolerarla y fallece, esto se conoce como dosis letal 50 (DL50).

Un estudio clásico realizado con ratones de laboratorio muestra valores de DL50 muy variables dependiendo de la vía de administración y el sexo de los animales, siendo las que generan mayores índices de DL50 (menos letal) las vías intragástrica e inhalada (Rosenkrantz, Heyman y Braude, 1974). Hay autores que indican que al no haber podido hallar valores DL50 para humanos, proponen una medida denominada margen de exposición (MOE), que se define por el ratio entre el punto de curva donde empiezan los efectos adversos y el consumo estimado de dicha sustancia. Según los resultados de su estudio, estos autores señalan la necesidad de

reformular los listados de peligrosidad de las drogas, ya que observan que el cannabis posee el mayor margen de exposición entre todas las sustancias estudiadas, a diferencia del alcohol, donde aparece un menor margen del esperado. Algunas sustancias han sido sobrestimadas en su peligrosidad, mientras que otras han sido muy subestimadas (Wiesbecket *al.*, 1996).

Un estudio realizado en ratones (Vallée *et al.*, 2014) reveló otro motivo por el que una sobredosis de cannabis no podría darse. Cuando una persona fuma marihuana (y activa los receptores CB1), su cerebro produciría un neuroesteroide llamado pregnenolona (precursor i.e. de la progesterona), que contrarresta los efectos del cannabis. El resultado es un bucle en el que cuanto más THC absorba el cuerpo, más pregnenolona producirá. Este ciclo reduce la capacidad de adicción e incrementa sustancialmente la tolerancia a la sustancia, aumentando la cantidad requerida para que el consumo de cannabis resulte letal.

### 5.5. El cannabis no genera patologías del sistema inmunitario

Por último, debe indicarse que el consumo de marihuana no provoca patologías en el sistema inmunitario. En este sentido debe afirmarse que sabemos que los cannabinoides modulan el sistema inmunitario, vía activación de los receptores CB2, generando una supresión de la respuesta inmune (Einstein, 2015). A causa de este proceso, los cannabinoides se muestran útiles en las enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunitario «ataca» a las células del propio organismo (i.e. esclerosis múltiple, artritis reumatoide, síndrome de colon irritable, diabetes, sepsis, osteoporosis, entre otros) (Cabral, Rogers y Lichtman, 2015). En este caso, el sistema inmunitario se convierte en el agresor. Los cannabinoides son útiles porque aportan, además de un efecto analgésico y antiinflamatorio, una modulación del sistema inmunitario hacia su normalización, es decir, que los cannabinoides actuarían hasta conseguir normalizar la función del sistema inmunitario, sin llegar a inmunodeprimirlo.

Respecto a patologías víricas, como el VIH, se ha observado en modelos animales que la administración crónica de THC previo a la inoculación del virus lleva a un leve descenso en la carga viral, sin alterar el ratio de CD4/CD8, ni el nivel de linfocitos (Molina *et al.*, 2011). También, en otro estudio realizado con animales, se muestra que la administración de un agonista CB2 (molécula que activa el receptor del mismo modo que los cannabinoides) produce un efecto protector frente la encefalitis inducida por el VIH (Gorantla *et al.*, 2010). De este modo, la administración de THC se muestra con potencialidad protectora frente a las infecciones en estados de inmunosupresión.

En los colectivos de pacientes seropositivos, sobre todo en los años 70, se estudió la incidencia de infecciones oportunistas en grupos de consumidores de cannabis y no consumidores. El resultado no encuentra diferencia significativa entre las infecciones que presentaban los pacientes, con un relato de mejoría subjetiva y mejor calidad de vida en los pacientes que si la usaban.

Sin duda faltan estudios sobre los efectos de los cannabinoides en el sistema inmunitario, pero no se puede negar que hasta el momento no ha surgido epidemiológicamente ninguna patología inmunitaria específica por el consumo de cannabis, y son muchos los consumidores crónicos de esta sustancia.

## 6.- Regulación del cannabis: aspectos sociológicos

*H. Madera*

### 6.1 La solución de cárcel y multas ha fracasado

La prohibición se mantiene con medidas coercitivas, básicamente, cárcel y multas. Así, tanto el Código Penal, como otras normas administrativas de carácter sancionador, especialmente la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad ciudadana, fundamentan el sistema represivo del Estado frente a los usuarios del cannabis.

A pesar de que en España hay cientos de miles de multas y decenas de miles de encarcelados, el consumo de cannabis no disminuye, mientras que la sociedad paga un alto coste. La principal cuestión que ha de centrar el debate no es la inocuidad del cannabis, sino si está justificado seguir aplicando multas y cárcel a sus usuarios y cultivadores (Cebrián, 2002), máxime si tenemos en consideración que el fundamento esencial de nuestro Derecho penal es el de intervención mínima.

En 2012 se produjeron en España un total de 318.966 detenciones por todos los conceptos, de las que 21.440 (el 6,72%), fueron por tráfico de drogas. Este año se consiguió un porcentaje ligeramente superior al del promedio anual de la de década (6,49%), tras recuperarse del descenso registrado en 2011 cuando se obtuvo el menor del citado periodo, debido a la variación negativa obtenida ese último año (el 3,78%) en cuanto a los detenidos por tráfico de drogas. La proporción de detenciones por cada delito conocido fue en 2012 de 0,29%, mientras que por cada delito conocido de tráfico de droga se practicaron 1,48 detenciones (REITOX, 2013).

Según la estadística anual sobre tráfico de drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (2014)

(en adelante, CITCO), hubo 21.581 detenidos por tráfico de drogas en España, de los que el 56% lo fueron por tráfico de cannabis, con 318.326 denuncias, de las que el 87% fueron por consumo y uso de cannabis. El mismo informe asegura que el cultivo, la producción y el consumo de hierba de cannabis (marihuana) siguen siendo generalizados en toda España.

## 6.2 Usuarios de cannabis en España

Según la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas realizada por el Plan Nacional sobre Drogas (2013), el 30,4% de la población española entre 15 y 64 años habría consumido cannabis al menos una vez en la vida, mientras que de la población española entre 15 y 64 años habría consumido cannabis al menos una vez en la vida. La misma encuesta consideraba que el 47,2% de los usuarios son no problemáticos, a lo que hay que añadir otro 27,8% de consumidores de bajo riesgo. Estos datos de consumo se confirman prácticamente con el Informe del Observatorio Español de las Drogas y Adicciones (2017), donde el 31,5% de la población española entre 15 y 64 años habría consumido cannabis al menos una vez en la vida, y 9,5% de la población española entre 15 y 64 años habría consumido cannabis en el último mes.

A pesar del vertiginoso aumento de multas y encarcelamientos por cannabis, la misma encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas del año 2013 indica una percepción de disponibilidad muy alta, pues un 64,6% de la población piensa que lo puede conseguir fácilmente en menos de 24 horas. Esto prueba el fracaso de la prohibición y las medidas coercitivas.

Los Informes de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (en adelante, FAD) muestran una mayoría de españoles partidarios de la despenalización del cannabis. Así, con datos del 2014, el 52,1% de la población apoya la legalización, mientras que los que apoyan la prohibición serían un 44%. Comparado con los datos del 2004, los partidarios de la prohibición disminuyen del 49,5% al 44,4%, además se ha producido lo que la FAD denomina: «Abrumador aumento de partidarios de la venta o suministro controlado,

opinión que ha crecido desde el 25,5% al 46,2%» (FAD, 2014). Es decir, según el estudio *La percepción social de las Drogas en España* FAD (2014b):

«Como puede observarse en la Tabla 6.6, respecto al consumo de cannabis, en 2014 menos de la mitad de la población (42,5%) considera que debería prohibirse y sancionarse aun en privado, frente al 43,8%, que cree que debería estar permitido el consumo de los adultos en privado y el 8,7% que no pondría limitación alguna a los adultos. Una ligerísima mayoría (algo menos del 53%) apostaría en este momento por la permisividad para el consumo de cannabis, en una tendencia creciente que ya se observó en 2004, momento en el que los y las partidarios de la prohibición ya eran minoría, pero algo más alta que en la actualidad (45,4%).» (p. 71).

Por su parte, los datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (2018) (en adelante, CIS) son nítidos: cuando se pregunta por el primer problema que existe en España, un 0% considera que sean las drogas, indicando un 35,8% el paro, un 15,6% los/as políticos/as en general, los partidos y la política y un 12,2% la corrupción y el fraude como los principales problemas sociales. Cuando se pregunta: ¿qué problema le afecta a usted más personalmente? El 0% considera la droga su primer problema, el 0,1% considera que sea su segundo problema y otro 0,1% lo considera su tercer problema, por lo que considerando los tres primeros problemas, que afectan personalmente, la droga solo aparece en un 0,2%, mientras que el paro es el 28,6%, los problemas económicos, el 22,3% y los/as políticos/as en general, los partidos y la política, el 11.3%.

En este apartado del barómetro no existe un apartado específico para el cannabis, sino que está englobado dentro de concepto más amplio «drogas». Hay que considerar que, según Informe de la FAD 2014 antes mencionado, la percepción del cannabis es diferente al del resto de drogas, como ejemplifica que exista un grupo

específico del 18% de la población a favor de la liberalización del cannabis, no así del resto de las drogas. Según vemos, para el CIS, la droga como problema está en porcentajes entre el 0% y el 0,3% de la población española, de lo que podría inferirse que, si el CIS preguntara específicamente por el cannabis en su encuesta, el porcentaje de población que lo considera un problema se acercaría al 0%.

En el barómetro de noviembre 2018, por primera vez se introducen aparte dos preguntas específicas sobre la legalización del cannabis. Así, en la pregunta 20 se plantea: «Cambiando de tema, como usted sabe, hay algunos países en los que últimamente se ha legalizado la venta de marihuana. ¿Está usted a favor o en contra de que en España se legalice la venta de marihuana en determinados establecimientos y en determinadas condiciones?». El 47,2% se declara a favor, mientras que está en contra el 41,6%. La pregunta 20ª puntualiza: «¿Y en concreto para el uso médico?», en este caso, está a favor el 84% y en contra, el 9,2%. Hay que decir que faltan preguntas sobre el autocultivo, actividad muy integrada socialmente tras décadas de normalización. Tampoco se plantean preguntas sobre las multas por tenencia y consumo, bastante desacreditadas en la actualidad.

### 6.3 La teoría de la escalada

La teoría de la escalada fue lanzada por F. Hubbard (1915), en un principio se empezaba con picar entre comidas y se acababa en el alcoholismo. Con el curso de los tiempos, ha ido cambiando los peldaños de la escalera, aunque con explicaciones semejantes.

El Centro de Investigación sobre Política de Drogas (2002), por sus siglas, RAND, analizó las respuestas de más de 58000 estadounidenses, recogidas entre 1982 y 1994, por la encuesta nacional sobre drogas de abuso. El estudio señala que no encontraron pruebas de la teoría de la escalada.

Jan van Ours de la Universidad de Tilburg, Holanda, analizó encuestas realizadas en Ámsterdam en 1987, 1990, 1994 y 1997. En sus resultados señalan que el uso de cannabis no causa el de co-

caína, sino que está más relacionado con características personales (Van Ours, 2001).

El análisis longitudinal de los datos del Observatorio Nacional de Drogas, indicado en el anterior apartado, anula esta explicación causal, desmintiendo que el consumo de cannabis sea la antesala del consumo de otros estupefacientes.

Por otro lado, debe señalarse que, en la actualidad, la OMS no reconoce la existencia clínica del denominado síndrome amotivacional. De hecho, la bibliografía científica al respecto resulta anticuada y poco convincente. Ni siquiera los defensores de este síndrome se ponen de acuerdo en sus síntomas. Incluso la FAD (2004) en su página web, al hablar de los riesgos del cannabis, dice que el síndrome amotivacional es «aún muy discutido», hecho que no cambiará, pues los estudios de campo no confirman su existencia.

Se trata, en definitiva, de una sustancia usada desde hace miles de años sin generar problemas sociales. Durante siglos esta planta ha sido fiel compañera de la humanidad, apareciendo citada en la famosa farmacopea del emperador chino Shen Nung, datada en el 2737 A.C. En no pocas excavaciones arqueológicas han aparecido restos del uso psicoactivo del cannabis. Un reciente estudio ha analizado todos estos registros arqueológicos, y su conclusión es que el cannabis acompaña a la humanidad desde hace más de 10.000 años. Día a día, durante miles de años, la humanidad ha usado cannabis sin que se vean grandes efectos secundarios (Mayke, W., Dieter, D., Christian, L., Pavel, E., Tarasov, 2016), por lo que escudarse en la necesidad de nuevos estudios es solo dilatar el proceso de legalización.

#### 6.4 Adolescentes y cannabis

Permitir el autoabastecimiento como forma de reducción de riesgos es una medida defendida por algunos autores desde hace tiempo (Riley y O' Hare, 2000). Por ejemplo, en el informe 2015/16 del Observatorio Cannabis se indica que «en cuanto a la cuestión de la prevención y de la reducción de los posibles riesgos y daños

asociados al consumo de cannabis, los clubes encuestados cuentan, en su mayoría, con actividades o talleres asociados a este punto» (Urriola, 2016). Sobre esta reducción de riesgos entre adultos, los partidarios de la prohibición del cannabis aseguran que perjudica a los jóvenes.

Lo primero que hay que señalar al respecto es que la mayoría de los datos sobre consumo en adolescentes no hacen una distinción entre el uso y el consumo problemático, del que no lo es. Así afirman:

«En algunas sustancias de uso muy prevalente entre los adolescentes, como el alcohol y el cannabis, se hace necesario disponer de indicadores que permitan diferenciar niveles de consumo que suponen un mayor riesgo o reflejen la existencia de un trastorno (como el consumo perjudicial, el abuso o la dependencia) (...) A diferencia de lo que ocurre en el caso del alcohol, no ha habido apenas intentos de seleccionar indicadores de un uso problemático de cannabis hasta hace relativamente poco tiempo.» (Villalbí, J. R. Suelves, J.M., Saltó, E., Cabezas, C., 2011).

Otro de los argumentos utilizados por aquellos que no quieren que se produzca un proceso de apertura en materia cannábica consiste en asegurar que la regulación incrementaría el consumo de cannabis, si bien los datos sugieren justo lo contrario. Así, el Boletín Estadístico del European Monitoring Drug Centre (2016) (en adelante, EMDC) señala que en Francia se da un consumo de cannabis, para dicha anualidad, del 22.1% entre *young adults* (de 15 a 24 años). Francia es uno de los países europeos con la legislación más severa con el cannabis, pero eso no evita estar entre los países que lideran los rankings de consumo entre los *young adults* europeos. En España, con una política más tolerante que la francesa, el consumo entre *young adults* es del 17%, mientras que en Holanda, referente clásico de la tolerancia en Europa, es del 15,6%. Si se pregunta si lo han fumado alguna vez a lo largo de su vida a jóvenes

de 15 y 16 años, los porcentajes de Francia son del 39%, mientras que en España y Holanda están en el 27%.

Estos datos fueron confirmados por un estudio de la Universidad de Tilburg, donde se analizó el consumo de cannabis entre los adolescentes de la República Checa tras la descriminalización del 2010. En sus conclusiones, el estudio señala que esta descriminalización del cannabis no afectó a la edad de inicio al consumo (Palali y Van Ours, 2014).

En Estados Unidos, la situación es aún más evidente. La Washington University School of Medicine examinó datos sobre el consumo de drogas en adolescentes de 12 a 17 años, durante un periodo de 12 años, desde 2002 a 2013, en una encuesta de más de 216.000 adolescentes de los 50 estados. Este estudio fue apoyado por el National Institute on Drug Abuse, que pertenece National Institutes of Health. Los resultados del estudio se publicaron en junio del 2016. Su título fue: *Prevalencia declinante de trastornos por marihuana entre los adolescentes de Estados Unidos, 2002 a 2013*. Concretamente, el estudio detalla que los trastornos por marihuana entre los jóvenes han descendido un 24% de 2002 hasta el 2013, además, durante ese periodo, el uso entre adolescentes descendió también un 10%. Mientras sucedía esto, diez estados relajaron sus leyes penales contra el uso adulto y trece estados aprobaron la marihuana medicinal (Grucza, R.A., *et al.*, 2016).

Otro estudio, realizado por el Center on Juvenile and Criminal Justice, analiza el comportamiento de los adolescentes californianos en 2010, antes de la reforma, así como 2011 y 2012, uno y dos años después de la reforma. Los resultados señalan que el comportamiento de los adolescentes californianos «ha mejorado de forma dramática» desde la legalización del cannabis del 2010 (Males y Bunchen, 2014).

Un estudio federal, realizado por National Survey on Drug Use and Health (2014), señala que al comparar la combinación del 2012 y 2013 con la del 2013-2014, el consumo entre adolescentes de 12 a 17 años no se ha incrementado. Interpretaciones de estos estudios americanos señalan que, al separar el cannabis del merca-

do ilegal, se elimina la criminalización del usuario y los problemas asociados a ella, los jóvenes serían los más beneficiados por esta separación de mercados. Ante esta situación, «si queremos preservar la integridad de los menores, la mejor opción es normalizar el consumo de cannabis para aprender a convivir con sus riesgos» (Martínez Oró, 2016).

A la vista de los índices de consumo de cannabis en España y de las percepciones sociales al respecto de una legalidad menos restrictiva al respecto, la vía prohibicionista o represora ha fracasado, pues no ha logrado reducir el uso y consumo de la sustancia, a la vez que aumenta el número de ciudadanos que piensan que debe darse una respuesta a la cuestión que pase por más libertad individual y amplitud del régimen legal actual referido al cánnabis.

Nos encontramos, pues, ante conductas socialmente aceptadas que, además, presentan aspectos positivos relacionados con la salud individual y colectiva, pues se trata de una sustancia que cuenta con principios activos eficaces, principalmente en el tratamiento paliativo de diversas dolencias graves; además de que, con una regulación eficaz, se eliminarían los riesgos que supone adquirir en el mercado negro una sustancia adulterada.

En esta misma línea del mercado negro debe señalarse que una regulación efectiva atacaría de raíz al problema del narcotráfico, las mafias y mercado ilegal vinculado al tráfico de esta sustancia. Y todo ello sin perder de vista que sería un modo excelente de aumentar ingresos vía tasas y/o impuestos especiales, e impuestos directos, para el Estado.

# 7.- Aspectos penales del cannabis en España

**Héctor Brotons y Francisco Azorín**

## 7.1 Aproximación

A lo largo de la historia, las sociedades han cultivado cannabis con finalidades muy diversas: desde el consumo recreativo-social, espiritual o medicinal, hasta el cultivo para la obtención de distintos tipos de fibras.

Hoy en día, en las sociedades occidentales, los usos más comunes de esta planta son el recreativo-social y el médico. Así lo demuestra el último informe sobre Drogas del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (2017), en el que se indica que: en Europa, la droga ilegal que más se consume es el cannabis, ya que 87,7 millones de europeos adultos (de 15 a 65 años) han consumido cannabis en algún momento de su vida (el 26,3% de este grupo de edad). Esta preponderancia del cannabis en el uso de las drogas se confirma en el caso concreto del Estado español, según los datos arrojados por la encuesta de 2017 sobre alcohol y otras drogas del Ministerio de Sanidad, donde se indica que, en los últimos 30 días, el 7% de la población española había consumido cannabis (PNSD, 2017). Es precisamente este uso de la planta, para su consumo, el que más polémicas sociales y controversias jurídicas plantea.

Ya desde la aprobación por la ONU de la Convención Única sobre Estupeficientes, en el año 1961, se obligaba a los países firmantes a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para limitar a fines exclusivamente médicos y científicos la producción, fabricación, distribución, uso, etcétera, de más de un centenar de sustancias estupeficientes. Estas fueron recogidas en las listas anexas al indicado instrumento internacional. Se incluyó el cannabis, en concreto, en las listas I y IV, reservadas a

las sustancias más peligrosas y con un valor médico o terapéutico muy limitado. Incluso esta que se realizó con escasa o nula atención a criterios de tipo médico o científicos. Hace ya cincuenta años, y en una dócil adaptación de la Convención, España aprobaría la Ley 17/1967 del 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y se adaptan a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas, norma que vino a prohibir cualquier cultivo de cannabis que no contase con la preceptiva autorización de las autoridades sanitarias. Esta Ley sigue en vigor, siendo actualmente el organismo público sanitario autorizante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Desde entonces, el ordenamiento jurídico español ha ido reproduciendo de manera permanente el modelo de regulación prohibicionista. Un modelo consistente en la persecución legal del usuario de cannabis que parte de la concepción moral de dicho usuario como delincuente y que estigmatiza a un colectivo social, al que se le considera, desde el punto de vista sancionador, como enemigo; o, en el mejor de los casos, es tratado como un adicto, es decir, como un enfermo. El desarrollo de este modelo, que cuenta con la sanción como institución nuclear, se ha ido apoyando, entre otras, en las diferentes leyes de seguridad ciudadana, herederas en parte de la antigua ley de vagos y maleantes, culminando en 2015 con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que contribuye a ahondar profundamente en el modelo.

Desde la mitad del siglo xx, el prohibicionismo, con un discurso hegemónico de la problematización social de la droga, se arrogaba la capacidad de terminar con el consumo, los problemas asociados a él y con el narcotráfico. Sin embargo, la realidad ha demostrado que cada día la normalización social del cannabis llega más lejos, y cada vez empuja más el movimiento cannábico, que en España data de hace más de treinta años. La prohibición ha conseguido poner en marcha una vasta maquinaria de control social, a través del cannabis, que acapara buena parte de los recursos para el control de drogas en el sistema de justicia administrativa, penal

y penitenciaria. Según el Informe del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (2016), en el año 2015, de las 390.843 denuncias por consumo o tenencia de drogas, el 86% se referían al cannabis.

Los fallos evidentes del modelo han provocado cambios de tendencia, y donde tradicionalmente se abogaba por el prohibicionismo, se comienzan a adoptar modelos de regulación enfocados a la reducción de riesgos. Así, en los últimos años, un número creciente de países (Portugal, Uruguay, Colombia, Canadá, muchos estados de Estados Unidos, entre otros) han ido rompiendo con el paradigma dominante del prohibicionismo, generando un punto de inflexión y creando una nueva tendencia internacional, encaminada a la legalización.

En nuestro país, determinadas personas que han trabajado en altas instancias jurisdiccionales en la lucha contra el narcotráfico han realizado trabajos académicos en donde abogan por la regulación de las drogas para solucionar este problema (Manjón-Cabeza, 2012). También hemos podido observar cómo los defensores de una política de drogas justa y basada en la reducción de riesgos están imponiendo cada vez más sus argumentos, frente a los impulsores de las políticas prohibicionistas, siendo significativo cómo estos últimos hace tiempo que no defienden de manera pública y rotunda su modelo restrictivo.

En la presente exposición, vamos a plantear diversos aspectos y actuaciones que han tendido a normalizar y, en la medida de lo posible, regular el uso del cannabis sin intervención de los mecanismos penales del Estado.

Así, en primer lugar, debe indicarse que desde la defensa en los Tribunales, se ha logrado que en España se haya ido acogiendo la idea de la atipicidad penal de las conductas de autocultivo para autoconsumo, así como las de autocultivo compartido, y ello en base a diferentes justificaciones y argumentos, entre los cuales se encontrarían los derechos de los ciudadanos al libre desarrollo de su personalidad, o el uso terapéutico de tales conductas.

Se han establecido, en este sentido, una serie de criterios jurisprudenciales que, si bien todavía no puede afirmarse que sean unánimes, sí que son ampliamente aceptados por los Juzgados y Tribunales españoles.

Es uno de estos criterios, por ejemplo, que la cantidad de cannabis que un usuario puede destinar a autoabastecimiento se ponga en relación con el ciclo natural de cultivo de la planta. Es decir, que el aprovisionamiento, en casos de cultivo de exterior, supone que el usuario dispone, para su autoconsumo, de la cantidad de sustancia que precisa para todo un año, sin que la posesión de dicha cantidad tenga relevancia penal. Y aunque cada vez son más los jueces y magistrados que comparten este criterio, sigue habiendo sentencias dispares.

En el mismo sentido, se ha ido definiendo el concepto de cannabis fiscalizable, aunque sigue siendo un concepto jurídicamente indeterminado. Existen sentencias con diferente opinión en la determinación de un dato que, en principio, debería ser objetivo, como es la consideración de qué debe considerarse como cannabis estupefaciente y qué no. Esta falta de determinación hace, por ejemplo, que con la mera presencia de un cultivo, y sin mayores datos sobre la posible comisión de un delito, se concedan por los jueces autorizaciones de entrada y registro. Estas permiten a las fuerzas y cuerpos de Seguridad intervenir y, en su caso, destruir unos cultivos que, en ocasiones, resultan posteriormente penalmente irrelevantes. Se evidencia así lo necesario de contar con una regulación que evite esta inseguridad jurídica

Igualmente, desde la perspectiva de los derechos individuales, la sociedad civil sigue opuesta a lo que se consideran ataques a los derechos individuales, como es la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, o la normativa sobre Seguridad Vial (con los denominados drogatests). Es necesario un cambio y perfeccionamiento de la regulación sobre la materia.

Por otro lado, la sociedad civil ha liderado y puesto en práctica un modelo de regulación a través de las asociaciones o clubes sociales de cannabis. Este hito ha sido avalado por juristas, tribunales

y expertos es un ejemplo para muchos países en su apuesta por el cambio de paradigma.

Estos avances también se están dando en el terreno legal y político, y como no puede ser de otro modo, se está planteando un cambio de regulación en materia de cannabis. Así, hay distintas iniciativas en el parlamento nacional y en los parlamentos autonómicos que abundan en este sentido. En varias de ellas se contiene el autocultivo y los aspectos aquí abordados en relación con el consumo de cannabis.

También en varios parlamentos autonómicos se han presentado diferentes proposiciones legislativas o no legislativas que instan al gobierno central a regular los aspectos relacionados con el cannabis (Navarra, País Vasco, Cantabria, Extremadura, Canarias, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia). O han acordado crear ponencias en comisiones parlamentarias para estudiar más a fondo los problemas relacionados con el cannabis.

Asimismo, también se han aprobado leyes, como la Ley 13/2017 de Asociaciones de Consumidores de Cannabis de Cataluña (actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional) que reconocen la existencia y personalidad jurídica de este tipo de agrupaciones sociales, creando los mecanismos para su funcionamiento y para el abastecimiento de cannabis de los socios.

También hay que hacer referencia a que el Tribunal Constitucional admitió a trámite los tres recursos de amparo presentados por las asociaciones de usuarios de cannabis condenadas por el Tribunal Supremo, teniendo especial relevancia la admisión a trámite del recurso de la asociación Pannagh, que es admitido por un motivo más y diferente de los otros dos, como es la especial relevancia social y económica del asunto (supuesto que en el año 2016 fue admitido en dos casos de forma única y puede que dentro de ocho más que fueron admitidos por varios motivos, de los 0,95% de los 7.088 presentados) (TC, 2016).

Hay que recordar que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional son los dos órganos judiciales cuyas resoluciones tienen mayor trascendencia. El Tribunal Supremo, en las

sentencias 484/2015 y siguientes condenatorias de asociaciones de usuarios de cannabis, habla de la relevancia social del tema cannábico y envía mensajes al poder legislativo para que tome cartas en el asunto y regule esta realidad de especial trascendencia social.

Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional (2017) de 14 de diciembre de 2017 anuló la STS 484/2015, porque el Tribunal Supremo no había escuchado a los acusados en cuanto a su consciencia sobre la ilicitud o no de las actividades de las asociaciones cannábicas. El máximo intérprete de la Constitución ordenó retrotraer el procedimiento para que los acusados fuesen escuchados, y el Tribunal Supremo (2018) dictó sentencia por la que absolvió a los miembros de la Asociación Ebers por entender que no se podía saber si podían tener una mínima consciencia de la ilicitud del hecho. El recurso de Pannagh fue resuelto por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional nº 37/2018 de 23 de abril, en el mismo sentido y sin abordar el motivo de fondo planteado en el recurso de amparo y que abogaba por la atipicidad de los CSC que, como Pannagh, implementaban mecanismos de reducción de riesgos y daños en el consumo de cannabis<sup>4</sup>. Todos estos avances, en los planos autonómico, nacional e internacional, muestran la existencia de posibilidades de regulación en nuestro país, especialmente del uso terapéutico de la sustancia. Pero también de la regulación de una realidad social como es el consumo recreativo-social. Por ello, hay que enfocar la regulación de la sustancia desde una óptica que proteja con más eficacia la salud pública y no vulnere los derechos fundamentales de los usuarios de la misma.

Tarde o temprano, la cuestión del cannabis tendrá que ser abordada por el legislador estatal, con una necesaria interlocución de todos los actores sociales implicados, incluidas las plataformas de usuarios y cultivadores, como es el caso del OECCC, y donde los partidos políticos e instituciones, pasando por los profesionales

---

<sup>4</sup> Ver motivo noveno del Recurso de Amparo de Pannagh publicado en el libro *Recursos al Tribunal Constitucional de los Clubes Sociales de Cannabis* (2016). Ed. Regulación Responsable. p.437.

de la salud y el Derecho, den su opinión y planteen opciones y alternativas.

### 7.2 Tratamiento penal del cannabis en el Derecho español

En el ordenamiento jurídico español, en relación con el cannabis, en el artículo 368 y siguientes del CP, se *castiga a* «los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan, o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines». Penas de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la sustancia; pena que podría reducirse hasta los seis meses de prisión y a una multa inferior en grado (cuya suma supondría la mitad de valoración de la droga) (APNJTS, 2008). Esto en caso de aplicarse el subtipo atenuado, en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.

Por el contrario, esta pena podría incrementarse hasta los cuatro años y seis meses, y multa del tanto al cuádruplo del valor de la sustancia, en los casos de notoria importancia de la sustancia incautada. Cuando los hechos descritos se hayan realizado por quienes pertenecieran a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de cuatro años y seis meses a diez años, y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga. Además, las penas de prisión pueden alcanzar hasta los seis años y nueve meses, en caso de extrema gravedad, cuando la cantidad de sustancia incautada excediese notablemente de lo que se considera por notoria importancia.

Para determinar la cantidad que se entiende por notoria importancia, tenemos que acudir al ya referenciado Acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2001. En él se establece la cantidad que eleva la pena en un grado para todo tipo de estupefacientes. Para el cannabis lo establece a partir de los 10 kilogramos en el caso de la marihuana, y de 2,5 kilogramos en el caso del hachís. Sin perjuicio de ello, se ha establecido la notoria importancia en alguna ocasión en 12,5 kilogramos en el caso de marihuana con bajos porcentajes de THC, así como 10 kilogramos en el caso del hachís por los mismos motivos (SAPM, 2011).

Respecto del artículo 368 del CP debe recordarse, en palabras del Tribunal Supremo, cuál es su objetivo, a saber:

«“impedir la difusión de una práctica social peligrosa para la comunidad por el deterioro que causaría en la población”, incluye entre sus requisitos básicos el de la alteridad (facilitar o favorecer el consumo de otros), que es presupuesto básico de la punición de la conducta. Así, quedan al margen del derecho penal acciones que en una primera aproximación encajarían en los amplísimos contornos de la descripción típica del artículo 368 C.P., pero en las que no se detecten las razones que motivan esa punición por faltar la alteridad, como el consumo compartido, aunque se identifiquen actos de auxilio o facilitación recíproca entre los integrantes del colectivo. El tipo penal, en definitiva, castiga la promoción del consumo ajeno, pero no del propio consumo. La actividad que, aun siendo colectiva, encaje naturalmente en este segundo ámbito, por ausencia de estructuras puestas al servicio del consumo de terceros, no son típicas.» (STS, 2015).

En otra línea, el tipo de peligro y el bien jurídico protegido por este tipo de delitos (salud pública) nos ayudan a hacernos una idea sobre la amplitud penal del precepto y sobre la multitud de conductas que se castigan. Los delitos relativos a drogas tóxicas son delitos de peligro abstracto, esto es, que persiguen conductas que no generan un daño concreto, sino que se consideran peligrosas en sí mismas (según la experiencia general) y que por ello resultan punibles sin necesidad de poner concretamente en peligro el bien jurídico protegido. El Tribunal Supremo señala, en este sentido, que: «el cultivo de plantas que producen materia prima para el tráfico de drogas es un acto característicamente peligroso para la salud pública, no obstante que en el caso concreto no se haya llegado a producir un peligro concreto» (STS, 1997).

Por otro lado, otra sentencia del propio Tribunal Supremo explica cómo el objeto de protección, el bien jurídico protegido (la

salud pública), es especialmente inconcreto: «La salud pública no existe ni como realidad mensurable ni como suma de la salud de personas individualmente consideradas. El objetivo del legislador, más que evitar daños en la salud de personas, es impedir la difusión de una práctica para la comunidad por el deterioro que puede causar a la población.» (STS, 2005).

Es decir, se trata más bien de una concepción ética y político-criminal que de riesgo para la salud.

La salud pública, como bien jurídico, debe partir principalmente de consideraciones médicas, y debe entenderse no solamente como ausencia de afecciones o enfermedad, sino también como la presencia de bienestar, físico, mental y social. Es decir, un bien jurídico amplio y relativo; tener en cuenta lo que la comunidad considera óptimo y lo que considera insoportable, especialmente en lo que se refiere a bienestar social. La redacción del artículo del Código Penal comentado requiere una profunda modificación para así adaptarlo a la verdadera demanda social de protección del bien jurídico salud pública.

Por ello, podemos afirmar que el artículo 368 del Código Penal recoge, de manera abierta e indeterminada, un gran elenco de conductas como reprochables penalmente. Sin embargo, la Ley penal no castiga el autoconsumo, así como el consumo compartido de sustancias, pues estas conductas no las tipifica ni las considera culpables ni antijurídicas. Si bien sí son conductas sancionables en vía administrativa, siempre que no se realice, tal como luego veremos, en un lugar privado, como es un domicilio o un local, y fuera del alcance visual de terceros. Pero, como hemos dicho, se necesita modificar el citado artículo del Código Penal para evitar la inseguridad jurídica que comporta la desigualdad en las resoluciones judiciales y la persecución de conductas, que al final no están resultando sancionadas por los Tribunales, lo que no es tolerable en un Estado de Derecho.

### 7.3 Aspectos penales concretos del cannabis en España

Trataremos a continuación sobre una serie de cuestiones que definen el tratamiento penal que recibe el cannabis en España, y que consideramos que son de la mayor relevancia, para poder comprender adecuadamente como la jurisprudencia ha ido dando forma a una realidad como la que nos ocupa.

#### - No es cierto que el cultivo de cannabis en sí esté actualmente penado en España

Es necesario comenzar afirmando que el cultivo de cannabis en España no está penado por el mero hecho de realizar la acción en cuestión, sino que la misma se ha de poner en estricta relación con la finalidad de dicho cultivo de cannabis.

Solamente podemos hablar de la perpetración de un delito cuando la acción del cultivo se encuentra estrechamente relacionada con la finalidad de difusión a terceros. Así lo deja claro la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 484/2015 cuando afirma que: «Los actos de cultivo del mismo [cannabis] son punibles solo en cuanto tiendan a facilitar la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo indebido por terceros».

Sin embargo, conviene tener en cuenta que en nuestro país, la opción tomada por la mayoría de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Fiscalía es la de solicitar y, por algunos jueces de instrucción (en un número no conocido, pues no hay estadísticas), la de conceder órdenes de entrada y registro para la intervención de cannabis. Así se procede con la posterior apertura de diligencias penales, aunque no haya indicios de venta ni nos encontremos con cantidades que lleven a pensar que existe un tráfico ilícito de la sustancia.

No se entiende esta confusión en cuanto a la interpretación del concepto «cultivo» que se recoge en el artículo 368 del Código Penal. Es un artículo claro en este aspecto concreto, ya que exige la necesaria relación entre el cultivo y la finalidad de difusión a terceros para que podamos hablar de delito.

Tal vez estemos ante un problema social que trasciende a la aplicación del Derecho, y que sea un tema tabú hoy, habiendo personas que creen o quieren creer que la posesión, cultivo y consumo de marihuana deben ser castigados. Es decir, una aplicación de la ley que, más que basarse en la propia norma, se base en los prejuicios morales y en los estigmas sociales.

Por el contrario, no pasa lo mismo con la posesión de cannabis, sobre la que existe una jurisprudencia unánime sobre su no punibilidad penal. Ya en 1974 el Tribunal Supremo había determinado que el simple uso de drogas no es un delito (Montañés, 2017), reconociéndose la no existencia de delito en tales casos.

Dicho esto, se puede observar que, desde una interpretación literal, coherente y de conjunto del ordenamiento, es claro que el cultivo y la posesión de cannabis en sí no están penalizados, por lo que una futura regulación no supone un cambio sustancial, sino una armonización del derecho con la realidad social y jurisprudencial. De lo que se trata, pues, es de solucionar los problemas que plantea la falta de racionalidad de la legislación e inseguridad jurídica.

No parece razonable que, a la vista de lo que se acaba de indicar, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consideren el cultivo de cannabis siempre punible penalmente, cuando la jurisprudencia es clara al respecto y exige que exista alteridad, es decir, favorecimiento del consumo ilegal de terceros. Así como tampoco parece razonable que no exista un criterio basado en cantidades cultivadas para considerar cuando se está ante un comportamiento penalmente reprochable o no. Existen sentencias que condenan con menos de 200 gramos (SAPLP, 2018) (cantidad como hemos dicho, fijada jurisprudencialmente para la simple posesión) y otras que absuelven con más de 6 kilos (SAPC, 2003).

En línea con lo anteriormente argumentado, y en lo que a inseguridad jurídica se refiere y partiendo de la clara despenalización del cultivo para autoconsumo, se depende de la prueba de indicios en cada caso concreto. Así, se determina si el cultivo es para autoabastecimiento de una persona o de un grupo de personas

que contribuyen equitativa y proporcionalmente al mismo, o si, en cambio, el objetivo de dicho cultivo es difundir el cannabis a terceras personas, entrando este último comportamiento en el tipo del artículo 368 del Código Penal.

- Cantidades: La barrera entre de lo legal y lo ilegal

Para tener una imagen completa del tratamiento penal del cannabis en España, otra cuestión clave es la de los umbrales de penalidad, según las cantidades aprehendidas a la persona en cuestión.

Entre uno de los indicios que toma en consideración la jurisprudencia para determinar la existencia o no de delito, uno de los más relevantes, y el que más debate jurídico genera, es el relativo a la cantidad de sustancia intervenida. En no pocas resoluciones judiciales la cantidad de droga aprehendida al sujeto ha servido al Juzgado para determinar la intención. Es decir, si el detenido la poseía para destinarla al autoconsumo o si, por el contrario, estaba destinada a la venta. En lo que respecta a la cantidad para consumo propio y lo que se considera de notoria importancia, el Tribunal Supremo estableció su criterio en el ya citado Acuerdo del Pleno con fecha 19 de octubre de 2001, en el que utilizó una tabla elaborada por el citado órgano, a partir de un informe del Instituto Nacional de Toxicología, sobre dosis medias de consumo diario; tabla que se mantiene presente en la actual jurisprudencia.

Conforme a dicha tabla, se establece que un consumidor habitual de cannabis suele adquirir la cantidad necesaria para consumir entre tres y cinco días. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha elevado hasta doce los días el posible acopio de sustancia (STS, 2004), considerando que se ha venido estableciendo de forma aproximada que un consumidor de hachís consume en ese periodo entre 50 y 150 gramos de hachís y entre 20 y 250 gramos de marihuana (STS, 2003). Aunque hay multitud de sentencias del Tribunal Supremo que consideran estas cantidades como meramente orientativas (STS, 2002), habiendo elevado esta cantidad, la jurisprudencia de la mayoría de Audiencias Provinciales, a la de 300 gramos para la posesión de cannabis (STS, 2002).

Esta cantidad ha venido ampliándose para casos en que se produce un autocultivo de plantas de cannabis; cuando no estamos ante sustancias ya preparadas y dispuestas para el ulterior consumo (SAPV, 2015).

Para poder comprender adecuadamente lo que acaba de exponerse, sería interesante tomar en consideración algunas resoluciones judiciales en las que ha actuado profesionalmente quien suscribe, entre la que podemos citar, por ejemplo, la dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, de 15 de enero de 2015. Esta sentencia va más allá de la interpretación jurisprudencial comentada anteriormente. Establece la distinción presuntiva entre cantidad destinada al consumo o destinada al tráfico en unos 20 gramos diarios, que multiplicada por los días del año, resultaría un total de 7.300 gramos, que sería la cantidad orientativa fijada jurisprudencialmente.

En los casos en que se produce un cultivo de plantas de cannabis, el autoconsumo ha de ponerse en relación con el período de tiempo en que se produce el cultivo; período que generalmente comprende varios meses o un año, ya que estamos ante sustancias naturales que no se someten a proceso químico alguno y, por tanto, sus tiempos de crecimiento y floración son determinados.

En este punto, la sentencia 484/2015 del Tribunal Supremo anteriormente comentada ha venido a aclarar una cuestión hasta ese momento controvertida en la jurisprudencia. Así, al expresar el alto Tribunal que el cannabis es un estupefaciente de ciclo natural de cosecha, admite implícitamente que no podamos acogernos a los parámetros orientativos de tres a cinco días, incluso doce.

Algunos jueces y tribunales venían considerando que un acopio para autoconsumo era indiciario de delito, cuando el mismo superaba la cantidad de sustancia que se podía consumir entre cinco y doce días. En este sentido, esta Sentencia del Tribunal Supremo ha reconocido la falta de tipicidad penal de un cultivo con un ciclo natural de cosecha, superando aquel erróneo criterio. Esta obviedad biológica (no existen cultivos o plantas que produzcan cannabis cada cinco a doce días) todavía está siendo ignorada por

algunos juzgados y tribunales. Esto lleva a la irracional situación de que pueda acabar condenándose a personas con cantidades menores de cannabis y, sin embargo, se absuelva a otras con cantidades superiores, lo que no deja de suponer una indudable inseguridad jurídica.

Debe considerarse, asimismo, que puede haber otros motivos por los que las cantidades de cannabis que se han de considerar a efectos de autoconsumo puedan ser superiores a las citadas, entre ellas, por ejemplo, que se cultive cannabis para obtener hachís. En este sentido, Madera (2017e) señala que, para algunos consumidores, diez gramos diarios de flor seca como cantidad de consumo no es suficiente, pues cuando se es consumidor de hachís, se requiere una cantidad de marihuana mayor para conseguir una extracción de la misma suficiente. Según esas entrevistas, el rendimiento en extracción de la flor seca oscilaría entre 1% y 10%.

La UNODC (2010) indica un rendimiento de entre el 1% y el 3%. No obstante, estaríamos hablando de un cannabis de mucha calidad. Para dar unas cifras aproximadas que puedan ser tenidas en cuenta en una futura regulación, podríamos establecer un rendimiento en hachís de un 10% en relación con el peso de las flores y hojas anexas de cannabis (marihuana). No podemos obviar esta reflexión dado que gran parte de los usuarios españoles consumen hachís, generalmente procedente de norte de África, ya que es un producto de difícil elaboración, dada la actual prohibición. Por lo tanto, hay que tener en cuenta a estos usuarios, ya que uno de los motivos de la regulación integral es evitar el tráfico de drogas internacional. En este supuesto concreto, destacan los métodos de cártel entre el norte de África y la costa andaluza, movimientos que causan problemas de violencia y gasto en infraestructura y medios policiales.

- Cantidad de cannabis no penada como parámetro para una futura regulación del cultivo

Las consideraciones jurisprudenciales expuestas permiten realizar una serie de concreciones legales, al objeto de que los

consumidores cuenten con una referencia para el autocultivo y el consumo propio. Se podrían establecer cantidades concretas y máximas de tenencia para consumo, las cuales se fijarían dentro de los límites que se considerasen oportunos. Los anteriormente señalados nos parecen adecuados, a saber: la cantidad de 20 gramos diarios que señala el Tribunal Supremo sería el límite superior, teniendo en cuenta el consumo diario para un gran consumidor, pudiendo entender subsumible en dicha cantidad cualquier parámetros de consumo personal (medicinal, gran consumidor, consumidores de hachís, etc.). Con estos datos podemos reflexionar sobre las posibles cantidades permitidas para cultivar por parte de los autocultivadores y usuarios.

Así, desde un punto de vista político criminal, lo que debería lograrse con una adecuada regulación, sería establecer (conforme señala la jurisprudencia expuesta) unos parámetros de control sobre las cantidades a cultivar. Se evita el riesgo de una posible desviación de la autoproducción, así como el de consumos problemáticos (adicciones, menores, incapaces, etc.).

Dicho esto, no podemos dejar a personas con consumos mayores apartadas de la ley. En referencia a esto, nos gustaría citar un extracto del Informe efectuado por dos catedráticos expertos en política de drogas que, con respecto a los Clubes Sociales de Cannabis, expresaban lo siguiente:

«Consideramos que igualmente pueden formar parte de esa asociación autogestionaria del consumo consumidores abusivos o adictos. Dentro de los objetivos de estas asociaciones está el promover un consumo responsable y socialmente normalizado de la droga, por lo que no se alcanzaría a comprender por qué debiéramos renunciar a que estas asociaciones, con fácil y poco problemático acceso a esas personas, no pudieran aportar sus capacidades para atraer a tales consumidores hacia un consumo controlado de las sustancias.» (Díez y Muñoz, 2012).

Estas referencias las tenemos igualmente en el anexo de la Circular de Fiscalía 1/1984 que establecía la dosis de diferentes sustancias, fijando la del cannabis entre 15 y 20 gramos de consumo diario, en base a una referencia científica para establecer estas cantidades (Aguar, 1982).

La dosis de 20 gramos de consumo diario, manejada actualmente por la jurisprudencia, viene establecida en el informe del Instituto Nacional de Toxicología de 18 de octubre de 2001, que sirvió para establecer las dosis de consumo habitual y de notoria importancia comentada más arriba. Sin embargo, dicho Informe completo no se conoce y solo tenemos acceso a la tabla resumen elaborada por el gabinete técnico del Tribunal Supremo, aunque suponemos que será la misma expresada en la obra referenciada en el Anexo de la circular de la fiscalía indicado. Por tanto, no tenemos constancia de la referencia científica exacta para establecer esa cantidad, aunque sí nos parece que 20 gramos diarios es una buena base científica, legal y sociológica sobre la que empezar la reflexión.

Debe tomarse en consideración, igualmente, que las reglas relacionadas con el peso, aparte de haber sido utilizadas tradicionalmente por la jurisprudencia, también tienen la conveniencia técnica de que pueden servir como parámetro para las cantidades de consumo, tenencia o transporte, por lo que servirían perfectamente para una futura regulación.

También existe el método de regulación por plantas, es decir, determinar las autorizaciones por número de plantas de la sustancia y no tanto por la cantidad diaria de consumo ha de ser igualmente considerada como posible alternativa. Esta fórmula presenta mayor facilidad de gestión por parte de los agentes de la Administración que fuesen encargados de la supervisión y control de los cultivos, como se indicaba en el estudio y propuesta de regulación, realizado por el Grupo de Estudios de Política sobre el Cannabis (2017) del que este trabajo quiere ser complementario.

En cuanto a la regulación de la autorización por plantas y no por peso de cannabis, se pronuncia Madera (2018) de la siguiente manera:

«Casi todos los autocultivadores españoles consideran que un aprovisionamiento de 10 gramos diarios cubriría sus necesidades. Esta cantidad cuenta con una sólida jurisprudencia a favor. Peritar un cultivo es complejo, ya que hacerlo por número de plantas puede dar lugar a errores y las estimaciones oficiales resultan excesivas. Sería más realista considerar que 0,3 a 0,5 gramos vatio en interior y de cincuenta a ciento cincuenta gramos por metro cuadrado de exterior.»

Consideramos por ello razonable que en una futura regulación se establezca una cantidad de producción concreta de flor de la planta hembra. Esta debería fijarse en 3.650 gramos como máximo. Tiene más sentido fijar dicho límite en base a la producción que no en base a un número de plantas, dada la diversidad biológica existente entre las diferentes variedades de cannabis sativa y también en base a los diferentes métodos de cultivo, que posibilitan que, con tres plantas de exterior, se pueda alcanzar una producción mayor que con 40 plantas de menor tamaño, o incluso diferencias con mayor rango.

Se podría establecer un número de plantas, en cultivo exterior, a partir del cual se pudiera establecer un control del pesaje, con los datos expuestos más arriba, lo proponemos fijar en 15 plantas. En este sentido, el informe de Sequeros Sazatornil (2003) establece que: «la producción de una planta en exterior puede ser de hasta 300 gramos por planta». Por otro lado, sería un dato de referencia la autorización para el cultivo de 20 plantas para usuarios terapéuticos que permite la Legislación colombiana.

#### Partes de la planta sometidas a fiscalización

Respecto a las partes de la planta del cannabis sometidas a fiscalización, lo cierto es que la Sentencia del Tribunal Supremo (1995), entre otras, establecía que toda la planta se reputaba estupefaciente y que, al contrario que con las sustancias sintéticas, no sería necesario determinar su pureza. Gran parte de las sentencias que recogían esta postura ni siquiera establecían la necesidad de que la

planta tuviese más de un 0,2% de THC. Sin embargo, el usuario de cannabis solo consume los cogollos o sumidades floridas. Y esta realidad social es la que vamos a exponer, tomando en consideración las normas internacionales de fiscalización de estupefacientes y psicotrópicos.

Comenzaremos citando el artículo 1b de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de Nueva York, enmendada por el protocolo de 1972, que expresa que se entiende por cannabis fiscalizable: «Las sumidades, floridas o con fruto, de la planta del cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe».

A continuación, dicha Convención Única señala en su artículo 1c que: «Por *planta de cannabis* se entiende toda planta del género cannabis».

Es decir, según la norma en que se basa, y a la que se remite nuestra normativa interna, determina que solo es fiscalizable la parte de la planta con fruto y las hojas anexas a estos frutos, pero no así los tallos ni las hojas unidas a los mismos. Y esto porque los usuarios o consumidores de cannabis solo consumen las flores o cogollos.

Por lo tanto, no es solo que el uso social, como principio integrador e interpretador del Derecho, tenga que ser tenido en cuenta para determinar la sustancia fiscalizable a efectos de consumo o tráfico, sino que estas partes fiscalizables de la planta han sido definidas por la Convención sobre estupefacientes de 1961. La antigua Convención Internacional sobre restricción en el tráfico del opio, morfina y cocaína (1912), suscrita por el Estado Español, define al cáñamo indio en su artículo 1 como: «la extremidad seca, en flor o con fruto de los pies hembra del *Cannabis Sativa* L. de los cuales no ha sido extraído la resina». Esta norma determina que tan solo son fiscalizables las plantas hembras de la planta del cannabis.

A nivel nacional, algunas normas se han referido a este tema. Así, a modo de ilustración, puede citarse la Ley nº 19.172 de Uruguay, que regula la producción y venta de cannabis. Define la sustancia

objeto de regulación en su artículo 5º, letra B párrafo 2º, donde se indica que: «Se entiende por cannabis psicoactivo a las sumidades floridas con o sin fruto de la planta hembra del cannabis, exceptuando las semillas y hojas separadas del tallo, incluidos sus aceites, extractos, preparaciones de potencial uso farmacéutico, jarabes y similares cuyo contenido en tetrahidrocannabinol (THC) natural, sea igual o superior al 1% de su volumen».

Parece que hay una confusión en cuanto a las partes de la planta que son fiscalizables o no, muchas veces se afirma por los técnicos de análisis que cuando la planta supera el 0,2% de THC, ya está sujeta a fiscalización. Y esto porque, conforme al Protocolo de Naciones Unidas ST/NAR 40 para el pesaje y análisis de muestras de cannabis, así como para la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, este porcentaje de THC es el que nos sirve para diferenciar si estamos ante cáñamo industrial no sometido a fiscalización (en base al Reglamento CE nº1420/98 del Consejo de 26 de junio de 1998), o estamos ante cannabis psicoactivo, sometido a fiscalización por la Convención sobre Estupefacientes de 1961.

En todo caso, una vez que sabemos que la planta no es cáñamo industrial, tenemos que ver qué partes de la planta son consideradas cannabis, a los efectos de fiscalización por el Convenio de 1961.

En multitud de ocasiones es afirmado, por los técnicos de laboratorio del área de Sanidad de las Delegaciones de Gobierno, que toda parte de la planta que supere el 0,2% de THC ya está sometida a fiscalización. Sin embargo, esto no es correcto. No debe confundirse el THC que fiscaliza el Convenio de Psicotrópicos, firmado en Viena en 1971, con el Convenio de Estupefacientes de Nueva York de 1961. Para entender las diferencias entre estos dos convenios que en no pocas ocasiones se confunden a la hora de fiscalizar el cannabis, vamos a citar extractos de informes anuales de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes).

Así, el Informe anual de la Junta Internacional de Estupefacientes (2012) (en adelante, JIFE) indica lo siguiente:

«En la actualidad no hay ninguna planta, ni siquiera las que contienen ingredientes psicoactivos, que esté sujeta a fiscalización con arreglo al Convenio de 1971, aunque en algunos casos los ingredientes activos que contienen pueden estar sometidos a fiscalización internacional. Por ejemplo, la *catina* y la DMT son sustancias sicotrópicas incluidas en la Lista I del Convenio de 1971, en tanto que las plantas y los preparados de origen vegetal que las contienen, a saber, el *khat* y la *ayahuasca*, respectivamente, no están sujetos a restricción ni medida de fiscalización alguna».

La JIFE (2016) en su informe anual dice lo siguiente: «Además, el dronabinol (delta-9 tetrahidrocannabinol), principal ingrediente activo del cannabis, y otros isómeros de tetrahidrocannabinol (THC) están clasificados como sustancias sicotrópicas en las Listas II y I, respectivamente, del Convenio de 1971».

Por lo tanto, es necesario hacer una interpretación minuciosa y estricta de qué parte de la planta del cannabis está fiscalizada y qué parte no lo está. Ayudará a saber qué parte de lo incautado en un procedimiento podría considerarse destinado al consumo o tráfico por parte de los investigados. Aunque es cierto que toda planta del cannabis que supere el 0,2% de THC estaría fiscalizada con respecto a los convenios, según la legislación europea, solo se entiende por cannabis fiscalizable la sumidad florida. Esto resulta de suma importancia a la hora de realizar los pesajes y de saber qué cantidad de cannabis es susceptible de ser consumida y, por lo tanto, poder determinar si hay o no notoria importancia.

#### Necesidad de acreditar el porcentaje de THC de la planta

Actualmente existe una línea jurisprudencial mayoritaria que entiende que no es necesario determinar la pureza en THC del cannabis incautado, a la hora de determinar si nos encontramos o no ante una sustancia fiscalizable.

Por lo indicado, exponemos la siguiente reflexión que nos servirá como parámetro para tener en cuenta en una futura regulación:

«El principio de legalidad establece que nadie podrá ser sancionado si no ha realizado una acción previamente calificada como delito, falta o sanción administrativa. Además, debemos tener en cuenta que la interpretación de los preceptos legales, más concretamente los preceptos penales, deberá hacerse de acuerdo con criterios lógicos, técnicos o de experiencia.» (STC, 1989).

Tenemos un precepto legal que hace referencia a conceptos indeterminados o no definidos concretamente en el propio artículo y que se concretan por referencia a otras normas o a criterios científicos (norma penal en blanco), como ocurre con el artículo 368 del Código Penal, que habla de «drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes».

Para completar la definición de dicho artículo, se acudirá a criterios acordes a la doctrina desarrollada por la ciencia del Derecho y a la realidad social, y no en base criterios moralistas.

En cuanto al concepto de droga tóxica, podría tenerse en cuenta lo definido por la Organización Mundial de la Salud, en adelante, OMS:

«Aquella sustancia natural o sintética cuya consumición repetida, en dosis diversas, provoca en las personas: 1) el deseo abrumador o necesidad de continuar consumiéndola (dependencia psíquica), 2) la tendencia a aumentar la dosis (tolerancia) y 3) la dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia, que hace verdaderamente necesario su uso prolongado para evitar el síndrome de abstinencia».

Para algunos autores, dichos términos hacen referencia a las sustancias citadas en los convenios internacionales de fiscalización y las incluidas en el ámbito nacional (Jubert, 1999).

Sin embargo, aunque en la doctrina jurisprudencial existen diversas interpretaciones en cuanto a lo que es una droga tóxica, la línea mayoritaria y la que se ha impuesto, tanto por los jueces como por la doctrina científica, es la de que drogas tóxicas son solo las estupefacientes y las psicotrópicas. Es decir, las que están contenidas en las listas de los convenios internacionales (Convenio de 1961 sobre estupefacientes y de 1971 sobre psicotrópicos). De ahí que el Código Penal enuncie el principio mediante una oración subordinada explicativa: drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas.

En cuanto a la naturaleza de la sustancia, si no se analiza la pureza de THC de la misma, carecemos de elemento científico alguno, y por tanto, cabría afirmar que se está vulnerando uno de los principios recogidos en el preámbulo de nuestra Carta Magna, en la que se hace alusión a la necesidad de promover una sociedad democrática y avanzada, sin dar la espalda a criterios científicos, piedra angular en el desarrollo de una sociedad justa. Y todo esto porque, como señalan otros autores (Rey, 1999), también hay que tener en cuenta la Ley nacional que traspone la directiva europea citada, donde se define como cannabis fiscalizado el de contenido superior a un 0,2% de THC.

Existe multitud de jurisprudencia sobre el cannabis, en donde no se considera necesario que el informe analítico de la sustancia aprehendida exprese el porcentaje de T.H.C. (STS, 2013). En este tipo de sentencias se pueden ver argumentos como el siguiente:

«Tal como declara la defensa, los argumentos defensivos ligados a una posible insignificancia de la dosis psicoactivas que integraban las piezas de hachís chocan con el obstáculo de una jurisprudencia que (no sin algunas oscilaciones) ha considerado que no es preciso concretar el grado de THC (tetrahidrocannabinol) que posee el hachís, sino que basta con tener presente el peso bruto de la droga intervenida, porque es un producto vegetal, obtenido sin procesos químicos, que no admite manipulaciones ni adulteraciones,

cuyo grado de pureza deriva de causas naturales como la calidad de la planta según la zona de cultivo, o la sección de las partes componentes de la misma, como el tallo, las hojas o las flores.» (STS, 2010).

La inclusión del THC en la Lista I del Convenio de psicotrópicos de 1971 permitía su utilización en investigación científica, aunque dificultaba la comercialización de productos farmacéuticos con fines terapéuticos. En 1991 la Comisión de Estupefacientes, a recomendación de la OMS, trasladó el THC/dronabinol de la Lista I a la II, menos estricta, en buena medida, a causa de la presión de la industria farmacéutica de Estados Unidos (Sánchez, 2017). De esta manera, el THC sintético (mucho más difícil de producir) se puede comercializar por la empresa farmacéutica, mientras que al cannabis natural no se le reconoce eficacia terapéutica por los convenios (Sánchez, 2017).

El Protocolo ST/NAR/40, elaborado por la UNODC (2010), diferencia entre cannabis psicoactivo y cannabis industrial con base al porcentaje de T.H.C. Fija como límite superior legal de la fibra de cannabis entre el 0,2 y 0,3% de T.H.C. en Europa y Canadá, respectivamente, porcentaje límite que consideramos muy bajo, teniendo en cuenta la posibilidad de producción de cannabis con bajo contenido en THC, sin apenas efectos psicoactivos y con mayor contenido en CBD, extractos de CBD para uso farmacéutico o de complemento alimenticio. En este sentido, se han producido modificaciones de ese límite en varios países europeos, como Italia y Suiza, que lo han subido 0,6% y 1%, respectivamente.

En lo referente al cultivo del cáñamo, el Real decreto 1729/1999, por el que se establecen las normas para la solicitud y concesión de ayudas para el lino textil y el cáñamo, en el apartado 2 de su artículo 12, establece la realización de controles sobre el contenido en T.H.C., sin hacer alusión el referido Decreto sobre los contenidos máximos de este principio activo. Por su parte, podemos encontrar referencia a una concentración máxima en T.H.C. en el Reglamento (CE) n° 1529/2000 de la Comisión de 13 de julio

de 2000, por el que se fija la lista de las diferentes variedades de cannabis sativa subvencionables por la Unión Europea, indicándose que solo se incluirían en esa lista de variedades autorizadas las que registrasen un porcentaje de T.H.C. que no superase el 0,3% y, en las campañas siguientes, aquellas cuyo porcentaje no supere el 0,2%. Esta tesis viene avalada por la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia de la Unión Europea. De forma reiterada, esta ha manifestado que el cultivo del cannabis se encuentra despenalizado, siempre que el contenido del T.H.C. de las plantas no sea superior a una pureza del 0,2% en T.H.C.

Otro modo de distinguir qué es y qué no es considerado como droga respecto del cannabis podría ser la relación de los principales cannabinoides presentes en la muestra (T.H.C., C.B.N. y C.D.B.). Si la relación entre en [THC + CBN]: [CDB] es  $<1$ , entonces la planta de cannabis se considera un tipo de fibra. Si la relación es  $>1$ , se consideraría psicoactiva. Por tanto, es esta ecuación la que nos permitiría determinar si nos encontramos ante una sustancia estupefaciente, o si, por el contrario, se trata de un cannabis industrial, y por ende, ajeno a cualquier reproche penal.

En nuestro Estado, el organismo con competencias atribuidas en relación con la determinación de si una sustancia es estupefaciente o no es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, en adelante, AEMPS. Dicho organismo fue creado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Tiene su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» y se aprueba su Estatuto.

La citada agencia posee competencia en cuanto a la fijación de criterios con respecto a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas y, en concreto con respecto al cannabis. En este sentido, existen distintos informes de este organismo que indican expresamente que la fiscalización del cannabis depende de su contenido en T.H.C. Un Informe de la AEMPS (2004) concluye que: «un cannabis con una concentración en Delta 9 tetra *hidrocannabinol* del

0,2 % o inferior no debe considerarse incluida en las listas I y IV del Convenio de 1961 sobre estupefacientes».

De este modo se pronuncia Sequeros (2003), en un informe que dice lo siguiente:

«(...) La destinación, por otra parte, del cannabis sativa a la producción agrícola e industrial (elaboración de fibras, tejidos, cordelería y alpargatería), así como la obtención de aceites y semillas, utilizados tradicionalmente para la fabricación de jabones blandos y la alimentación de aves, no debe, en la praxis, plantear problemas añadidos acerca de la licitud de su cultivo al quedar eliminado del ámbito punitivo u cualquier planteamiento desde dichas perspectivas. La ausencia de idoneidad de estas variedades de cáñamo común para producir concentraciones tóxicas de principio activo permite erradicarlas como modalidad punible de cultivo.»

Supuesto todo esto, debemos confirmar el error en el que incurre la línea jurisprudencial mayoritaria, por lo que debemos acudir a sentencias que, reconociendo esta realidad material, solventan la cuestión. Las Sentencias del Tribunal Supremo número 154/2007, de 1 de marzo y 833/2003, de 9 de junio, entre otras, exigen la existencia de un grado de pureza en la sustancia incautada. Debemos indicar que una de las sentencias citadas anteriormente, en concreto, la del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2013, argumenta que no es necesario obtener el porcentaje de pureza, refiriéndose a una cuestión distinta, que es la de la dosis mínima psicoactiva, es decir, la cantidad de principio activo incapaz de provocar un daño en la salud y que se fija en 10 miligramos de T.H.C.

Esta doctrina se extiende incluso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. A modo ilustrativo podemos citar una sentencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante (2014). Señala que un cannabis Delta 9 T.H.C. del 0,2%, o inferior, no debe ser considerado como incluido en las Listas I y IV del Convenio de 1961 sobre sustancias estupefacientes.

Este mismo porcentaje es acogido por otra sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (1997), donde señalan que el cannabis tiene actividad farmacológica a partir de concentraciones superiores al 0,5%.

De conformidad con lo expuesto la Circular de la Dirección General de Sanidad (1976), los derivados cannábicos cuyo porcentaje de T.H.C. sea inferior al 0,5% deben ser considerados como cáñamo industrial.

La jurisprudencia menor se ha hecho eco de esta realidad. En este sentido, una Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (2015), donde se absuelve al condenado avalando que tratándose intervenciones con dosis mínimas de sustancia psicoactiva (0,18% T.H.C) no puede considerarse sustancia estupefaciente. Posteriormente, manifiesta que: «en el cannabis [...] el porcentaje de concentración del principio activo se estima entre el 0,4 y el 4% en la grifa o marihuana», no considerándolo cannabis cuando el porcentaje de T.H.C. es inferior al 0,4%. Ello sin perjuicio de que hace mención del porcentaje del 0,2%, como el aplicable en otra parte de la sentencia.

Otra resolución judicial que debe ser considerada es la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife (2013), que es muy ilustrativa en esta materia, y expone:

«[...] el mero hecho de poseer las plantas de marihuana e inferir que, por su elevada cantidad, estaba preordenada al tráfico no conlleva necesariamente una responsabilidad penal, siendo preciso para ello que aquellas contengan una mínima cantidad de principio activo suficiente para producir un efecto nocivo en la salud por la potencial afectación de las funciones físicas y psíquicas de una persona. Hay que reseñar que el delito contra la salud pública que se imputa en este caso, al ser de peligro abstracto, exige la existencia de un riesgo de daño para el bien jurídico protegido, debiendo concluir que las cantidades insignificantes no producen tal

riesgo, pero tampoco cuando la sustancia intervenida no sea tóxica, esto es, que sea incapaz de producir efecto de algún tipo en el organismo.»

En conclusión, se hace necesaria una regulación más minuciosa que aclare todas estas cuestiones y se elimine la inseguridad jurídica a la que se ven sometidos los cultivadores de cáñamo industrial y los cultivadores para autoconsumo de cannabis psicoactivo.

### Incidencia sobre el principio de tipicidad penal

Como se ha dicho anteriormente, el artículo 368 del Código Penal no es un artículo claro. En este sentido, parte de la doctrina (Brotons, *et.al.*, 2017) pone en duda el encaje constitucional del citado artículo y esto se debe a la colisión con el derecho a la tipicidad penal contenido en el artículo 25.1 C.E.

«Porque nadie podrá ser sancionado si no ha realizado una acción previamente calificada como delito, falta o sanción administrativa y que busca la preservación de la seguridad jurídica y del respeto a las opciones legislativas de sanción de conductas. Dicha preservación pasa, evidentemente, por el respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en todo caso una zona indudable de exclusión de comportamientos y cuya interpretación, en el caso de los tipos penales, se ha de realizar de acuerdo con criterios lógicos, técnicos o de experiencia.» (SSTC 69/1989, 206/1994 Y 184/1995).

La aplicación práctica, en el derecho penal, es el derecho a no ser condenado por conductas que no son constitutivas de delito, según la legislación vigente en el momento de producirse. Lo vulneran las aplicaciones que por su soporte metodológico o axiológico conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su

reciente orden de 14 de diciembre de 2017, deja claro que el precepto no es inconstitucional, por falta de claridad en su enunciado.

También sería lesivo el hecho de que la aplicación práctica sea dispar, contradictoria, más allá de las particularidades del caso concreto, que como hemos visto, es lo normal si hacemos un repaso exhaustivo de la jurisprudencia, en la que hay absoluciones por casos en donde se ha intervenido 20 veces más que en otros casos en donde se ha condenado. Asimismo, hay personas que, intervenidas con 500 gramos, sin más datos son condenadas, y otras en situación jurídicamente similar son absueltas.

El propio Tribunal Supremo, en su análisis del caso en la Sentencia 484/2015, reconoce que se trata de un precepto «de contornos y perfiles [...] casi desbocados; de amplitud desmesurada e inmatizada; de desmesurada extensión; y de aptitud gramatical para acoger acciones muy dispares».

El amplio término *por otro modo*, del artículo 368, incluye una infinidad de acciones, en general, menos importante que el tráfico propiamente dicho. O sea, de manera abierta, sin una clara delimitación, se sanciona de forma idéntica actos dispares, desde el transporte de las sustancias a la indicación de lugares donde comprar o identificar a los compradores personas que trafican. La disposición penal abierta es una técnica legislativa muy criticable, pues permite, en los casos de tráfico de drogas, castigar severamente situaciones que técnicamente estarían apenas en el campo de la participación o del favorecimiento, o aún de los actos preparatorios, es decir, actos totalmente distintos a la autoría del tráfico propiamente dicha. Por todo ello, resulta necesaria una modificación legal sobre estos aspectos.

#### 7.4 Derecho Penal y Derechos Fundamentales

La actual definición de la normativa penal, que incide sobre los cultivadores de cannabis para autoconsumo, afecta a diversos derechos fundamentales, por lo que a continuación se realizan una serie de consideraciones sobre las afecciones más significativas, y que deberían enfrentarse en una futura modificación legal.

- Incidencia de la regulación actual sobre la inviolabilidad del domicilio

Uno de los problemas que genera la aplicación del artículo 368 del código penal es la colisión con otros derechos fundamentales, que han de ser valorados por el legislador y los aplicadores del derecho, como por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Se enuncia, en el artículo 18.2 de la Constitución Española, «el domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito».

La inviolabilidad del domicilio significa que este espacio queda exento e inmune de cualquier invasión o agresión exterior, proceda de un particular o de un poder público. Por ello, solamente se encuentran dos vías mediante las cuales los cuerpos de seguridad podrían entrar a un domicilio privado sin consentimiento del residente: contar con una autorización judicial, o que sea un caso de flagrante delito.

Conviene señalar que esta protección del domicilio no se refiere únicamente al domicilio de las personas físicas, sino también de las personas jurídicas. En este caso, se precisa o bien el mandamiento judicial, o bien la autorización de los titulares, o de quien se encuentre en el local social, para poder acceder al mismo.

Además, en la aplicación de este precepto constitucional, se atiende a un concepto amplio de domicilio, como aquel espacio en el que el individuo vive, sin estar sujeto a definiciones necesariamente derivadas de los usos y convenciones sociales, donde se ejerce su libertad más íntima. El concepto de domicilio se extiende, por ejemplo, a habitaciones de hotel, incluso a furgonetas (siempre que efectivamente se utilice como domicilio), ya que el Tribunal Supremo considera irrelevante su carácter de bien mueble o inmueble, y la intensidad o periodicidad con la que se desarrolle la vida en el mismo (STC, 2002).

Cuando la entrada en el domicilio se basa en una resolución judicial, esta tendrá que estar suficientemente motivada, teniendo en cuenta que se trata de una restricción de un derecho fundamental.

Esta resolución ha de explicitar el domicilio concretamente afectado, el período de tiempo específico en el que podrá tener lugar la entrada o registro, y, en caso de que se trate de una resolución al hilo de una investigación penal, la persona relacionada con el domicilio que es investigado y los antecedentes de la investigación policial, de los que se deduce la necesidad de realizar en él la entrada o registro. «Para que esa motivación sea bastante en el aspecto fáctico, es preciso que el Juez disponga de indicios acerca de la comisión de un delito y de la relación del domicilio con él, no siendo suficiente la mera sospecha o la intuición de comisión de un delito.» (STS, 2017).

El amplio elenco de conductas al que se refiere el ya referido tipo penal contenido en el artículo 368 del Código Penal implica que un gran número de ellas son consideradas por jueces y fiscales como indiciarias de delito, por lo que se autorizan entradas y registros (y posterior apertura de diligencias penales) que no tendrían lugar si se diese una delimitación precisa del tipo penal.

Conductas que pudieran ser consideradas como indicio de un delito contra la salud pública (como el cultivo de cannabis) son inocuas puestas en relación con el autoconsumo, aunque sea colectivo. En consecuencia, las conductas asociadas al consumo propio se asimilan a actos preparatorios del delito del artículo 368 C.P y fácilmente motivan entradas domiciliarias.

Por otro lado, en numerosas ocasiones, los registros domiciliarios relacionados con el cannabis carecen de la autorización judicial. Se realizan tratando de justificarse en la *flagrancia del supuesto delito*, entendida, según una sentencia del Tribunal Constitucional (1993), como: «La situación en la que la comisión de un delito se percibe con evidencia, y por lo tanto con la imagen en la que un delincuente es sorprendido y, por lo tanto, visto directamente, en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a su perpetración, siendo precisamente esta situación excepcional».

Esto se concreta en la inmediatez temporal y personal y la necesidad urgente de la intervención, es decir, es necesario que se observen de manera directa por un agente transacciones de canna-

bis o haya indicios relativos a lo mismo. En todo caso, las entradas o registros de domicilio, por observarse una cantidad de plantas de cannabis o cannabis listo para el consumo, son, a nuestro entender, inconstitucionales.

Además, estas intervenciones policiales comúnmente perjudican y comprometen gravemente al afectado y causan perjuicio en su reputación social y la de quienes le rodean. Se llevan a cabo en numerosas ocasiones con total ignorancia de precauciones y de las prescripciones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a los derechos del intervenido. Además, suponen la pérdida de la cosecha, a la que ha dedicado su tiempo, lo que causa un perjuicio, así como las pérdidas económicas de lo invertido en semillas, abonos, herramientas o agua.

En definitiva, se advierte que la falta de concreción del tipo también tiene su incidencia en la vulneración del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio. Una situación que conviene corregir cuanto antes y que afecta de manera transversal y por ello es un argumento para modificar urgentemente el artículo 368 CP.

#### - Choque con los derechos de la personalidad

Otro grupo de derechos sobre los que la actual regulación relativa al cannabis incide de manera determinante es el de los derechos de la personalidad. Podemos incluir en este apartado tanto el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que la constitución eleva en su artículo 10.1 a la categoría de fundamento del orden político y la paz social, y derechos como la libertad de conciencia y la disposición del propio cuerpo, además de los derechos de los consumidores y usuarios y la protección de la salud y seguridad de estos, tal como reconoce el artículo 51 de la Constitución. No cabe duda de que la tenencia, el consumo y cultivo de cannabis, para uso personal o de un grupo de personas, se incardina en la esfera de protección de estos derechos.

Como afirma el Voto Particular a la STS 698/2016, de 7 de septiembre:

«“La salud individual no puede protegerse penalmente contra la voluntad libremente formada de su titular”. El cultivo de cannabis exclusivamente para el propio consumo es un acto de libre desarrollo de la personalidad en el que no hay lesividad alguna que no sea propia. En este sentido, la doctrina especializada ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta “un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado, que cree saber mejor que las personas lo que conviene a estas y lo que deben hacer con sus vidas”, de tal manera que puede decirse que este derecho supone “la proclamación constitucional de que, siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses”».

El individuo tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes. Ello implica el necesario reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de cada persona a ser individualmente como quiera ser, sin coacción ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. Es la persona quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc. Incluso si esta persona decide llevar a cabo conductas que pudieran llegar a afectar o menoscabar su salud. «Para la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el concepto de vida privada, que se equipara al de intimidad, no se limita a los aspectos o actividades que uno realiza fuera de la mirada del público, sino que significa el “libre desarrollo de la persona. Así, considera como parte de la vida privada “los aspectos relativos a la identidad física y social de una persona.» (STEDH).

Entendemos que para que una conducta sea sancionable, se ha de aplicar el *principio de proporcionalidad*. Para comenzar a analizar el principio de proporcionalidad en torno a la aplicación del tipo del artículo 368 del Código Penal, en cuanto la sanción del cultivo

de cannabis, habría que indicar que la filosofía de esta norma es la protección de la salud pública. El principio de proporcionalidad valora si la norma es idónea, necesaria y proporcional, para proteger el bien jurídico que se pretende salvaguardar: la protección de la salud.

En cuanto a la *idoneidad de la medida* (tipicidad de la conducta de un cultivador de cannabis por considerar que se pone en riesgo la salud de terceros). Podría decirse: si queremos reducir al mínimo el consumo de cannabis, esta medida es idónea *a priori*, definiendo como tal «la aptitud o adecuación de la medida objeto de control para conseguir la finalidad perseguida» (González, 2015). Se trata de determinar si el medio empleado es útil para alcanzar la finalidad perseguida. El propio Tribunal Constitucional (2015) ha reconocido que la idoneidad de una medida no significa que esta deba ser el instrumento óptimo para la consecución de la finalidad perseguida, sino que basta con que contribuya a acercarla.

Respecto al riesgo que supone el consumo de cannabis para la sociedad y la salud de los individuos, nos remitimos al trabajo realizado por quien suscribe (Brotons, 2017), en donde se citan los más relevantes estudios sobre la materia. En el citado trabajo se analizan las principales afectaciones de salud relacionadas con el análisis de la proporcionalidad de la medida con respecto a los Clubes Sociales de Cannabis, lo que es plenamente trasladable a los usuarios individuales o colectivos. Plasmamos aquí algunos extractos: «Afecciones a la salud. En términos generales, los estudios coinciden en que a partir de la evidencia que existe actualmente, el consumo de cannabis en adultos no supone un riesgo importante para la salud, salvo en el caso de que se utilice de forma crónica y excesiva.» (Fischer., *et al.*, 2011). «La existencia de alteraciones crónicas como consecuencia del consumo es muy controvertida en la literatura especializada. Los estudios indican que las implicaciones permanentes son poco probables o mínimas, que su persistencia es incierta e incluso que pueden tener origen en una pluralidad de factores distintos al consumo.» (Hall y Degenhard, 2013).

Los estudios coinciden en que es incierta la relación entre el cannabis y las alteraciones psicóticas o mentales en los consumidores (Zammit, *et al.*, 2008). No obstante, deben advertirse los daños psicológicos que genera el cannabis cuando su consumo se inicia en la adolescencia. Diversos estudios explican que existe mayor probabilidad de sufrir esquizofrenia y depresión en la edad adulta, cuando el consumo excesivo de cannabis se inicia a edades tempranas (Andréasson, Engstrom, Allebeck y Rydberg, 1987). Con todas estas evidencias médicas, se concluye que, aunque el cannabis puede ocasionar daños a la salud, se trata de afecciones que pueden calificarse como no graves, siempre y cuando no se trate de consumidores menores de edad.

**Desarrollo de dependencia.** Existen estudios que afirman que solo el 9% de los usuarios de cannabis desarrollan dependencia en algún punto de sus vidas (Caulkins, Hawken y Kleiman, 2012). Según datos del Plan Nacional sobre drogas, realiza un consumo problemático de cannabis el 2,2% de la población (15-64 años) (web PNS).

**Propensión a utilizar drogas más peligrosas.** En términos generales, puede decirse que los estudios disponibles demuestran que el cannabis tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más peligrosas (Hall, Degenhardt, y Lynskey, 2001). No obstante, esta postura ha sido contrastada con diversas explicaciones sociales y contextuales que entienden el fenómeno a partir de los condicionamientos socioeconómicos, culturales, biológicos del propio consumidor (Hall, *et al.*, 2001). Al respecto, puede señalarse que la relación se ha explicado a partir del hecho de que normalmente los usuarios de marihuana tienen mayor oportunidad de conseguir drogas ilícitas en el «mercado negro».

Podemos concluir que el uso de la marihuana afecta más bien poco a la salud, si se realiza un consumo responsable de la misma, así como que no genera apenas dependencia en la mayoría de los usuarios. Entendemos que una regulación del cultivo de cannabis contribuiría a proteger la salud de los consumidores cultivadores que van a saber mejor que nadie cómo cuidan sus plantas, qué

abonos utilizan, si usan o no pesticidas, así como la genética de las plantas y su concentración en THC o CBD.

**Inducción a la comisión de otros delitos.** Diversos estudios han concluido que el consumo de cannabis no es un factor determinante en la comisión de otros crímenes (Pedrsen y Skardhmar, 2010). Por un lado, la correlación es estadísticamente muy pequeña para considerarse significativa (Caulkis, *et al.*, 2012). Por otro lado, se señala que la comisión de delitos y el consumo de marihuana pueden tener origen en las mismas causas sociales. Con una regulación del cultivo de cannabis para autoconsumo evitaríamos los riesgos para la seguridad ciudadana que conlleva el ir a conseguir el cannabis a un punto de venta.

Se argumenta por algunos que supondría un aumento de sustancia puesta en la calle, cuando lo cierto es que la labor de tráfico se podría perseguir igualmente y de forma más efectiva, en cuanto a mayor disposición de recursos policiales y judiciales, pues se especializaría y se perfeccionaría la técnica investigadora, evitando gran cantidad de procesos judiciales. En cuanto a la despenalización total del cultivo, esto sería lo deseable, con excepciones relacionadas generalmente con la venta a menores. Apostamos por un proceso gradual que permita la monitorización de los cambios. En todo caso, se debería articular una modificación legislativa que articule un sistema administrativo sancionador, para el caso de incumplimientos de la futura Ley.

Por estas razones, incluir en el tipo del artículo 368 del Código Penal las conductas de los autocultivadores de cannabis no es una medida óptima para proteger la salud y el orden público, aunque esta pudiera considerarse idónea a priori. Los argumentos apuntan incluso a una creación de mayores perjuicios que beneficios.

Una vez analizados los riesgos del cannabis y la idoneidad de la ley y la jurisprudencia con respecto al cultivo de cannabis, debemos pasar a valorar su necesidad (Gonzalez, 2015). La necesidad de una medida es definida por el Tribunal Constitucional como: «ausencia de alternativas más moderadas (o menos gravosas) para la consecución, con igual eficacia, de la finalidad perseguida».

No resulta proporcional cualquier lesión punitiva provisional o definitiva, y a los derechos fundamentales, atendiendo al espíritu y finalidad de la norma, pues tratando de solucionar un problema de salud pública, se crean más problemas. Entre ellos, la vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios de esta sustancia.

No se cumple, por tanto, el requisito de la necesidad de la medida, pues como hemos visto, existirían medidas que hubieran sido más efectivas para lograr los fines que se pretenden alcanzar. Paradójicamente, regular el cultivo de cannabis para el autoconsumo es una medida alternativa más eficaz, para proteger la salud y la seguridad, que la actual redacción del artículo 368 del Código Penal.

#### - La proporcionalidad de la medida

Por último, y una vez explicadas la idoneidad y la necesidad de la medida, hay que valorar la *proporcionalidad en sentido estricto* en la aplicación de la norma (González, 2015).

Según el Tribunal Constitucional (1990), se acostumbra a exigir en este ámbito que la medida objeto de control sea «proporcionada o equilibrada, por derivarse de la misma más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto». En la jurisprudencia constitucional también pueden encontrarse referencias a la «ponderación entre la finalidad perseguida, el medio aflictivo y el derecho afectado», o «entre la gravedad del delito que se trata de impedir (y en general), los efectos negativos que genera la norma desde la perspectiva de los valores constitucionales». (STC, 1999).

En definitiva, este análisis requiere comparar el grado de intervención de los derechos fundamentales que suponen las sentencias que condenan por el cultivo de cannabis (en cantidades acordes con el autoconsumo), y los procedimientos en su contra, frente al grado de realización del fin perseguido por estas (protección de la salud pública). Es decir, se trata de ponderar los beneficios que cabe esperar mediante una interpretación y aplicación de la Ley, desde la perspectiva de los fines que se persiguen, con los costos que necesariamente se producirán en los derechos fundamentales afectados.

Anteriormente, hemos citado diversos estudios que afirman que el cannabis no supone un riesgo relevante para la salud, que presenta un índice de dependencia menor que otras sustancias, que no supone el acceso a otras drogas más peligrosas y que no está directamente relacionado con la comisión de otros delitos.

Castigar por cultivar cannabis para autoconsumo no resulta proporcional, ya que la intensidad con que se afecta a derechos como el del libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la libertad, a la igualdad y a la seguridad es de alta intensidad. Esto hace que los bienes jurídicos que se dice proteger (salud pública) no tengan legitimidad, ni fuerza suficiente, para invadir y vulnerar los derechos fundamentales señalados.

Asimismo, se incumplen los límites que establece el artículo 8 CEDH que protege el *Derecho al respeto de la vida privada y familiar* y establece:

«1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2.- No podría haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud y la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás, así como los principios generales de nuestro Estado Democrático y de Derecho.»

La jurisprudencia analizada en los apartados anteriores no entiende que el cultivo de cannabis, con cantidades que podrían ser adecuadas para el consumo del cultivador, afecte al bien jurídico y a la salud pública, ni que exista un riesgo de que esa sustancia sea consumida por terceras personas. El procedimiento para subsumir estos hechos (cultivo para autoconsumo), en el artículo 368 del Código Penal, debería valorarse desde un juicio de proporcionalidad.

lidad. Sobre todo, porque el bien jurídico que se quiere proteger se ve lo suficientemente afectado y tiene tanta incidencia como para limitar los derechos fundamentales que entran en juego en esta realidad social.

Una norma penal que supone el ingreso en prisión, y que protege un bien colectivo tan importante como es la salud pública, debe ser interpretada teniendo en cuenta el conjunto del texto constitucional, su finalidad teleológica, así como la realidad social del momento y los datos sociológicos y científicos disponibles.

Es una decisión estrictamente personal consumir cannabis y procurarse el consumo mediante su cultivo. Es el individuo quien padece los efectos del cannabis: relajación, creatividad, cambio de humor, así como los efectos negativos que pudieran darse, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte a priori al resto de la sociedad.

Es necesario evitar los riesgos de acudir al mercado negro, en donde el trato con las mafias para conseguir la sustancia que se quiere consumir puede acarrear al consumidor una merma de sus derechos a la salud y a la seguridad ciudadana. Esto atenta contra el derecho a la igualdad recogido en el artículo 14 del texto constitucional. Además, margina al usuario de cannabis (en comparación con los usuarios de otras sustancias legales y de clara mayor afección a la salud, como el alcohol o el tabaco). Ni protege su salud ni su seguridad, obligándole a procurarse la sustancia de una forma mucho más arriesgada. Aunque no dejamos de lado los perjuicios de acudir a un mercado caótico, donde no se controla lo que se ofrece o distribuye, y donde pueden darse problemas de seguridad personal para adquirir la sustancia.

La legislación actual también vulnera el derecho a la salud, contenido en el artículo 43 de la Constitución Española, en su aspecto negativo, entendido como la facultad o potestad de disponer de la propia salud personal. El Estado no puede interferir en la libertad de los individuos para controlar su salud y su cuerpo, si no se trata de una enfermedad infecciosa que pudiera suponer un problema de salubridad pública.

Es decir, el Estado no puede interferir en la libertad inherente al derecho a la salud para disponer de la salud propia. Si el Estado pudiera prohibir todas las sustancias que provocan una merma en la salud y aumentarían las posibilidades de sufrir enfermedades, tendría que prohibir todos los restaurantes de comida rápida, así como una alimentación basada en la proteína animal, en el exceso de sal y en el exceso de grasas *trans* contenidas en productos de bollería industrial, etc.

El artículo 15 de la Constitución Española, cuando habla de *la integridad moral*, está pensando en que el Estado no puede limitar el derecho a la moral del individuo, precisamente indicando qué es lo moralmente correcto y qué es lo moralmente reprobable. Todo ha ponerse en relación con la lesión de algún bien merecedor de protección.

Dejando a un lado lo anteriormente dicho, lo cierto es que la sanción penal del cultivo para el consumo personal lo que hace es vulnerar la salud de los usuarios cultivadores. Estas personas, cansadas de acudir al mercado negro a conseguir la sustancia que quieren consumir, aceptando que el consumo de marihuana pueda tener unos riesgos para su salud, lo que hacen es tratar de procurarse la misma de la manera más saludable: autocultivándola.

El sistema prohibicionista en general, las sentencias condenatorias contra cultivadores que se procuran el consumo personal y el proceso penal en sí contra los mismos (aunque no acabe en condena) constituyen una restricción a los derechos anteriormente señalados. No resulta acorde con los requisitos impuestos por el test de proporcionalidad, en tanto que no se cuenta con una finalidad legítima. La imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible para un Estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. Tampoco resulta instrumental para prevenir riesgos a la salud o combatir adicciones, pues no se ha demostrado que la despenalización del autocultivo aumente la demanda, mientras que sí es evidente que la prohibición no la ha disminuido. Finalmente, no es proporcional, en tanto que existen medidas menos restrictivas

para proteger la salud, como, por ejemplo, la regulación del cultivo para consumo personal u otros modos de intervención desde el enfoque de la reducción de riesgos, para así asegurar un consumo más saludable y con menos riesgos para la seguridad y el orden público, tanto para los usuarios como para el resto de ciudadanos.

El «proyecto de vida» de cada individuo incluye todo aquello que la persona quiere hacer con su vida y con su cuerpo, y ello sin limitarse exclusivamente a la apariencia y la profesión, sino incluyendo también actividades privadas, sociales, recreativas, culturales, de ocio y esparcimiento. En este sentido, procurarse el consumo de cannabis mediante un cultivo propio, o poseer el cannabis para su consumo, supone el medio necesario para hacer efectivo ese derecho a la intimidad en relación con el libre desarrollo de la personalidad. También, en última instancia, con el respeto a la dignidad e integridad moral de la persona.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (2000) dispuso que el derecho a la salud implica el derecho a controlar la salud y el cuerpo, por lo que prohíbe que los particulares sean objeto de injerencias y tratamientos de salud no consensuados. ¿Por qué, si el individuo se ha informado de los beneficios del cannabis para el tratamiento del cáncer o la epilepsia, no puede por su propia voluntad usar dicha sustancia para controlar su salud o mejorar su calidad de vida? Y ello sin perjuicio de que, informado de los posibles riesgos de este consumo, lo asuma igualmente de manera libre e informada.

La Sentencia de la Corte Suprema Mexicana (2015) valora muy acertadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, por claridad, extraemos parte de la misma:

«Brinda protección a un “área residual de libertad” que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. Como explicó el Tribunal Constitucional alemán en el caso *Elfes*, estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos “espacios vitales” que, de acuerdo con la experiencia histórica, son más susceptibles

de ser afectados por el poder público, sin embargo, cuando un determinado espacio vital es intervenido a través de una medida judicial o legislativa y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.

En este sentido, la doctrina especializada ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta “un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado, que cree saber mejor que las personas lo que conviene a estas y lo que deben hacer con sus vidas”, de tal manera que puede decirse que este derecho supone “la proclamación constitucional de que, siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses. El derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva del derecho a la dignidad”.

El individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes. La consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo, de tal manera que supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.»

El Tribunal Constitucional Alemán, en el caso Eppler, define este derecho de la siguiente manera:

«Puede decirse que la libertad indefinida que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad comple-

menta las otras libertades más específicas, como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la “esfera personal” que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas.» (SCSM, 2015).

En palabras similares de la Corte Constitucional de Colombia:

«El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que solo a la persona atañen, solo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen.» (SCSM, 2015).

En palabras de la Corte Suprema de Argentina: «En un Estado que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano de gobierno, la Constitución no puede admitir que el propio estado arrogue la potestad sobrehumana de juzgar la existencia misma de la persona, su proyecto de vida y la realización del mismo». (SAYO, 2009).

Este libre desarrollo de la personalidad, en palabras del Tribunal Constitucional alemán, complementa las libertades más específicas, salvaguardando de ese modo más extenso la esfera persona (SCSM, 2015).

En palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional Español (2001): «Tal libre desarrollo se orienta a la plena efectividad de los derechos fundamentales (...) vedando, entre otras actuaciones, las legislativas que limitan las potestades individuales con fundamento exclusivo en consideraciones de paternalismo moral. Es lo que sucede con la imposición de tratamientos terapéuticos (...) Incluso la disposición sobre la propia vida es manifestación del *agere licere*.»

El libre desarrollo de la personalidad, según expresa la Corte Suprema Mexicana (2015):

«Permite *prima facie* que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también permite llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección [...]. Esa elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido afecten los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona”. Es más, “al tratarse de experiencias mentales, estas se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar”».

Para la Jurisprudencia del TEDH, el concepto de vida privada (equiparable al de intimidad del artículo 18.1 CE) no se limita a los aspectos o actividades que uno realiza fuera de la mirada del público. Significa el «libre desarrollo de la persona». Así, Estrasburgo ha considerado como parte de la vida privada: los «aspectos relativos a la identidad física y social de una persona». «El derecho al desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con sus semejantes y el mundo exterior». (STEDH, 2003).

Es cierto que los derechos humanos no son absolutos, y que los mismos pueden ser limitados por otros derechos fundamentales o por valores elementales del Estado de Derecho. Los derechos fundamentales, los bienes colectivos (salud pública y orden público) y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio de otros derechos. No obstante, debe aclararse que las intervenciones basadas en fines perfeccionistas no encuentran protección constitucional, pues el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a un determinado modelo de virtud.

Procurar la salud de los consumidores de drogas y proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas del consumo de las drogas, dado que se ha considerado que esta actividad tiene efectos nocivos para el consumidor, son finalidades constitucionalmente válidas. Sin embargo, la prohibición del consumo de cannabis por la mera autodegradación moral no implica un propósito legítimo. Las autoridades están persiguiendo y condenando a los usuarios cultivadores a la persecución penal, argumentando un posible riesgo abstracto de peligro para la salud, pero lo que realmente hace es imponer modelos de conducta y hábitos saludables a un grupo de ciudadanos adultos con capacidad de discernir lo que les beneficia de lo que les perjudica.

# 8.- Otros aspectos legales del cannabis

**Héctor Brotons y Francisco Azorín**

## 8.1 Sanciones administrativas por tenencia y consumo de cannabis

Pese a la intrascendencia penal del consumo de cannabis, no es cierto que esta conducta sea estrictamente legal, ya que esta está castigada con una sanción pecuniaria en vía administrativa. Conviene comenzar este apartado señalando que antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, el consumo de cannabis ya estaba perseguido en la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana, con sanciones a partir de 300 euros y hasta 30.000. Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2015, con la nueva ley, no solo la cuantía de estas sanciones se ha visto duplicada, esta ley también incorpora nuevas conductas sancionables, en una estrategia legislativa para despenalizar ciertas conductas y tipificarlas administrativamente, con el fin de imponer multas pecuniarias de forma automática.

Así pues, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo sanciona como infracción grave en su artículo 36.16: «El consumo, o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.». Esta infracción es la más común y por la que se imponen más sanciones en relación con el consumo de cannabis.

Según el Ministerio del Interior (2016), se impusieron más de 392.900 sanciones en aplicación de esta Ley, y un total del 84% fueron multas por consumo o tenencia de drogas, en su mayoría

cannabis, lo que revela la divergencia de la legislación respecto al nivel de normalización social de esta sustancia.

En un artículo reciente de la revista *Soft Secrets*, los autores de este capítulo afirman:

«Según los datos del último anuario del Ministerio del Interior 2018 sobre sanciones por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana en el 2016 el cupo de sanciones de esta Ley relacionadas con las drogas fue del 64% (126.586 de las 197.947 sanciones) y en 2017 fue del 69% (157.694 de las 229.932). No obstante, en este anuario no se contienen los datos de la comunidad autónoma de Cataluña y de los ayuntamientos que se han delegado las competencias en materia de sanciones por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana. Para darnos cuenta de que no están todas las que son, podemos dar el dato ofrecido por el Ministerio del Interior en su anuario de 2016 en donde vemos que se impusieron más de 392.900 sanciones, donde el 84% fueron por consumo o tenencia de drogas, en su mayoría cannabis, lo que da un resultado de 330.036. Entendemos que el cupo en cuanto a drogas ha descendido por haber aumentado otras infracciones como las faltas de respeto a los agentes. Para justificar el aumento de las sanciones por infracciones relacionadas con el uso personal de drogas, y las delegaciones de las competencias en los ayuntamientos, podemos citar y aportar enlace de un artículo de la *Opinión de Murcia* que dice lo siguiente: “Las sanciones por drogas aumentaron más del 50 por ciento el año pasado frente al ejercicio de 2016, pero estos importes no son los únicos sobre los que el ciudadano debería estar al tanto, en especial el reincidente. En el caso de cometer una segunda infracción dentro del plazo de dos años, incluso si no está relacionada con las drogas, la cuantía ascendería hasta 10.401 euros por individuo. En esta ocasión, tres han sido los ciudadanos multados ante estas condiciones, dos en 2016 y uno en 2017”.» (Azorín y Brotons, 2018).

A ello han de sumarse las intervenciones en donde no se encuentra sustancia y aquellas en donde, a pesar de encontrar sustancia, no se tramitan los correspondientes expedientes sancionadores. Sobre esto último no existen datos oficiales. Quienes suscribimos estas palabras, hemos comprobado que existen muchos casos donde sucede, desde nuestra función como abogados y tras más de diez años de desarrollo de un proyecto de recursos de este tipo de sanciones, en colaboración con asociaciones cannábicas y otras entidades que trabajan en reducción de riesgos, así como con la ciudadanía en general. .

Por tanto, nos encontramos con que se pueden estar produciendo aproximadamente un millón de intervenciones al año, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supone una verdadera persecución. Quiere ello decir que prácticamente todo un sector de la población, generalmente joven y que acude a determinados lugares de ocio, ha sido intervenido, registrado e identificado, muchas personas, en más de una ocasión. Así, aparte de la conculcación de derechos fundamentales, como el de libertad de movimiento o el derecho a la intimidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedican tiempo y recursos significativos a una cuestión cuya solución actualmente no es de reclamación general, en lugar de dedicar todo ese esfuerzo a otras cuestiones.

El artículo 39.1.b) de esta ley fija la cuantía para todas las infracciones graves y las divide en tres grados: el grado mínimo de 601 euros a 10.400, el grado medio de 10.401 euros a 20.200 euros, y el grado máximo de 20.201 a 30.000 euros. La sanción que habitualmente se suele imponer cuando se trata de tenencia es la relativa al grado mínimo en su mínima extensión (es decir, 601 euros). Sin embargo, la infracción comprende todos los grados y la ley deja abierta la posibilidad a que se pueda imponer en un grado superior al mínimo, bajo razones como la reincidencia o la entidad del riesgo. De hecho, la propia norma establece que la reincidencia, en menos de dos años, de más de una infracción de la misma naturaleza declarada así por resolución firme, supone que la sanción pecuniaria se haya de imponer en grado medio (10.401

euros). Sin embargo, para el caso del cannabis, parece que este agravante no se está aplicando, al menos, de manera sistemática y generalizada. La sanción más habitual es la de 601 euros.

Merece especial consideración el artículo 54 de la norma que comentamos, que establece un procedimiento abreviado. Este precepto dice textualmente que: «Una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.».

Es decir, el interesado, en el citado plazo, podrá, si lo estima oportuno, bien pagar la mitad de la sanción (300 euros), o bien realizar alegaciones; pero nunca podrá ejercitar las dos vías simultáneamente. Este precepto, que a priori parece una oferta u oportunidad que hace el legislador al interesado, hunde sus raíces en la técnica legislativa de la «reducción por pronto pago»: una curiosa técnica que consiste en premiar a aquel que decide no defenderse. En nuestra opinión, este precepto debería ser declarado inconstitucional. Limita de manera clara el derecho a defensa de los sancionados, al vulnerar el artículo 24.2 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a un proceso con todas las garantías, así como a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

Si ya con la antigua Ley de Seguridad Ciudadana era poca la utilidad de los recursos administrativos, ahora resulta evidente que menos interesados aún harán uso de los mismos, ya que utilizarlos implica la posibilidad de pagar la sanción completa. En caso de aplicarse una agravante y establecerse la misma, por ejemplo, en 10.000 euros, la «compra» del derecho a recurrir lo sería por el nada despreciable precio de 5.000 euros, de forma que no mucha gente se va a plantear la presentación de alegaciones. Se trata de una limitación clara de los derechos del interesado, en base a la capacidad económica del mismo. Esta técnica legislativa vulnera derechos fundamentales.

Por otro lado, se reconocen en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana otras infracciones relacionadas indirectamente con el consumo de cannabis, calificadas también como graves y con aplicación del mismo régimen sancionador. Así, en el artículo 36.19 de la norma, se tipifica una infracción dirigida al propietario o encargado de un establecimiento público, como un bar, por la tolerancia o la falta de diligencia a la hora de evitar el consumo de estupefacientes. Conviene señalar que los clubes cannábicos quedan excluidos de la aplicación de esta infracción, pues no se consideran establecimientos abiertos al público, si bien es cierto que se intenta aplicar en alguna ocasión esta norma.

También en el punto 17 del mismo artículo se penaliza el traslado de personas con objeto de facilitar el acceso a sustancias. El punto 18 se castiga el cultivo de estupefacientes en lugares visibles al público. Debe aclararse aquí que esta última infracción (junto con la referencia a los lugares públicos que realiza el punto 16) no supone una habilitación legal a sensu contrario para el cultivo de cannabis en lugares no visibles al público. De hecho, la inclusión de esta infracción específica permite a la administración sancionar los hechos en vía administrativa, una vez detectado un cultivo de cannabis y llevada a cabo una investigación judicial por delito contra la salud pública con un resultado absolutorio, cuando lo habitual en estos casos era la ausencia total de responsabilidad si no concurría el delito de tráfico de drogas, fuera o no visible el cultivo. Y hay que tener en cuenta que antes no se podía sancionar administrativamente, se viera o no se viera el cultivo.

Asimismo, cabe señalar que con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana también se eliminó el conocido tratamiento de deshabituación, este queda en vigencia solo para menores de edad. Dicho tratamiento suponía la posibilidad de sustitución del pago de la sanción pecuniaria por la realización de un tratamiento de deshabituación. Se trata de un retroceso en las políticas de reducción de riesgos, pues elimina un aspecto rehabilitador para reducir la norma exclusivamente a un instrumento de política represora y recaudadora.

## 8.2 Necesidad de regulación del sector empresarial del autocultivo de cannabis

Existe la necesidad de positivizar algunas de las principales reivindicaciones del sector empresarial cannábico, para que su actividad cuente con una legislación clara que le permita el desarrollo pleno de su actividad con total transparencia y seguridad jurídica.

Se trata de una reivindicación justa y coherente con el avance de este sector que abastece a los usuarios del cannabis de todo aquello necesario para el consumo, además de lo necesario para cultivar el propio cannabis que uno consume, así como de libros, revistas especializadas y otras fuentes de información. Incluso sirve para asesorar sobre utensilios que reducen las consecuencias dañinas del cannabis, además de aportar información para que se valoren adecuadamente las consecuencias del uso.

Para poder seguir avanzando en este sentido, son precisas una serie de reformas legales que permitan un desarrollo pleno, como el de cualquier otro de los sectores, para lo que existe una legislación especial sobre el objeto de su actividad. Se podría tomar como ejemplo la industria del alcohol o del tabaco, que bajo unas pautas concretas y especiales, regulan totalmente aspectos fiscales y mercantiles

Esto, como es de esperar, no sucede con el sector empresarial cannábico; empresas tales como grow shops o empresas de distribución de semillas de cannabis, que operan en nuestro país. Pues de inicio, entre otras trabas, no cuentan con un epígrafe concreto al que acogerse en atención a su actividad, por ejemplo, lo que les lleva a tener que acogerse a figuras asimiladas.

Este tipo de comercios, con carácter general, se encuentran regentados tanto por personas físicas como jurídicas. Los códigos de clasificación normalmente son los siguientes, CNAE: 4776 como comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados. O IAE, Código 6597, como comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas.

Esto condiciona su funcionamiento, pues afecta a su actividad para realizar cualquier gestión ante las distintas administraciones. Por ejemplo, en la liquidación de impuestos, o cada vez que han de cotizar ante la Tesorería General de la Seguridad Social por sus trabajadores.

El tema de la publicidad es otro punto a afrontar en la propuesta de regulación, todo ello pensando en la especial protección que se debe brindar a los menores de edad. Ante la falta de concreción, se precisan modificaciones o creaciones normativas que regulen la publicidad y la promoción de sus servicios.

En atención a la problemática planteada, vamos a tratar de traer a colación los pocos antecedentes que existen en relación con esta cuestión. Uno de los primeros trabajos que abordó la temática fue el del Fiscal del Tribunal Supremo, el señor Sequeros Sazatornil (2003).

En este informe, en el caso en particular de la publicidad de los productos que se venden por distribuidoras y grow shops, se pone el límite siguiente: que «la propaganda de la venta de semillas de cannabis sea en cantidades para su cultivo doméstico, que en principio no excedan de las racionales para su consumo y autoabastecimiento con el mismo fin». Excluyendo la publicidad de productos y cantidades que no superen estos márgenes, que vienen a ser los márgenes del derecho penal.

Otro precedente en la materia es lo que establece la Ley 13/2017 de 6 de julio de las asociaciones de consumidores de cannabis de Cataluña. En este caso en concreto, la limitación de la publicidad se refiere a las limitaciones en la publicidad de las asociaciones y clubes de cannabis, establecidas en el Capítulo VI de la Ley, entre los artículos 21 a 24.

En primer lugar, hay que indicar que la norma catalana permitiría la publicidad de los clubes sociales de cannabis en revistas especializadas, estando más cerca del ordenamiento jurídico actual el establecer esta posibilidad para el sector en cuestión.

En el artículo 24 de dicha Ley se instauran las limitaciones a la publicidad, siendo las siguientes:

«(...) b) hacer actuaciones de patrocinio consistentes en realizar cualquier tipo de contribución, pública o privada, a un acontecimiento, actividad o individuo cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción del consumo de cannabis y c) realizar cualquier actividad de promoción para estimular la demanda del cannabis.»

En este sentido, entendemos que la Ley catalana, después de un largo trabajo de sesiones parlamentarias, ha sido la que ha abordado el tema con mayor profundidad y viene a marcar unos parámetros razonables para la regulación de esta materia.

Estas serían las limitaciones más significativas que se podrían tener en cuenta para una regulación de la publicidad de grow shops y bancos de semillas. En este sentido, debería limitarse la publicidad para que no se realice promoción del consumo, con especial incidencia en los menores, así como no patrocinar eventos donde se promocióne el consumo de cannabis, ni realizar actividad de promoción para estimular la demanda.

Otra cuestión concreta a regular sería la de los bancos de semillas de cannabis y el registro de sus variedades. La posibilidad de registrar las variedades de cannabis pasa por la autorización previa de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AEMPS, organismo competente en la actualidad, para realizar el cultivo precedente. Autorización que por lo que sabemos tan solo ha sido concedida en contadísimas ocasiones. Es necesario agilizar estas autorizaciones, o España perderá la riqueza genética que han generado los criadores de bancos de semillas de cannabis españoles, con destino al mercado coleccionista.

Existe un Registro Nacional de Productores de Semillas y Plantas de Vivero, según el que, para poder comercializar cualquier semilla o planta de vivero es preciso que los profesionales estén registrados previamente. Así lo regula la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas, plantas de vivero y recursos fitogenéticos. Este procedimiento de inscripción en el registro referido para el caso

de los productores está regulado en el Real Decreto 1891/2008, de 14 de noviembre.

En cuanto a la fiscalidad de la producción de las semillas de cannabis, actualmente se está tributando por algunos contribuyentes a través del régimen general, lo que sin duda crea un perjuicio a estos productores respecto al resto de los empresarios agrícolas que tributan a través del régimen agrario, que tiene un tipo impositivo bastante menor.

### 8.3 Cannabis y conducción

Otro aspecto importante, en el debate sobre la regulación del cannabis, es el de la conducción de vehículos a motor. En esta materia, también se produce un trato legal claramente discriminatorio hacia los consumidores de cannabis y otras sustancias respecto de los consumidores de alcohol, cuyo trato resulta menos arbitrario.

Tenemos que referirnos al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, concretamente, a los artículos 14 y 77. Ambos artículos hacen referencia al alcohol y drogas en la conducción. Sin embargo, para el caso del primero, se establece reglamentariamente unas tasas de presencia en sangre o en aire no sancionadas, pero para el resto de sustancias (incluido el cannabis), se prohíbe directamente la conducción con «la presencia de drogas en el organismo», tipificándose la conducta como infracción muy grave.

Vemos cómo actualmente el fundamento de la sanción en el caso del alcohol es la efectiva afectación a la capacidad en la conducción. Sin embargo, con el resto de drogas, la conducta que se sanciona es el consumo, con independencia de la afectación a la conducción.

Esta discriminación también resulta patente respecto a la cuantía de las sanciones. La sanción a imponer por la conducción con la presencia de drogas no alcohólicas en el organismo es, según el artículo 80.2.a), de 1.000 euros. Para el caso del alcohol, la sanción ordinaria es de 500 euros y solo procederá imponer la de 1.000 de

manera excepcional, cuando se doble la tasa reglamentariamente establecida o cuando el conductor ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior, por exceder la tasa del alcohol permitida al volante.

Es decir, por el mero hecho de haber consumido un estupefaciente diferente al alcohol, la sanción se duplica. En este sentido, la conducta sancionable se desconecta completamente del bien que pretende proteger (la seguridad vial). Se demuestra en el hecho de que, si realmente existe una afectación a la seguridad vial, la conducta pasa a constituir delito, de forma que se acaba castigando con la sanción administrativa la mera presencia de una cantidad, por mínima que sea, de sustancia estupefaciente en el organismo.

En este sentido se planteó por Auto del Juzgado de lo Contencioso nº1 de Vitoria (2016) una cuestión de inconstitucionalidad, donde se ponía en duda la constitucionalidad de este precepto: conducir bajo la presencia de drogas en el organismo (artículo 14 de la Ley de Tráfico). La cuestión de constitucionalidad planteada exponía que este precepto podía ser contrario a los artículos 9.2 14, y 25.1 CE en relación con el artículo 127 de la antigua Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común 30/1992. Al tipificar como infracción administrativa conducir con presencia de drogas en el organismo, estaría sancionando no solo los casos en los que el consumo de esas drogas afecta a la capacidad para conducir, sino también aquellos otros en los que ese consumo no produce ninguna alteración en esa capacidad. Esto conlleva sancionar el mero consumo, y esta actividad, salvo que se realice en lugares públicos (artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana), no está prohibida en nuestro ordenamiento.

De forma simplista el Auto del Tribunal Constitucional (2017) desestimó la cuestión de constitucionalidad explicada, indicando que los convenios internacionales explican que la drogadicción es un problema para el individuo y la sociedad, sin plantearse que esta afirmación tiene medio siglo. La sociedad evoluciona y la forma

de abordar esta cuestión, o problema, puede ser más lesiva que la sustancia en sí.

Por otra parte, indicábamos que, a diferencia de lo que ocurre con el consumo de alcohol, en el consumo de estupefacientes no se establece ninguna «tasa mínima». Basta la mera presencia de esas sustancias en el organismo para que se considere infracción administrativa, salvo que el conductor pueda acreditar que el consumo se haya realizado por «prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica». Siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo con diligencia.

Esta diferencia de trato que efectúa el legislador, dependiendo de que el consumo de drogas tenga una finalidad terapéutica y esté prescrito, podría ser, según sostiene el juzgado que plantea esta cuestión, inconstitucional, pues entiende que la norma establece una diferencia de trato arbitraria.

A su juicio, la diferencia entre «consumo recetado» y «consumo no recetado» carece de justificación en una norma que tiene como finalidad garantizar la seguridad vial. Según se afirma, el legislador, al considerar constitutiva de infracción administrativa la mera presencia de drogas en el organismo, aunque no afecte a la conducción, está sancionando una conducta que no está prohibida. Impone una restricción del *agere licere* de los ciudadanos que no encuentra justificación en el fin pretendido por la ley; garantizar la seguridad del tráfico.

Además, los preceptos cuestionados vulneran las exigencias del principio de taxatividad o de certeza, principio que, según el auto de planteamiento, se deriva del artículo 9.3, 14 y 25 CE. Al prohibirse la conducción con presencia de drogas en el organismo, en lugar de conducir bajo la influencia de estas drogas, la comisión de este ilícito depende del tiempo que tarde el organismo en eliminar la presencia del estupefaciente consumido.

Al respecto debe indicarse que existen evidencias científicas que este tipo de sustancias permanece en el organismo, aunque ya no tengan efectos para influir en la capacidad para conducir. Por esto, se afirmaba por el Juez que planteó las dudas sobre la

constitucionalidad del precepto: al igual que ocurre en los casos en los que las drogas se han tomado bajo prescripción facultativa, no debería sancionarse su consumo si se está en condiciones de conducir el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción que se impone, en general, a todos los conductores.

Por último, se considera también inconstitucional que la norma se remita a la presencia de «drogas», sin tomar en consideración si afectan o no a la conducción, pues hay sustancias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre las drogas y esta no afectan a la conducción. Se cita el tabaco y se alude al alcohol, aunque en relación con esta última, se pone de manifiesto que cuenta con una regulación específica.

Entendemos que este precepto (artículo 14 Ley de Tráfico) no cumple con el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad podría ser explicado de forma sencilla como que la medida que sea necesaria para proteger un bien jurídico o derecho (en este caso seguridad vial) suponga menos limitaciones para otros derechos de los ciudadanos (en este caso, la libertad de cada uno para usar las sustancias que considere oportuno, de acuerdo con su libre desarrollo de la personalidad). En palabras del magistrado que presentó la cuestión de constitucionalidad, el precepto no solo es arbitrario, sino desproporcionado. La cláusula de salvedad sobre el consumo recetado pone de manifiesto que hay técnicas de intervención menos invasivas de la libertad individual para evitar la conducción, bajo este tipo de sustancia, mediante la comprobación in situ del estado del conductor. Igual sucede con la posibilidad de establecer tasas de presencia mínima de sustancias estupefacientes en el organismo, como sucede con el consumo de alcohol, tal como prevé el artículo 4, c) de la Ley.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictó el Auto de Inadmisión arriba identificado, donde resuelve sobre el fondo. Vamos a exponer aquí brevemente los argumentos del Tribunal Constitucional que declaran la constitucionalidad de este precepto:

«a) No cabe apreciar que los preceptos cuestionados sean inconstitucionales por prohibir el consumo de drogas, a través de una norma que tiene como finalidad proteger la seguridad vial. Como se acaba de indicar, el órgano judicial entiende que estos preceptos están estableciendo una restricción del *agere licere* de los ciudadanos, mediante una norma de tráfico ajena a la finalidad perseguida con la prohibición.

Ha de señalarse, en primer lugar, que, en contra de lo que sostiene el órgano judicial, los preceptos cuestionados no tienen por objeto prohibir, en general, el consumo de drogas. El artículo 12.1 párrafo segundo de la Ley 6/2014 2014 lo que prohíbe es que los conductores puedan circular “con presencia de drogas en el organismo” y esta misma conducta es la que el artículo 65.5 c) de la Ley 6/2014 2014 tipifica como infracción administrativa, por lo que la conducta prohibida y constitutiva de infracción administrativa no es consumir drogas, sino conducir si se han consumido este tipo de sustancias. En todo caso, no está de más señalar que una norma no puede ser tachada de arbitraria por el hecho de que forme parte de una regulación cuyo objeto principal sea distinto al que se refiere la prescripción que en ella se establece. Salvo en los supuestos en los que la Constitución determina el contenido material de un tipo de leyes, como ocurre con las leyes de presupuestos, no existe una exigencia constitucional que obligue a que las normas tengan un contenido determinado o que el mismo tenga que ser homogéneo.»

Según ha establecido este Tribunal «la calificación de ‘arbitraria’ dada a una ley a los efectos de entender vulnerado el artículo 9.3 exige una cierta prudencia, porque ‘la Ley es la ‘expresión de la voluntad popular’, como dice el preámbulo de la Constitución y como es dogma básico de todo sistema democrático.

Sin perjuicio de respetar el principio de soberanía popular, a través de las decisiones del Parlamento, esto no puede ser una carta en blanco para perseguir a un sector de la población por su forma de ser. «En el presente caso no puede considerarse carente de toda justificación que el legislador prohíba conducir con presencia de drogas en el organismo. Esta prohibición se fundamenta en la existencia de una máxima de experiencia, según la cual el consumo de estas sustancias, aunque sea mínimo, puede afectar a las capacidades psicofísicas de los conductores y, por este motivo, conlleva un peligro para la seguridad del tráfico.» (ATC, 2017)

Una limitación absoluta, respecto de la presencia de una sustancia concreta en el organismo, resulta excesiva. Máxime cuando otras sustancias tienen unos mínimos de presencia no sancionables (alcohol) y otras pueden estar presentes siempre que estén recetadas y no afecten a la conducción. Procedería llevar a cabo un estudio que establezca que límites deberían establecerse respecto de cada sustancia para que la misma afectase, efectivamente, al bien jurídico protegido de la “seguridad vial”.

«b) Como se acaba de indicar, en el auto de planteamiento se sostiene también que el artículo 12.1, párrafo segundo de la Ley 6/2014, al excepcionar de la prohibición de conducir en presencia de drogas en el organismo los supuestos en los que estas sustancias han sido prescritas por un facultativo con finalidad terapéutica si su consumo no afecta a la capacidad para conducir, está estableciendo una diferencia entre lo que se denomina “consumo recetado” y “consumo no recetado” que, según se alega, carece de justificación... Estas consideraciones llevan al órgano judicial a entender que esta diferencia de trato puede vulnerar el artículo 9.3 y el artículo 14 CE..., la invocación del artículo 9.3 CE ha de quedar subsumida en la más específica del artículo 14 CE. Según ha sostenido reiteradamente este Tribunal, “el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador

de relevancia jurídica” (STC 22/1981 de 20 de julio, FJ 3). Por ello “no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el artículo 14 CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello”. Ahora bien, como también ha establecido la jurisprudencia constitucional, “el principio de igualdad no solo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida” (entre otras muchas, SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 103/2002, de 6 de mayo, FJ 4; 5/2007, de 15 de enero, FJ 2; 61/2013, de 14 de marzo, FJ 4, y 112/2017, de 16 de octubre, FJ 3). En el presente caso no cabe apreciar que la distinción que efectúa el artículo 12.1, párrafo segundo de la Ley 6/2014, entre lo que el órgano judicial denomina “consumo recetado” y “consumo no recetado” carezca de justificación. En los supuestos en los que el consumo de este tipo de sustancias ha sido prescrita por un médico, es este facultativo quien va a indicar al paciente si la dosis recetada puede afectar a la capacidad para conducir o no. En estos casos, el médico, al conocer con exactitud el principio activo que tiene la medicación que receta, está en condiciones de apreciar si la dosis indicada incide o no en la aptitud del paciente para conducir. Por el contrario, si el consumo de estas sustancias no se efectúa bajo prescripción facultativa, quien las ingiere no cuenta con una previa valoración médica sobre el alcance de sus efectos. El diferente trato que el legislador otorga a quienes conducen con presencia de drogas en el organismo, si esta sustancia no influye en su capacidad para conducir y ha sido prescrita por un médico, no solo no es arbitrario, sino que, además, es proporcionado. Las ventajas que para

la seguridad del tráfico puede conllevar prohibir conducir a quienes estén tomando medicación que tenga entre sus principios activos alguna sustancia que se considere droga cuando, por la dosis prescrita, es insusceptible de afectar a la capacidad de conducir, serían mínimas. En consecuencia, no puede apreciarse que los preceptos cuestionados vulneren los artículos 9.3 y 14 CE.»

Esta afirmación entendemos que no está basada en un análisis de la realidad, pues ningún informe o estudio médico o científico indica si se puede conducir o no, no respondiendo la interpretación dada a lo establecido por el artículo 3 del Código Civil, en cuanto a la toma en consideración de la realidad social.

El órgano judicial que propone la cuestión de Constitucionalidad considera también que:

«el artículo 65.5 c) de la Ley 6/2014, al tipificar como infracción administrativa conducir “con presencia en el organismo de drogas”, vulnera el artículo 25.1 CE al no respetar las exigencias de taxatividad que se derivan del principio de legalidad sancionadora que consagra el referido precepto constitucional. Según se sostiene en el auto de planteamiento, el citado precepto legal podría vulnerar el principio de taxatividad por dos motivos: por no concretar qué debe entenderse por “drogas”, por lo que cabría entender incluidas dentro este concepto sustancias como el tabaco o el alcohol, que según la Organización Mundial de la Salud, tienen esta consideración, y porque la conducta tipificada como infracción administrativa no toma en cuenta si las drogas detectadas en el organismo han tenido influencia en la conducción. El órgano judicial proponente sostiene que, al estar acreditado científicamente que las drogas permanecen en el organismo más tiempo del que duran sus efectos, es contrario a este principio tipificar como infracción administrativa el conducir con presencia de estas sustancias en el organis-

mo y no exigir, además, que el consumo de estas sustancias haya tenido influencia en la conducción, pues las sustancias detectadas pueden ser solo restos de las drogas consumidas que, en ese momento, han dejado ya de producir los efectos propios de este tipo de sustancias: a) La utilización del concepto “drogas” no puede considerarse contraria al principio de taxatividad. Este principio lo que exige es que las normas sancionadoras o penales estén redactadas con precisión con el fin de que los ciudadanos puedan conocer las conductas que son constitutivas de las infracciones administrativas o penales y las sanciones y penas que por su comisión se les puede imponer. Se trata, en definitiva, de garantizar, por una parte, que “los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las consecuencias de sus acciones” y, por otra, de impedir que “el órgano sancionador actúe frente a comportamientos que se sitúan fuera de las fronteras que demarca la norma sancionadora” (SSTC 283/2006, FJ 5, y 101/2012, FJ 3, entre otras muchas). En este caso, la utilización del término “drogas” garantiza esas exigencias. Una interpretación teleológica de la norma determina que solo puede entenderse como droga aquella sustancia que produce efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos con entidad suficiente para alterar las capacidades psicofísicas de quien las consume, pues lo que la norma pretende, al tipificar como infracción administrativa conducir con presencia en el organismo de drogas, es evitar que se conduzca si se han tomado sustancias que pueden alterar las condiciones psicofísicas para conducir, dado el riesgo que conducir en tales condiciones puede entrañar para la seguridad del tráfico.»

El Tribunal Constitucional concluye que no se vulnera el principio de taxatividad y, en consecuencia, dicta un Auto que inadmite la cuestión planteada. Declara, por tanto, constitucional el artículo que sanciona conducir con presencia de drogas en el or-

ganismo. Sin embargo, vamos a exponer a continuación nuestras discrepancias con dicho Auto.

En cuanto a lo expresado por el Tribunal Constitucional sobre el respeto a la voluntad popular: aunque en un Estado democrático de Derecho, el respeto a la ley es un principio capital, no por eso hay que permitir que se apliquen leyes que van en contra de la ciencia y los principios elementales de la naturaleza humana. Cuántos casos han acontecido en la historia de países que fundamentaban auténticas barbaries contra la condición humana en pos del supuesto bien común. Por lo tanto, aunque es cierto que la voluntad popular hay que respetarla como principio fundamental, no por eso hay que dejar de luchar por los derechos fundamentales de los distintos sectores de la población.

En cuanto al argumento del T.C de que es una máxima de la experiencia que el consumo de estas sustancias, aunque sea mínimo, puede afectar a las capacidades psicofísicas de los conductores, se debe indicar que no estamos de acuerdo en que temas de estricta apreciación analítica se solventen con este tipo de argumentos arcaicos.

Por poner un ejemplo que pueda servir al lector, también era una máxima de la experiencia hace siglos que el sol giraba alrededor de la tierra. Los científicos del momento que intentaron refutar esta máxima tuvieron graves consecuencias en su enfrentamiento con los tribunales de justicia de la época. Con esto queremos decir que, siempre que la ciencia con su metodología empírica pueda demostrar las consecuencias de un suceso, no debemos atenernos a este tipo de criterios jurídico místicos, basados en una máxima de la experiencia que no se sustente en estudio científico alguno. Es un principio capital en la farmacología que solo la dosis hace el veneno, que según esta dosis, podríamos o curar nuestra enfermedad o incluso morir, si la misma resulta excesiva. Es decir, creemos necesario que se realicen estudios sobre la afectación que producen ciertas sustancias en las capacidades para la conducción, y bajo qué dosis no se produce afectación alguna.

Por citar un ejemplo, hasta con drogas no fiscalizadas y normalizadas como la cafeína podríamos ver afectadas nuestras capacidades para la conducción si la dosis de esta sustancia es alta.

El *Pharmakoteon* cita unos estudios, realizados antes de la prohibición, donde se ensayaba con drogas, que ahora son ilegales, en seres humanos:

«Hay además una demanda extramédica de estimulantes en nuestra sociedad. Un ejemplo son los pilotos y los controladores de tráfico aéreo, que deben trabajar toda la noche y necesitan prestar una atención constante; los conductores de camiones y autobuses, los médicos de urgencia y, por supuesto, el personal militar. Por un accidente de la historia, la cafeína del café, de los refrescos y del té (así como la de tabletas estimulantes), junto con la nicotina del tabaco, se han convertido en los estimulantes aceptados de las profesiones anteriores. Debo recalcar, sin embargo, que la cafeína y la nicotina ocupan este puesto por defecto, pues algunas alternativas son sustancias controladas, y a despecho de que la investigación las revela como sustancias poco saludables, e inferiores a otras. Se han llevado a cabo investigaciones comparadas entre cafeína y anfetaminas, e invariablemente se ha visto que las segundas son superiores a las primeras. Estudios realizados sobre el tiempo de reacción bajo la influencia de estimulantes han demostrado que, en general, las anfetaminas lo acortan, mientras la cafeína no lo altera en modo alguno (Adler *et al.* 1950; Lehman y Csank 1957; Seashore y Ivy 1953; Weiss y Laties 1962). También se ha observado que las anfetaminas pueden restaurar tiempos de reacción normales en sujetos que los tienen dilatados por fatiga o falta de sueño (Seashore y Ivy 1953 (...)). En muchas pruebas de coordinación las anfetaminas fueron, en general, más eficaces que la cafeína a la hora de mejorar la realización de la prueba.» (Ott, 1996, p.60).

Hemos querido citar este fragmento simplemente para refutar con estudios científicos las palabras del Tribunal Constitucional. Declarar constitucional o no una norma, basándose en la expresión máxima de la experiencia, sin tener autoridad científica reconocida y sin acreditarlo mediante estudios realizados por científicos, nos hace retroceder en el tiempo a una época en que la moral se imponía a la ciencia. Y con esto no queremos fomentar el uso de compuestos anfetamínicos o estimulantes en la conducción de vehículos a motor, ya que vemos igualmente irresponsable que se usen vehículos combatiendo el cansancio con estimulantes legales o ilegales.

Entendemos que sería positivo que se realizaran estudios que acrediten como afectan a la conducción las diferentes sustancias más utilizadas, así, como el punto de corte en donde se establezca la presencia mínima con la que estas capacidades se ven afectadas. Así la ciudadanía creerá en la justicia, y esta no se basará en criterios morales, sino no farmacológicos.

Otras opciones serían, por ejemplo, realizar pruebas de psicomotricidad con una aplicación en una *tablet*, o con equipos portátiles de realidad virtual que no solo no te permitirían conducir bajo el efecto de sustancias, sino también bajo otros supuestos, como falta de sueño o cualquier enfermedad. Esta opción protegería la seguridad vial en una medida mucho mayor.

Tampoco estamos de acuerdo con el argumento de que si conduce con presencia de drogas, pero estas se encuentran prescritas por un facultativo médico, este sea el responsable para saber si esa dosis va a afectar a las capacidades para la conducción o no. Un doctor puede recetar una medicación y prescribir una dosis concreta, pero ¿y si el paciente decide tomar mayor cantidad?

Argumenta el Tribunal Constitucional, en lo referente a que se respeta el principio de taxatividad enunciando en el precepto la palabra «drogas» de modo genérico (en vez de hacerlo de modo habitual: «sustancias estupefacientes o psicotrópicas», es decir, las fiscalizadas a nivel internacional y nacional), que si no lo hacen de manera genérica, el usuario de vehículos accederá a un merca-

do ilegal cada vez con más drogas no fiscalizadas que no podrían ser sancionadas. Parece que el Tribunal Constitucional no conoce cómo funciona el drogatest, ya que solo detecta determinadas drogas, pero no otras. Por ejemplo, los modelos actuales no identifican sustancias como el fentanilo o cualquier NPS (*new psychoactive substance*) que pueda aparecer en el mercado, ni alucinógenos como el LSD, la psilocibina, la DMT, etc., ni los anestésicos disociativos, como la ketamina y la tiletamina. Este hecho no solo puede generar problemas, en cuanto a la afectación del bien jurídico protegido seguridad vial, sino también riesgos para el bien jurídico salud pública. Y esto sucede por dar acceso a los consumidores de drogas naturales, de las cuales conocemos sus dosis y sus riesgos, al mercado ilegal de NPS (cannabinoides sintéticos y estimulantes de nueva generación), de los cuales no conocemos ni sus dosis ni sus riesgos.

Señala el Tribunal Constitucional que no nos hallamos ante una arbitrariedad, simplemente se condiciona una actividad: conducir vehículos a motor. Imaginemos a un profesional del transporte, a cualquier trabajador que ha de desplazarse a su centro laboral, o a alguien que se enfrenta a la realización de las tareas más básicas de la vida diaria, que se ven limitadas. Nos hallamos sin duda ante una discriminación, sin ninguna prueba que demuestre la afectación, salvo la especulación de que quien no cumple con las normas sociales es persona de peor condición y requiere ser sancionado.

En cuanto a los *puntos de corte* de algunos de los aparatos presuntivos que utiliza la Guardia Civil (drogatest), estos son de 5 ng/ml para el cannabis, 20 para la cocaína, 35 metanfetamina y 50 anfetamina. Aunque posteriormente ese mismo informe, cuando analiza la precisión del equipo para el cannabis, dice que el punto de corte es de 25 ng/ml (GTCD, 2011).

Como vemos, todo son sombras y no sabemos exactamente a qué punto de corte nos enfrentamos. Sin embargo, los puntos de corte en ng/ml que se establecen en los equipos de laboratorio para las pruebas confirmatorias de las muestras de saliva extraídas son mucho menores, siendo por ejemplo de 1 ng/ml para el can-

nabis y para otras sustancias de 5 ng/ml como la metanfetamina, anfetamina cocaína o MDMA. Generalmente, estas pruebas se realizan en laboratorios privados.

Existe un informe científico sobre test de salivas que habla de que administrando una dosis de 5-20 mg de THC, la concentración de THC en saliva sería de 1.000 ng/ml, bajando en 3-4 horas a 50 ng/ml. Este estudio también dice que las muestras dieron positivo en THC y CBD después de 13 horas (Bogusk, 2008).

Como hemos visto, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno a la dosis mínima psicoactiva de diferentes sustancias que fueron establecidas mediante un informe del año 2003 por el Instituto Nacional de Toxicología, fijadas por acuerdo del propio Pleno del Tribunal Supremo, para ser tenidas en cuenta en la jurisprudencia. No entendemos por qué ahora el Tribunal Constitucional, sin tener en cuenta esa jurisprudencia, aboga por que la simple presencia de una cantidad mínima de droga en el organismo puede afectar a las capacidades psicofísicas del conductor.

El Tribunal Constitucional ha rechazado a trámite un recurso de amparo en el que, además de los motivos contenidos en la Cuestión de Constitucionalidad anteriormente expuesta, se argumentaba la falta de procedimiento adecuado, al no existir un control metrológico por parte del Estado. Cuestión esta igualmente alarmante, y más si tenemos en cuenta que todo aparato utilizado para medir (etilómetros, velocímetros, surtidores de gasolina, básculas oficiales, etc.) está sometido a este tipo de controles.

Asimismo, se suma el argumento de desigualdad ante la ley con respecto a los consumidores de alcohol, principalmente porque estos últimos cuentan con un umbral de impunidad a partir del cual se entiende que existe una influencia en sus capacidades para conducir.

Una futura regulación debería establecer un sistema por el cual se evalúen las capacidades para la conducción y, en base a estos estudios, desarrollar aparatos capaces de discriminar por niveles mínimos de afección; o bien debería comprobarse la afectación a la conducción mediante un análisis realizado por un especialista

médico o un test psicotécnico o de psicomotricidad, como el que se realiza para obtener el carnet de conducir.

En cualquier caso, entendemos que no debe sancionarse la mera presencia de ninguna sustancia en el organismo, amparándose en una ley que busca proteger la seguridad vial. Con esta norma solo consigue estigmatizar al usuario de cannabis, incluso a personas que le rodean, pues podrían darse falsos positivos por consumidores pasivos. Es una legislación que persigue a los consumidores de cannabis a partir de una concepción moral, por la presencia de una determinada molécula de una sustancia en el cuerpo, sin más, sin acreditarse su efectiva afectación a la seguridad vial.

#### 8.4 Encaje en el marco legal internacional

No es necesaria la ONU para legalizar los usos del cannabis en España. Tenemos ejemplos de países que, estando dentro de los convenios internacionales vigentes en la materia, han llevado a cabo cambios legislativos en la línea de los aquí apuntados. Es el caso, por ejemplo, de Uruguay y su salida y reserva con respecto al cannabis de los tratados internacionales, para luego volver a firmar los mismos. Igualmente, se da en el caso de numerosos Estados de los EEUU, tanto por cuestiones terapéuticas como por cuestiones lúdicas o recreativas.

También es de destacar el principio de oportunidad en materia penal que utilizaron los Tribunales Holandeses para el sistema de *coffe shops*. Debe decirse que los Países Bajos fueron el primer estado en plantearse un atemperación del sentido de los tratados internacionales, con este sistema de tolerancia (Sánchez, 2017).

En definitiva, el encontrarse dentro de los Tratados Internacionales en materia de estupefacientes y drogas no es un problema para enfrentar la modificación legal que aquí se plantea. Esto, sin perjuicio de que el objetivo final y la armonía de todo el ordenamiento jurídico (sobre todo con respecto a una regulación integral), pasaría por adaptar la normativa internacional a la actual realidad, y al respeto a derechos fundamentales a fecha de hoy consolidados.

Por su parte, *el marco legal europeo obliga a una regulación que no pene el autocultivo*. Así, la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo de 25 de octubre de 2004 dice textualmente en su artículo 1.: «Las conductas expuestas en el apartado primero no se incluirán en el ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco, si sus autores han actuado exclusivamente con fines de consumo personal, tal como lo define la legislación nacional».

Es decir, estos aspectos encajan en el marco normativo europeo e internacional. No solo se puede, sino que en el caso del autocultivo y la tenencia para consumo y cualquier acción relacionada con ello, no debe imponerse pena alguna, sino que debería adaptarse la regulación española para lograrlo, sin perjuicio de la regulación de otros aspectos.

Tanto social como jurídicamente, ha sido tradicionalmente aceptado que dentro del tipo penal no entran ni el consumo, ni la tenencia, ni el cultivo para consumo propio o de un grupo determinado.

Sin perjuicio de ello, ante una regulación defectuosa, o cuanto menos, no la más correcta, se castigan conductas de este tipo por la tenue línea que establece un tipo tan abierto como el recogido en el artículo 368 del Código Penal. Se trata así como delincuentes a los consumidores. Y se hace ante sus vecinos y conocidos, aunque luego resulten absueltos.

Además, las cantidades mínimas destinadas a autoconsumo tampoco se aplican de forma unánime, ni son conocidas con detalle por las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni a veces por los propios jueces y fiscales.

La directiva en cuestión habla de penalidad, pero recordamos aquí que los principios que rigen el derecho penal son asimilables a los que han de regir en el derecho administrativo sancionador. En la vía penal hay mayores garantías de prueba y defensa, lo que no ocurre de forma equivalente con las sanciones administrativas. En el caso del cannabis, en no pocas ocasiones, las sanciones pecuniarias en vía administrativa son mayores que en vía penal.

Otra cuestión discutible por la repercusión pública que pudiera tener es la sanción con respecto al consumo en vía pública, pues hay interacción con derechos de otras personas. A nivel de limitar ese derecho, es comprensible la transcendencia de la protección de los derechos del menor. Hablamos de espacios públicos abiertos, pues, es evidente que en espacios públicos cerrados estaría prohibido, igual que el tabaco, sin el perjuicio que procedería de una ley individualizada para el cannabis (tanto por la realidad de la planta como por la realidad social existente a su alrededor), que incluya aspectos de otras leyes, como las que afectan al alcohol y al tabaco.

Además, sería trasladable la proscripción que hace la Directiva Europea a la sanción por presencia de cannabis en el organismo, pues al final se está castigando una actividad relacionada con el autoconsumo.

Igualmente, la normativa estatal, europea e internacional obliga a que no se pueda discriminar por la condición de ser usuario de cannabis, con respecto al resto de los ciudadanos, sin ninguna afectación a derechos socialmente relevantes.

Así, no se puede sancionar con despidos el mero consumo o excluir la cobertura de un seguro por el simple hecho de ser consumidor de cannabis, sin más. Lo que se castiga es una acción sin una víctima, ni siquiera previsible.



# 9.- Propuestas de regulación

**Héctor Brotons**

Consideramos necesaria la exposición de una propuesta de regulación que esquematice lo analizado anteriormente y que dé unas pautas que posibiliten una futura regulación que permita respetar los derechos de los usuarios y cultivadores. Esta se realiza para, posteriormente, y tras los estudios de desarrollo y las correspondientes reuniones y consensos, realizar una propuesta de texto para una futura ley sobre el autoconsumo de cannabis que afectará a otras disposiciones normativas actuales.

## 9.1 Cultivo en exterior

El usuario que decida cultivar en exterior podrá obtener como máximo una cosecha de 3.650 gramos anuales. Este límite superior lo establecemos porque un consumidor habitual con un consumo alto podría necesitar hasta 10 gramos diarios. Establecer la limitación en gramos da más seguridad jurídica y no perjudica al derecho a la igualdad de los consumidores (en concreto, si no se dispone de un emplazamiento idóneo o si no se tiene tanta pericia en el cultivo). Así mismo, para facilitar el trabajo de control y fiscalización de los cultivos de cannabis y, según los datos técnicos sobre cantidades cosechadas en cultivo de exterior expuestos en este trabajo, podría establecerse un límite máximo de 15 plantas por cultivador.

En el caso que haya sospecha de que se supere la cantidad indicada, los técnicos de la administración encargados de controlar el autocultivo y la no desviación de cannabis a terceros podrían realizar un informe pericial y solicitar un contrainforme del cultivador para demostrar que el cultivo está por encima de los 3.650 gramos.

En el caso de usuarios especiales como, por ejemplo, consumidores de hachís o aceite, o incluso enfermos que necesiten una

cantidad de aceite medicinal mayor que la que se puede obtener con 10 gramos de cannabis diarios, se deberán hacer ciertas matizaciones.

En cuanto a los usuarios de hachís o aceite, en primer lugar, deberíamos acotarlos en una categoría aparte. Teniendo en cuenta los datos técnicos aportados, estaríamos hablando de la posibilidad de cultivar, en el caso de usuarios de hachís, lo necesario para obtener una cantidad de 912 gramos de hachís en cómputo anual. Según esos mismos datos, si suponemos un 10% de rendimiento, se necesitaría un cultivo de 9.120 gramos como máximo. Por tanto, no se superaría la barrera de los 10.000 gramos que se establece en la jurisprudencia para la notoria importancia.

### 9.2 Cultivo de interior

Con respecto al cultivo en interior, mantenemos la propuesta de posibilitar realizarlo en un habitáculo de máximo tres metros cuadrados, tal como propusimos en el documento *Los 5 pilares de una regulación integral del cannabis* (Regulación Responsable, 2015). Como explicábamos en el capítulo 7, y teniendo en cuenta los cultivos que se pueden realizar en cómputo anual y la producción que se obtiene de cada uno, estaríamos ante una media de 3.650 gramos que se podrían obtener como máximo. Sería adecuado completar la propuesta con un apartado para facilitar la preservación genética, con la opción de dos habitáculos de un metro cuadrado cada uno, para la conservación de plantas madres, con el objetivo de mantener genéticas y para la elaboración de esquejes.

### 9.3 Modificaciones legales comunes a ambos cultivos

El cultivo para autoconsumo de cannabis no está sancionado por el Código Penal y está así expresamente reconocido por la jurisprudencia, con lo que, en principio, España no tendría problemas de cumplimiento de los tratados internacionales y no los tendría que desobedecer, ni retirarse de ellos o plantear reservas, ni ninguna otra acción en este sentido. Y más si tenemos en cuenta la normativa europea aplicable. No habría que modificar el Código

Penal, en cuanto al cultivo de cannabis en concreto, ni haría falta retirarse de los convenios internacionales sobre fiscalización de drogas. Lo procedente sería la aprobación de una ley sobre el cannabis, preferentemente orgánica, que afectara a otras leyes.

Por lo tanto, con la regulación del autocultivo para consumo propio, tendríamos que modificar la Ley 17/1967 o derogarla (y más teniendo en cuenta su carácter preconstitucional) en cuanto a la necesidad de autorización para los casos de cultivo, tenencia, e incluso consumo de cannabis. En concreto, en su artículo 22, no se permite ni tan siquiera el uso privado. Asimismo, habría que modificar los artículos 2 y 9, y en general, excluir de la aplicación de la ley lo relacionado con el cannabis contenido en los convenios (a excepción del cáñamo industrial), en cuanto a un uso privado. Asimismo, habría que modificar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en cuanto a las conductas de tenencia y cultivo privado.

Todos estos cambios quedarían subsumidos en el caso de una regulación integral del cannabis, donde las cuestiones político-criminales serían distintas y requerirían modificaciones mayores del ordenamiento jurídico. Aunque este trabajo trate principalmente de analizar una parte de la regulación integral del cannabis, como es la del autocultivo, entendemos que la regulación debería contemplar también a las personas que no puedan cultivar su propia sustancia, siendo entonces sus opciones las propiciadas por los clubes sociales de cannabis y los establecimientos con licencia para su expedición, con finalidad terapéutica o recreativa.

#### 9.4 Posesión y consumo de cannabis en la vía pública y en domicilio

En un momento como el actual, donde tampoco se puede pretender hacer desaparecer de un plumazo toda la influencia del modelo prohibicionista, sería mejor apostar por procesos progresivos de reforma.

Tras haber analizado el problema de las sanciones por consumo o tenencia de cannabis en la vía pública, vamos a proponer las cantidades que podrían ser poseídas en la vía pública sin constituir por ello delito o infracción administrativa.

Así, al igual que otras propuestas, entendemos que podríamos estar en posesión en la vía pública de 100 gramos (10 gr /10 d), sin necesidad de autorización administrativa. Así como hasta un máximo de 300 gramos (10 gr/ 30 d), en nuestro domicilio.

Con la salvedad de lo explicado más arriba, en referencia al autocultivador, que podrá aprovisionar hasta 3650 gramos anuales. Para la realización de transportes, por ejemplo, desde el cultivo hasta el propio domicilio, en el caso que se superen las cantidades indicadas, sería suficiente con la comunicación al órgano de la administración que se establezca.

En cuanto al hachís, si lo dividimos entre cinco, nos resultaría una cantidad a poseer de 20 gramos en la vía pública y el acopio de hasta 60 gramos en casa, salvo en caso de autocultivo. Con más de 20 gramos, en caso de transporte, sería necesaria la comunicación.

En cuanto al consumo en la vía pública, solo debería ser sancionado el que se realiza en lugares con confluencia de personas susceptibles de especial protección: colegios, centros de salud, hospitales, centros deportivos. Así mismo, se puede considerar prohibido que se consuma en lugares confluídos, aunque no exista esta presencia de personas susceptibles de especial protección. La sanción administrativa, en estos casos, debería ser menor. No obstante, consideramos que no debería ser sancionado el consumo en lugares no confluídos ni con presencia de personas de especial protección. Por ejemplo, en un descampado, un parque no concurrido, o en una calle no transitada. Todo ello, sin perjuicio de buscarse una homogeneización con la legislación del tabaco y el alcohol, salvando las diferencias que existen en cuanto a las realidades de cada consumo.

Para establecer todos estos cambios, además de la reforma de la ley del 17/1967 antes mencionada, se ha de modificar la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. En concreto, su artículo 36.16º, estableciendo sanciones para la tenencia de una cantidad de cannabis mayor que la estipulada y permitida. Así mis-

mo, debería ser modificado para hacerlo taxativo y solo sancionar las conductas de especial riesgo.

En cuanto al artículo 36.18º, que habla de la prohibición de los cultivos visibles, no deberían ser sancionables los cultivos que se realizan en el domicilio de los ciudadanos. Cuestiones diversas como olores, problemas de instalación, ruidos, usos de pesticidas, etc. habría que regularlas a través de la normativa urbanística o reguladora de actividades.

Tanto las modificaciones necesarias para implementar las medidas indicadas en este apartado como en el anterior pueden implementarse con una exclusión del cannabis como estupefaciente, lo que haría innecesarios gran parte de estos cambios.

#### 9.5 Regulación específica del sector empresarial cannábico del consumo y autocultivo

Por lo dicho a lo largo de este trabajo, sería precisa una modificación de la legislación que regula estos extremos, que se instauren epígrafes específicos de actividad, tal como se viene reivindicando desde hace tiempo por parte de los growshops, así como de colectivos que les representan, como el Gremi Growshops Cataluña. Esto redundaría en una mayor transparencia y control del sector por parte de las administraciones, además de una mayor seguridad jurídica para el desempeño de la actividad comercial.

Igualmente, se requiere la creación de una normativa clara que delimite la publicidad, para poder trabajar con un mínimo de seguridad jurídica. Se debe establecer en una ley o reglamento todos los detalles relativos a los límites en la publicidad a los que deben someterse los growshops y los bancos de semillas en el ejercicio de su actividad. O, en su caso, a través de una reforma legal que modifique, amplíe o excluya de su aplicación a estos sectores específicos lo dispuesto en la Ley 34/1988 General de Publicidad.

La futura legislación que normalice el sector del cannabis debería permitir a estos empresarios la autorización para producir y registrar variedades de cannabis, así como la consiguiente inscripción en este registro nacional de productores de semillas y plantas

de viveros. De esta manera, podrán operar con total normalidad, como cualquier otro empresario en su sector.

Una opción sería apostar por la creación de un organismo administrativo independiente que regulase todo lo relativo a la obtención de las variedades de cannabis, tal y como se ha hecho en los países que han abordado la cuestión.

Nosotros optamos por el segundo de los supuestos, que necesitaría incluir en la Ley 17/1967 de estupefacientes, el cultivo de cannabis para producción de semillas, con lo que no se necesitaría la autorización de la AEMPS.

Se promovería la creación de un Instituto del Cannabis que regulase todos los aspectos que giran en torno al cultivo de la planta, particularmente el registro de semillas y variedades, el paso previo a la normalización y regulación completa. Una vez se alcance la normalización, será el momento en que la semilla del cannabis, así como todo el proceso en relación con su obtención, se registrará por el régimen general expuesto, y controlado por el Ministerio de Agricultura, igual que cualquier otro producto agrícola.

Será necesario, además, armonizar una fiscalidad específica. La futura legislación debería incluir que tributen los vendedores de semillas de cannabis a través del régimen agrario, en coherencia con el tipo de actividad que desarrollan los cultivadores de cannabis. O en su caso, establecer una fiscalidad específica.

#### 9.6 Uso del cannabis en el ámbito laboral

En cuanto al uso del cannabis en el ámbito laboral, a tenor de lo indicado en el punto 8.3 del capítulo 8 de este trabajo, no habría que realizar modificaciones, puesto que la legislación laboral y la jurisprudencia no permiten sancionar al trabajador cuando el consumo de cannabis no afecte al desempeño de su tarea.

#### 9.7 Conducción bajo los efectos del cannabis

Habría que modificarse tanto la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como el Código Penal (artículo 379.2), en el sentido de que para sustancias diferentes al

alcohol o en inicio para el cannabis, se deberían establecer unas tasas para instaurar cuándo podemos estar ante una sanción administrativa o cuándo debería considerarse una infracción penal, por resultar mayor la afectación o el riesgo para el bien jurídico protegido (seguridad vial).

Es necesario establecer un umbral de impunidad a partir del cual podamos entender que se pone en riesgo la seguridad vial. Establecer cuando aplicar una sanción administrativa, como en el caso del alcohol, y cuando se podría considerar la conducta como delictiva, por suponer una mayor afectación al bien jurídico.

Hasta que no se realicen los estudios que nos permitan tener estos datos, vemos necesario que para poder sancionar administrativamente a alguien, o en su caso, imputar un delito contra la seguridad vial, en caso de dar positivo, sería necesaria la presencia de un médico o facultativo sanitario, o por medio de cuestionario de signos externos, o como las propuestas más avanzadas indican, aparatos para medir la capacidades psicofísicas; es decir, determinar la capacidad real del conductor, como indicábamos en el apartado que analiza esta problemática.

La ley de tráfico debe retornar a la redacción anterior, donde se exigía la efectiva influencia del cannabis en la conducción. Además convendría definir la gravedad de los síntomas, para diferenciar entre el reproche penal y el administrativo.

Así mismo, hasta que no se demuestre fehacientemente esta afectación a la conducción, las compañías aseguradoras, con las que los conductores tengan contratado el seguro de responsabilidad civil, deberían responder de todos los daños causados a terceros sin poder repercutirlos contra el asegurado.



## 10.- Epílogo

Esta obra pretende ser una reflexión multidisciplinar a partir de un análisis de realidad actual sobre el cannabis y sobre el modo en que podría articularse la regulación de su uso y autocultivo en España. El mismo trabajo toma en consideración aspectos legales, sociológicos, científicos y administrativos para tratar las diversas cuestiones que suscita una realidad tan heterogénea.

Existen otras propuestas anteriores a la presente que han pretendido ofrecer a la sociedad y a los legisladores diversos modos de normalizar e incardinar el cannabis en la sociedad española, como ya ha ocurrido, en mayor o menor medida, en otros países.

Seguimos los pasos de anteriores técnicos y actores de la sociedad civil que han emitido recomendaciones sobre una futura regulación el cannabis. Abordamos aquí lo que Antonio Escohotado (1997) definió en cuatro palabras: *La cuestión del cáñamo*. En esta breve obra, ya sugiere, hace más de 20 años «En vista de las convenciones internacionales firmadas por España, y de nuestras leyes, sugiero tan solo examinar qué retoques concretos pueden hacerse, y qué procedimientos podrían aspirar a alguna eficacia» (p. 10). Con tal espíritu, presentamos la actual propuesta, en todo momento adaptada al actual marco legal, nacional e internacional, que expone los retoques concretos con los que regular el autocultivo y uso del cannabis.

Un importante precedente fue el documento que, tras un periodo de trabajo entre diciembre de 1989 y febrero de 1991, publicó el Grupo de Estudios de Política Criminal (1991) en adelante, GEPC. Incluyó un manifiesto suscrito por varios firmantes de relevancia jurídica (un importante número de magistrados) y política, siendo citado en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, publicado por el Gobierno de España a través de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

El GEPC siguió en funcionamiento y elaboró monográficos jurídicos de visión progresista en temas muy polémicos, como disposición sobre la propia vida, uso de fuerza policial, prostitución entre adultos, extranjería, responsabilidad penal en menores, justicia penal internacional o corrupción urbanística. Durante el año 2017 celebraron su 25 aniversario con una obra que revisaba sus anteriores trabajos donde, por supuesto, en el primer bloque, se trataba la política criminal de drogas. Incluye dicha obra unas páginas sobre los cambios en la realidad social y criminológica, destacando sobre todo los adelantos en el tema del cannabis, desde el contexto internacional al ascenso del modelo de los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) en España, incorporando incluso una referencia a las principales federaciones de CSC. En el apartado legal, se actualizaba la propuesta de dicho Grupo sobre los cambios legales necesarios, y se insistía en la pertinencia del modelo despenalizador, por lo que justificaban la «persistente validez» de sus documentos (GEPC, 2017).

La petición de una ponencia sobre cannabis en la Comisión Mixta Congreso Senado ha sido clamor en el 2017 y 2018. En este momento, todos los parlamentos regionales cuentan con acciones relacionadas con el cannabis en distintos grados de tramitación, algunas muy avanzadas y de amplio consenso. En la inmensa mayoría de estas iniciativas se menciona la necesidad de una ponencia sobre el cannabis a nivel nacional, así como referencia al autocultivo. Así, por ejemplo, sucede en las Propositiones No de Ley (PNL) sobre Cannabis de Cantabria, Extremadura y Murcia, aprobadas con consenso de todos los partidos mayoritarios a nivel nacional: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Dentro de los procesos regionales, hay que destacar la ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis. En el 2014 los CSC de Cataluña empezaron un proceso de diálogo con la administración que acaba con unas recomendaciones de la Comisión de Salud, aprobadas en enero del 2015, además de mostrar el apoyo político que existía a la regulación. Es en ese momento cuando se germinó la Iniciativa Legislativa Popular La Rosa Verda, donde

entregan 67.500 firmas, de las que se validaron 54.980, lo que supone casi 5.000 más del mínimo elegido. La ILP creció con una extensa ponencia, en la que participó una amplia representación de expertos, trabajo que floreció en la ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis. El proceso de esta ley destaca por su amplio consenso, con apoyo de asociaciones de usuarios, expertos, organizaciones de prevención de riesgos y los partidos políticos, lo que condujo a una amplia mayoría: de 127 diputados, hubo 118 que votaron a favor. Entre toda la actividad parlamentaria, se trata del texto legislativo más completo sobre el cultivo colectivo, por lo que la incluimos como anexo de esta obra. Aunque el Tribunal Constitucional la anuló en septiembre del 2018, por invadir competencias del Estado, consideramos, por lo completa y consensuada, que puede ser una excelente base para la regulación del cultivo colectivo.

A esto hay que sumar los avances a nivel nacional, así, el PSOE solicitó una Ponencia de Estudio en el seno de la de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, objetivo al que Podemos ya se había dirigido, por el camino de realizar una Proposición No de Ley (moción), para la creación de una ponencia de estudio sobre el cannabis y su posible regulación en el nuevo contexto nacional e internacional, dentro de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

Por parte de la sociedad civil también se ha trabajado. Un gran ejemplo del 2017 fue la gran «ManiFiestAcción» del 28 de mayo en Madrid, donde se reunieron, a lo largo de la tarde, unas 25.000 personas, con intervenciones de artistas, activistas y representantes políticos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). También es de destacar la Marcha Mundial de la Marihuana, organizada en el 2018 en 120 ciudades de 90 países. En España se celebra en Madrid desde hace 22 años.

En la era en la que vivimos también se han de tener en cuenta las manifestaciones por medio de las redes sociales. Así, otra fecha histórica en 2017 fue el 12 de septiembre, pues a pesar de la tracción del día posterior a la Diada pre referéndum en Cataluña,

el hashtag #CannabisConMixta se mantuvo durante ocho horas como uno de los temas más comentados en Twitter, con un comunicado en el que se pedía la apertura urgente de la citada ponencia.

En todas estas iniciativas nos implicamos en primera línea los miembros de la Junta Directiva del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC).

Además, desde la primera presentación, a finales de noviembre en el congreso universitario de Catoira, hemos debatido este proyecto con la sociedad civil por toda la geografía española, a un ritmo como mínimo de una presentación al mes en ciudades como: Gijón, Fuerteventura, Barcelona, Castellón, Madrid, Valencia, Benicassim, Santander e Irún. Acabamos a finales de noviembre del 2018 con la colaboración en un congreso científico de la Universidad de Valencia.

De especial importancia simbólica fue volver a las sedes de los partidos políticos, del 28 al 30 de mayo de 2018. Visitamos al PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, PdCat, ERC, IU, Compromis y Grupo Mixto del Senado, para presentarles el documento *Debate sobre el cannabis: argumentos para la apertura de una ponencia* (OECCC, 2018).

### **El enfoque en la persona**

Dentro de las distintas propuestas que han aparecido en las últimas décadas, se hace necesaria, por ser la piedra angular de cualquier regulación sobre el cannabis, el enfoque de los usuarios y las acciones que quedan dentro de la esfera individual. Ese cambio en este aspecto de la regulación viene impuesto en una interpretación rigurosa de las disposiciones de la Unión Europea. En este sentido, la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo de 25 de octubre dice textualmente en su artículo 2: «Las conductas expuestas en el apartado primero no se incluirán en el ámbito de aplicación de la presente Decisión Marco, si sus autores han actuado exclusivamente con fines de consumo personal tal como lo define la legislación nacional». La legislación penal y su interpretación, en esencia, no castiga los usos personales del cannabis, en el marco de

los derechos fundamentales individuales. Por otro lado, la sanción administrativa persigue acciones que quedan en la esfera de lo privado, como sucede en el ámbito de Ley de Seguridad Vial, donde se castiga la mera presencia de cannabis en el organismo, sin atisbo de influencia en su conducción, y que entendemos requieren una modificación inmediata y prioritaria.

Ahora que es ineludible la apertura de una comisión sobre el cannabis, consideramos que es importante que la sociedad civil colabore con la misma por medio de documentos políticos y técnicos, donde se plasme información, resumida y consensuada. Con este deseo autoeditamos esta primera propuesta de Proyecto de Ley sobre autocultivo y uso del cannabis, destinado a los interesados en participar con su opinión.

Durante años la sociedad civil ha defendido una propuesta inclusiva sobre el autocultivo y uso del cannabis. Ahora la propuesta ya está hecha. Estamos seguros de que se usará, la cuestión es cuándo y cómo. Son argumentaciones sólidas para cuando se abra este debate en el Parlamento, sea el momento ahora o más tarde. Se puede aplicar al autocultivo lúdico, pero también al autocultivo medicinal. Se integra en el actual marco legal, a la vez que completa otros aspectos en una regulación integral más ambiciosa.

El siguiente paso será abrir un proceso participativo con los usuarios y autocultivadores de cannabis, así como con organizaciones de la sociedad civil y legisladores. Para ello usaremos como instrumentos principales las encuestas, así como los convenios de colaboración con distintas entidades y una ronda de contactos con los legisladores. Tras el crecimiento común que se producirá, presentaremos nuestra propuesta final de Proyecto de Ley, ya editada para la difusión pública.

Desde el OECCC consideramos que esta obra llega en el decenio de la regulación definitiva del cannabis, por lo que dentro de 25 años quedará cual reliquia bibliográfica, ejemplo de cómo se buscaron consensos para salir del laberinto de la prohibición. El mundo camina hacia formas más eficaces para tratar la cuestión del cannabis. Es hora de que España también avance. Descrimina-

lizar el autocultivo y uso del cannabis será un excelente paso hacia ese futuro que llega. Lo primero son las personas y sus derechos constitucionales básicos, sustrato en el que crecerá sana una política más eficaz para tratar el cannabis.

**Héctor Brotons**

**Hugo Madera**

**Junta Directiva Observatorio Europeo de Cultivo y  
Consumo de Cannabis**

**Hispania Cannabicum, Europa, mayo del 2019**

# 11.- BIBLIOGRAFÍA

Adaptación y revisión Francisco Azorín

A.L.A. (Otoño de 1999), *HUL, una nueva conciencia sobre las drogas*, Associació Lliure Antiprohibicionista, Barcelona.

Acosta, X. (2013). Técnico cannábico Capítulo 4. Producción y rendimientos de un cultivo de cannabis. *Cáñamo* (190), 36.

Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2008.

Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2001.

AEMPS (2004). Informe del Jefe de Servicios de la AEMPS de 24 de agosto de 2004.

AESCANN (29 de marzo de 2014), *Comunicado de AESCANN*.

Aguar, O. (1982) *Drogas y Fármacos de Abuso*. Madrid, España: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Andréasson, S., Engstrom, A., Allebeck, P. y Rydberg, U. (1987). «Cannabis and Schizophrenia: A longitudinal Study of Swedish Conscripts». *Lancet*, 330, (8574), 1483.

ARSEC (1997). *Cannabis. Manual de cultivo para el autoconsumo*. Barcelona, España: ARSEC.

Author, A.M., McLaughlin, D., Carrión R.E., Naqachandran, P., Correll, CU., Cornblatt, B.A. (2012). «Prospective study of cannabis use in adolescents at clinical high risk for psychosis: impact of conversion to psychosis and functional outcome». *Psychol Med*, (30), 1–13.

Auto del Tribunal Constitucional nº174/2017 de 19 de diciembre.

Auto Juzgado de lo Contencioso de Vitoria nº1 de 6 de noviembre de 2006.

Azorín, F. y Brotons, H. (2018). «Ya está en marcha la ponencia en la Comisión de Interior para la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana». *Soft Secrets* (6), 74–75.

Balbas, G. G. (21 de noviembre de 2002). «La apología del cannabis, al fiscal». *El Mundo*. Recuperado de <http://www.elmundo.es/>.

Barriuso, M. (2001). «Comisiones Mixtas para el Estudio del Problema de las Drogas». *Diario de Sesiones de las Cortes Generales*. (41), 917.

Barriuso, M. (2005). «Abriendo brechas en el muro: diez años de movimiento cannábico en España». En Colectivo Interzona (Ed.). *Cannabis*. (pp. 99-106) Madrid, España: Amargord.

Barriuso, M. (2005b). «Adiós al ghetto: el discreto encanto de la normalidad». *Revista Española de Drogodependencias* (30) 1-2, 206-212.

Barriuso, M. (2007). Boletín Oficial de las Cortes Generales, (377), p. 15.

Bhattacharyya, S., Crippa, J.A., Allen, P., Martin-Santos, R., Borgwardt, S., Fusar-Poli, P., *et al.* (2012). «Induction of psychosis by  $\delta$ 9- tetrahydrocannabinol reflects modulation of prefrontal and striatal function during attentional salience processing». *Arch Gen Psychiatry*, 69 (1), 27-36.

Bogusk, M.J (2008). «Handbook of analytical separations». Vol 6. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 16 (8), 503.

Boletín Estadístico del European Monitoring Drug Centre (2016). Recuperado de <http://www.emcdda.europa.eu/>.

Bonnet U. y Preuss U.W. (2017). «The cannabis withdrawal syndrome: current insights». *Substance Abuse and Rehabilitation* (8) 9-37.

Bossong M.G., Niesink R.J. (2010). «Adolescent brain maturation, the endogenous cannabinoid system, and the neurobiology of cannabis-induced schizophrenia». *Prog Neurobiol*, 92 (3), 370-85.

Bouchard, M. (marzo de 2007). «A capture-recapture derived method to estimate cannabis production in industrialized countries». En Peter Rou-ter (Chairman), *First Annual Conference of the International Society for the Study of Drug Policy* (ISSDP), Oslo, Noruega.

Brotons, H. (2015). «Puntos positivos, para los autocultivadores de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Ebers». *Soft Secrets* (6), 15-16.

Brotons, H.(2016). «Argumentario jurídico ante una regulación del cannabis». *Soft Secrets* (5), 12-15.

Brotons, H. (2017). «Principio de proporcionalidad, derechos fundamentales y atipicidad de los CSC». En Regulación Responsable (Ed). *Las sendas de las regulación del cannabis en España*. (pp. 464-478). Barcelona, España: Bellaterra.

Brotons,H.(2015b). «Reflexiones sobre una futura regulación de la posesión y cultivo para el autoconsumo privado». *Soft Secrets* (2), 98, (3), 12, (4), 67 y (5), 96.

Brotons, H., Carrera, M.J., Girbau, A., Lascaraín, J.C., Manjón-Cabeza, A., Soriano, B. (2017). *Recursos al Tribunal Constitucional de los Clubes Sociales de Cannabis*. San Sebastián, España: Fundación Renovatio.

Budney A.J., Vandrey R. G., Hughes J.R, Thostenson J.D, Bursac Z. (2008). «Comparison of Cannabis and Tobacco Withdrawal: Severity and Contribution to Relapse». *J Subst Abuse Treat*, 35 (4), 362-368.

Bueno, M. (2004). *El huerto familiar ecológico*. Barcelona, España: RBA Libros.

Cabral G. A., Rogers T. J., Lichtman A. H. (2015). «Turning Over a New Leaf: Cannabinoid and Endocannabinoid Modulation of Immune Function». *J Neuroimmune Pharmacol*, (10),193-203.

Calafat, A., Montserrat, J., Becoña, E., Fernández, C., Gil, E., y Llopis J.J (2000). «Estrategias y organización de la cultura pro-cannabis». En Bobes, J. y Calafat, A. (Ed.). *Monografía Cannabis. Adicciones* (12) (pp. 231-273).

Cáñamo (2002). Anuncio Good House Seeds, (54), 95.

Caulkins, A., Hawken, B., y Kleiman. (2012). *Marijuana Legalization*. Oxford, EEUU: Oxford University Press.

Cebrián, J. (2002). «Legalización del cannabis. Manual de debate». *Cáñamo*, (58), 19.

Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO (2014). Estadística anual del tráfico de drogas 2014. Recuperado de <http://www.interior.gob.es/>.

Centro de Investigación sobre Política de Drogas, RAND. (2002) Febrero 2002. Recuperado de <http://www.rand.org/>.

Centro de Investigaciones Sociológicas (2018). Barómetro CIS: Noviembre 2018. Recuperado de <http://www.cis.es/>.

Circular de 3 de junio de 1976, de la Dirección General de Sanidad, sobre Informes Analíticos y Toma de Muestras.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. (2000) Observación General n°14. Recuperado de <http://www.acnur.org/>.

Conrad, C. (2007). *Cannabis yields and dosage*. El Sobrante: Creative Xpression.

Conrad, C. (2013). *Cannabis yields and dosage*.

Convenio Internacional sobre restricción en el empleo y tráfico de opio, morfina, cocaína y sus sales. La Haya, 23 de enero de 1912.

Decorte, T. (2012). «The globalization of (domestic) cannabis cultivation». En Ararteko (Ed.), *Cannabis. Usos, seguridad jurídica y políticas* (pp. 101-138). Vitoria, España: Gobierno Vasco.

Decorte, T. (2010). «The case for small-scale domestic cannabis cultivation». *International Journal of Drug Policy*, 21, (4), 271-275.

Decorte, T., Potter, G., Bouchard, M. The Globalization of Cannabis Cultivation. En Decorte, T., Potter, G., Bouchard, M. (eds.). (2014). *World Wide Weed. Global Trends in Cannabis Cultivation and its Control*, (pp. 12-13), Farnham: Ashgate Publishing.

Díaz, A. (2008) *Buenas prácticas agrícolas: guía para pequeños y medianos agroempresario*. Tegucigalpa: IICA. (11), 58.

Díez, J.L. y Muñoz, J. (2012). «Licitud de la auto-organización del consumo de drogas». *Jueces para la Democracia*, (75), 49-77.

Diez-Picazo, L.M. (2003). *Sistema de derechos fundamentales. Derechos fundamentales y libertades públicas*. Madrid, España: Civitas.

Efe (23 de julio de 2003). «Un grupo de expertos estudiará medidas legales contra la apología del consumo de cannabis». *El Mundo*. Recuperado de <http://www.elmundo.es/>.

Efe (5 de junio de 2018). «Proponen la regularización del cannabis para combatir el narcotráfico». Efe. Recuperado de <https://www.efc.com>.

Eisenstein, T.K. (2015). «Effects of Cannabinoids on T-cell Function and Resistance to Infection». *J Neuroimmune Pharmacol*, (2), 204–216.

Escohotado, A. (1997). *La cuestión del cáñamo*. Madrid, España: Anagrama.

Escohotado, A. (2002). *Historia general de las drogas*. Madrid, España: Espasa.

FAD, Fundación de Ayuda a la Drogadicción, (2014). Nota de prensa de estudio *La percepción social de los problemas de las drogas en España, 2014*. Recuperado de <https://www.fad.es/node/6414>.

FAD, Fundación de Ayuda a la Drogadicción, (2014b). Estudio *La percepción social de los problemas de las drogas en España, 2014*, (p. 74). Recuperado de <https://www.fad.es/sites/default/files/Estudio%20Completo.pdf>.

Fischer, B., Jeffries, V., Hall, W., Room, R., Goldner, E., u Rehm J. (2011). «Lower Risk Cannabis Use Guidelines for Canada (LR-CUG): A Narrative Review of Evidence and Recommendations». *Canadian Journal of Public Health*, 102, (5), 326; y Hall, W. (2009). «The Adverse Effects of Cannabis Use: What Are They, and What Are Their Implications For Policy». *International Journal of Drug Policy*, (20), 458–466.

Fundación Ayuda a la Drogadicción. (2004). La percepción de los problemas de las drogas en España. Recuperado de <https://www.fad.es/>.

Gallego, J. T. (2002). «Criadores de cannabis: Ferran (Good House Seeds)». *Cáñamo* (60), 70–72.

Gamella, J.F y Jiménez, M.L (2005). «Comercialización sin legalización: Políticas públicas y consumo/comercio de cannabis en España (1968–2003)». *Revista Española de Drogodependencias*. 30 (1–2), 17–49.

García, D. (2006). «El rey de los concentrados». *Soft Secrets*, 6, 30–33.

Glaser, B. y Anselm, S. (1968). *The discover of Grounded theory*. New Brunswick, EEUU: Aldine Transaction.

Gómez-Aller, J.D. (2013). *Transmisiones atípicas de drogas*. Valencia, España: Tirant lo Blanch.

González, M. (2015). *El principio de proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Pamplona, España: Aranzadi.

Gorantla, S., Makarov, E., Roy, D., Finke-Dwyer, J., Murrin, LC., Gendelman, HE., Poluektova, L. (2010). «Immunoregulation of a CB2 receptor agonist in a murine model of neuro AIDS». *J Neuroimm Pharmacol*, (5), 456–468.

Greydanus, D., Hawver, E., Greydanus, M., y Merrick, J. (2013). Marijuana: Current Concepts. *Front Public Health*, (1) 42.

Grucza, RA., Agrawal, A., Krauss, MJ., Bongu, J., Plunk, AD., Cavazos-Rehg, PA., Bierut LJ (2016). «Declining Prevalence of Marijuana Use Disorders Among Adolescents in the United States», 2002 to 2013. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 55 (6), 487-494.

Grupo de Estudios de Política Criminal (Ed) (2017). *Revisión y actualización de las propuestas alternativas a la regulación vigente. 25 años de trabajo del Grupo de Estudios de Política Criminal*. GEPC. Valencia, España: Tirant to blach.

Grupo de Estudios sobre el Cannabis (2004). *Informe sobre el cannabis 2004: análisis de situación y propuestas de actuación*. Madrid, España.

Grupo de trabajo Control de drogas en el tráfico rodado. (2011). Evaluación del dispositivo Druguer Drugtest 5000. Recuperado de <http://www.dgt.es/>.

Grupo Estudios de Política Criminal (1991). Propuesta alternativa a la actual política criminal sobre drogas. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (3) 933 - 950. Boletín Oficial del Estado, Madrid.

Hakkarainen, P. y Peräla, J. (2014). «With a little help from my friends —Justifications of small— scale cannabis growers». En Decorte, T., Potter, G., Bouchard, M. (Ed.). *World Wide - Weed. Global Trends in Cannabis Cultivation and its Control* (pp. 75-90). Farnham, UK: Ashgate Publishing.

Hall, W., Degenhardt, L. y Lynskey, M. (2001). *The Health and Psychological Effects of Cannabis Use*, 2ª ed. Camberra, Australia: Australian Government Publishing Service.

Hall, W., Degenhardt, L. (2014). «The Adverse Health Effects of Chronic Cannabis Use». *Drug Testing and Analysis*, 6, (1-2) 41-43.

Hills M. (2015). «Be clear about the real risks». *Nature*, 525.

Hough, M., Warburton, H., Few, B., May, T., Man, L-H., Witton, J., y Turnbull, P. (2003). «A Growing Market: The Domestic Cultivation of Marijuana». York: Joseph Rowntree Foundation.

Hubbard, F. (1915). *The temperance programme*: Wagoner Print Co.

Jan, C., Van, O. (2001). «Is cannabis a stepping-stone for cocaine?». CEPR Discussion Paper (3116). Centre for Economic Policy Research, Tilburg University. Diciembre, 2001.

JIFE (2012). Informe Anual. Recuperado de <https://www.incb.org/>.

JIFE (2016). Informe Anual. Recuperado de <https://www.incb.org/>.

Jubert, U.J. (1999). *Los delitos de tráfico de drogas I*. Barcelona, España: José María Bosch Editor.

Knight, G., Hansen, S., Connor, M., Poulsen, H., McGovern, C. y Stacey J. (2010). «The results of an experimental indoor hydroponic Cannabis growing study, using the “Screen of Green” (ScrOG) method-Yield, tetrahydrocannabinol (THC) and DNA analysis». *Forensic Science International*, 202 (1-3), 36-44.

Kraan T., Velthorst E., Koenders L., Zwaart K., Ising H.K., Van den Berg D., de Haan L., van der Gaag M. (2016). «Cannabis use and transition to psychosis in individuals at ultra-high risk: review and meta-analysis». *Psychol Med*, 46 (4), 673-81.

Lachenmeier, D.W., y Rehm, J. (2015). «Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach». *Sci. Rep*, (5) 8126.

LES, F. (11 de julio de 2007). «Democracia, cannabis y cárcel». *Diario de Noticias Navarra*. Recuperado de <http://www.sis.net/>.

Madera y Brotons (2018). «Autocultivo y autocultivadores de cannabis en España. Análisis y Proyecto de Ley». En Boubeta, A.,

R., Folgar, M., *Investigación sobre el cannabis ¿Qué dicen los estudios científicos?*. Edita Concello de Catoira.

Madera, H. (2006). «White Dwarf. Budda Seeds». *Soft Secrets* (2), p. 34.

Madera, H. (2002). «Cannabiscafe». *Yerba*, (9), 32-34.

Madera, H. (2012). «Diez años con Dinafem». *Soft Secrets* (2), 66-69.

Madera, H. (2012b). «Entrevista a Gramovatio». *Soft Secrets* (3), 69.

Madera, H. (2013). «Manolo, pasión por experimentar y aprender». *Soft Secrets* (2) 55-57.

Madera, H. (2014). Ola CBD. «Primer decenio (2004-2014)». *Soft Secrets* (3), 30-35.

Madera, H. (2016). «Cannatonic: piedra angular de la crianza del CBD en América». *Soft Secrets* (5), 16-20.

Madera, H. (2016b). «Semillas con CBD: la gran selección». *Soft Secrets* (3), 59-60.

Madera, H. (2016c). «Analítica y crianza del 2.0 del CBD». *Soft Secrets* (6), 29-30.

Madera, H. (2016d). «La rica Auto CBD: autofloreciente del año 2016». *Soft Secrets* (2), 19.

Madera, H. (2016e). «Argumentario sobre la legalización del cannabis». *Soft Secrets* (4), 20-21.

Madera, H. (2017b). «Dinamed reina en Suiza». *Soft Secrets* (5), 50-51.

Madera, H. (2017b). «La satisfacción del trabajo reconocido». *Soft Secrets Latam* (5), 36.

Madera, H. (2017b2). «Genéticas F1 Fast Version: descubrimiento, crianza y ventajas». *Soft Secrets*, (4), 73-76.

Madera, H. (2017c). Dinamed: llegan las CBD dominantes». *Soft Secrets* (2), 72-73.

Madera, H. (2017c). «Solodiol: nueva fuente de CBD». *Soft Secrets* (6), 38-39.

Madera, H. (2017d). «Novedad mundial: variedades con alto contenido en THCV y CBDV estabilizado». *Soft Secrets* (4), 59-60.

Madera, H. (2017e). «Autocultivo y Autocultivadores de cannabis. Desarrollo del movimiento y peritaciones de de consumos y cultivos». En Regulación Responsable (Ed.). *Las sendas de la regulación del cannabis en España* (pp. 177-190). Barcelona, España: Bellaterra.

Madera, H. (2018). «Autocultivo y autocultivadores de cannabis en España». *Soft Secrets*. Recuperado de <https://www.softsecrets.com>.

Mahler, H. (2007). *Proceedings XV. GTFCh Symposium*.

Males, M., Bunchen, L. (2014). *Reforming marijuana laws. Which approach best reduces the harms of criminalization? A five state analysis*. Recuperado de <http://www.cjcj.org/>.

Manifestación (26 de mayo de 2017). #ManiFiestaSol 28 de Mayo. Día por la Regulación Responsable. Recuperado de <http://www.softsecrets.com/es>.

Manjón-Cabeza, A. (2012). *La solución*. Barcelona, España: Debate.

Manzano, A. (6 de mayo de 1987). Se constituye en Madrid la Asociación de Consumidores de Derivados del Cannabis. *El País*. Recuperado de <http://www.elpais.com/>.

Marín, I. (2008). *La cultura «cannábica» en España (1991-2007). Análisis socioantropológico de un nuevo tipo de movimiento social* (tesis doctoral). Universidad de Granada, Granada, España.

Martínez Oro, D. P (2016). *Menores. La cuestión de los menores*. En Observatorio Cannabis. (Ed.). Informe 2015/16. (pp. 140-141). San Sebastián, España: Fundación Renovatio.

Martínez Oro, D. P (2018). *Controversias y reflexiones para el debate de los pilares de la regulación del cannabis*. Regulación Responsable (Ed.), p. 17.

Mayke, W., Dieter, D., Christian, L., Pavel, E., Tarasov (2016). «Cannabis in Eurasia: origin of human use and Bronze Age trans-continental connections». *Vegetation History and Archaeobotan*, 26, (2), 245-258.

Ministerio del Interior. Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2016. Recuperado de <http://www.interior.gob.es/>.

Molina, PE., Amdee, A., LeCapitaine, NJ., Zabaleta, J., Mohan, M., Winsauer, P., Stouwe CV. (2011). «Cannabinoid neuroimmune modulation of SIV disease». *J Neuroimm Pharmacol*, (6) 516–527.

Montañes, V. (2017). «Evolución del activismo cannábico en España». En Regulación Responsable (Ed.) *Las sendas de la Regulación del Cannabis en España*. (pp 145–159). Barcelona, España: Bellaterra.

Montes JM., Saíz, J. (2000). «Esquizofrenia». En Barcia, D. (Ed). *Tratado de psiquiatria* (pp:969–976) 2 (57). Ediciones Arán S.A: Madrid.

Muñoz J. y S. Soto (2001). «El uso terapéutico del cannabis y la creación de establecimientos para su adquisición y consume». *Revista de Derecho penal y Criminología* 7.

National Survey on Drug Use and Health (2014). Summary of National Findings. Recuperado de <https://www.samhsa.gov>.

Nestler, E.J. (1992). «Molecular mechanisms of drug addiction». *The Journal of Neuroscience* (7), 2439–2450.

Observatorio Civil de Drogas (2015). «10 preguntas: Autocultivo de Cannabis y nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana», *Soft Secrets* (4), 18.

Observatorio Español de Drogas y Adicciones (2017). Informe 2017. Recuperado de <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>.

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (2016). Informe 2016, Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España, p.16. Recuperado de <http://www.pnsd.mscbs.gob.es>.

Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (2018). Debate sobre el cannabis: argumentos para la apertura de una ponencia. Recuperado de <https://observatoriocannabis.com>.

Observatorio Europeo sobre Drogas (2017). Informe Europeo sobre Drogas. Tendencias y novedades. Recuperado de <http://www.emcdda.europa.eu/>.

Observatorio Vasco de Drogodependencias (2002). *Cannabis: de la salud y el derecho*. Bilbao, España: Gobierno Vasco.

Ott, J. (1996). *Pharmakoteon. Drogas enteogénicas, sus fuentes vegetales y su historia*. Barcelona, España: La liebre de Marzo.

Palali, A. y Van Ours, J.C (2014). *Cannabis Use and Support for Cannabis Legalization*. Tilburg University. Check Republic.

Pedersen, W., y Skardhamar, T. (2010). «Cannabis and Crime». *Addiction*. 109-118.

Plan Nacional sobre Drogas (2013). Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas del año 2013. Recuperado de <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>.

Plan Nacional Sobre Drogas (2017) Encuesta 2017 sobre alcohol y otras drogas. Recuperado de <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>.

Podemos Cannábico (2016). Como debería ser la regulación del cannabis según Podemos. Recuperado de <http://circulocannabico.org/>.

Podemos Cannábico (3 de noviembre de 2018). Borrador Propuesta 264 de Regulación Integral del Cannabis. Ley de la Cannabis Sativa. Recuperado de <http://circulocannabico.org/>.

Positronics (1994). Catálogo Positronics.

Real Academia Española (2014). *Diccionario de la lengua española, edición del tricentenario*. Madrid, España: Espasa.

Regulación Responsable (2016). «Los cinco pilares de una regulación integral del cannabis. Regulación Responsable». Recuperado de <http://www.regulacionresponsable.es>.

Regulación Responsable (2016). Uso personal y autocultivo de cannabis. En Regulación Responsable (Ed). *Los cinco pilares de una regulación integral del cannabis*, (pp. 6-8). Recuperado de <http://www.regulacionresponsable.es>.

Regulación Ya (12 de septiembre de 2017). #Cannabiscon-Mixta porque la #Regulación2017 sigue adelante. Recuperado de <http://www.softsecrets.com/es>.

REITOX (2013). Informe Nacional 2013. Recuperado en <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>.

Reñé, M. A (2002). *Cultivar Marihuana*. Barcelona, España: Tricomá.

Rey, L.F (1999). *El delito de tráfico de drogas tóxicas: Aspectos penales y procesales*. Barcelona, España: Tirant lo Blanch.

Riley D., O'Hare P. (2000) «Harm reduction: History, definition and practice», en Inciardi J., Harrison L. (Ed). *Harm Reduction: National and International Perspectives*. Thousand Oaks. Sage.

Rosenkrantz, H., Heyman, I.A., Braude, M.C. (1974). «Inhalation, parenteral and oral LD50 values of  $\Delta^9$ -tetrahydrocannabinol in Fischer rats». *Toxicology and Applied Pharmacology*, 28, (1), 18-27.

Rosenthal, E. (2010). *Marijuana Grower's Handbook*. Oakland, EEUU: Quick American Publishing.

Rosenthal, E. y Frank, M. (1978), *Manual para el cultivo de marihuana*. Barcelona, España: Pastanaga.

Ruano, J. y Sostoa, J. (2016). *Extracciones cannábicas*. Barcelona, España: La Cañamería Global.

Sánchez, C. (2017). «El cannabis en las convenciones internacionales sobre drogas. Posibilidades y desafíos para una regulación». En Regulación Responsable (Ed.) *Las Sendas de la Regulación en España*. (pp. 269-283). Barcelona, España: Bellaterra.

Schlossarek S., Kempkensteffen J., Reimer J., Verthein U. (2016). «Psychosocial Determinants of Cannabis Dependence: A Systematic Review of the Literature». *Eur Addict Res*, 22 (3), 131-44.

Secretaría de Estado de Seguridad (2018). Instrucción 13/2018, de 17 de octubre sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Recuperado de [www.seguridadpublica.es](http://www.seguridadpublica.es).

Sentencia Arriola y otros, de 2009, agosto, 25, punto 20.

Sentencia Audiencia Provincial de las Palmas nº 65/18 de 21 de febrero.

Sentencia Audiencia Provincial de Cuenca (Sección 1ª) nº 124/2003 de 14 de octubre.

Sentencia Audiencia Provincial de Málaga (Sección 1ª) nº. 419/2015 de 8 de julio F.D 2º.

Sentencia Audiencia Provincial de Valencia nº 469/1997, de 11 de diciembre.

Sentencia Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 2ª) de 23 de febrero de 2015.

Sentencia Corte Suprema de México n°C221/94 de 4 de noviembre de 2015.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid n°1038/2011 de 19 de diciembre.

Sentencia del Tribunal Constitucional n° 696/2016.

Sentencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante n° 3 n° 439/2014.

Sentencia Juzgado de lo Penal de Tenerife n° 302/2013 de 18 de junio.

Sentencia Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 2017.

Sentencia Tribunal Constitucional n° 10/2002.

Sentencia Tribunal Constitucional n° 119/2001, FJ. 5.

Sentencia Tribunal Constitucional n° 120/1990, FJ 11.

Sentencia Tribunal Constitucional n° 120/1990b FJ. 7.

Sentencia Tribunal Constitucional n° 341/1993, de 18 de noviembre.

Sentencia Tribunal Constitucional n° 60/2010.

Sentencia Tribunal Constitucional n° 66/1995.

Sentencia Tribunal Constitucional n° 69/1999.

Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mikulic c. Croacia, n°. 53176/99, FJ 53, CEDH 2002-II; Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Odievre c. Francia, n°. 42326/98, FJ 29, CEDH 2003.

Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sentencia Tribunal Supremo n° 1125/1995 de 8 de noviembre.

Sentencia Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2013.

Sentencia Tribunal Supremo de 6 de julio de 2017.

Sentencia Tribunal Supremo n° 1312/2005 de 7 de noviembre.

Sentencia Tribunal Supremo n° 1377/1997.

Sentencia Tribunal Supremo n° 17/6/2004.

Sentencia Tribunal Supremo n° 2063/2002 de 23 de mayo.

Sentencia Tribunal Supremo n° 2063/2002 de 23 de mayo.

Sentencia Tribunal Supremo n° 484/2015 de 7 de septiembre.

Sentencia Tribunal Supremo nº 484/2015 de 7 de septiembre.  
Sentencia Tribunal Supremo nº 900/2003 de 17 de junio.  
Sentencia Tribunal Supremo nº91/2018 de 21 de febrero.  
Sentencias Tribunal Constitucional nº 69/1989, 306/1994 y 184/1995.

Sentencias Tribunal Supremo nº 111/2010 de 24 de febrero; 157/2007, de 1 de marzo, 1198/2004, de 28 de octubre; 1113/2004, de 9 de octubre y 403/2000, de 15 de marzo, entre otras.

Sequeros, F. (2003). «La venta de semillas de Cannabis, de equipos y materiales para su cultivo, así como su propaganda, como actos con trascendencia penal». *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía* (1), 1.608-1.619.

Seymour, J. (2004). *La vida en el campo y El horticultor autosuficiente*. Barcelona, España: Blume.

Stambouli, H. et al. (2007). «Cultivation of Cannabis sativa L. in northern Morocco». *Bulletin on Narcotics*, 57 (1-2), 79-118.

Toonen, M., Ribot, S. y Jac T. (2006). «Yield of Illicit Indoor Cannabis Cultivation in The Netherlands». *Journal of Forensic Sciences* (51) 5, 1.050-1.054.

Tribunal Constitucional (2016). Memorias del Tribunal Constitucional 2016. Recuperado de <http://www.tribunalconstitucional.es/>.

UNODC (2010) Métodos recomendados para la identificación y el análisis del cannabis y los productos del cannabis. Recuperado de <https://www.unodc.org/>.

Usó, J.C (2005). «Historia y evolución del consumo de cannabis en España». En Colectivo Interzona (Ed). *Cannabis* (pp. 23-30). Madrid, España: Amagord.

Usó, J.C (2009). «La represión del cultivo de cannabis en España. Breve historia de un expolio continuado». *Cáñamo* (144).

Usó, J.C (2012). *Píldoras de realidad*. Madrid, España: Amargord.

Val, I. (2004). *Ponencia de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis en la CAV*. San Sebastián, España: Autoeditado.

Vallée, M., Vitiello, S., Bellocchio, L., Hébert-Chatelain, E., Monlezun, S., et al. (2014) «Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication». *Science*, (343), 6166.

Vandrey R.G., Budney A.J., Moore B.A., Hughes J.R. (2005). «A cross-study comparison of cannabis and tobacco withdrawal». *The American Journal on Addictions*, (14), 54–63.

Vanhove, W., Van Damme, P. y Meert N. (2011). «Factors determining yield and quality of illicit indoor cannabis (*Cannabis* spp.) production». *Forensic Science International*, 212, (1–3), 158–163.

Villalbí, J. R. Suelves, J.M., Saltó, E., Cabezas, C. (2011). «Valoración de las encuestas a adolescentes sobre consumo de tabaco, alcohol y cannabis en España». *Adicciones*, 23 (1).

Voto particular Sentencia Tribunal Supremo nº 696/2016).

Web FAD <https://www.fad.es/cannabis>.

Web PNSD. <https://http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

Weisheit, R. A. (2014). «Cannabis Cultivation in the United States». En Decorte, T., Potter, G. y Bouchard, M. (Ed.). *World Wide Weed. Global Trends in Cannabis Cultivation and its Control*. (pp. 145–162). Farnham, UK: Ashgate Publishing.

Wiesbeck G.A., Schuckit M.A., Kalmijn J.A., Tipp J.E., Bucholz K.K., y Smith T.L. (1996). «An evaluation of the history of a marijuana withdrawal syndrome in a large population». *Addiction*, 91 (10) 1469–78.

Yerba (2002). Anuncio Cannabiogen. (8), 98–99.

Yerba (2002b). *Un nuevo estilo. La apuesta por Cannabiogen*, (8), 54–61.

Zammit, S., Moore, T., H.M., Lingford-Hughes, A., Barnes, T., R. E., Jones, P. B. , Burke, M., Lewis y Glyn(2008). «Effects of Cannabis Use on Outcomes of Psychotic Disorders: Systematic Review». *The British Journal of Psychiatry*. 193, (5) 357–361.

Zuardi, AW., Crippa, JA., Hallak, J.E., Bhattacharyya, S., Atakan, Z., Martin-Santos, R., et al.(2012). «A critical review of the antipsychotic effects of Cannabidiol: 30 years of translational investigation». *Curr Pharm Des*, 18, (32), 5131–5140.



# 12.- BIOGRAFÍAS

## AUTORES

Azorín, Francisco. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia en 2011 y Máster en abogacía en 2016. Trabajo de fin de Máster en funcionamiento de Clubes Sociales de Cannabis y derechos fundamentales afectados. Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia desde 2011. Trabaja temas relacionados con el Derecho Penal, en concreto asuntos relacionados con la salud pública. Experto en derecho internacional sobre drogas y convenios internacionales de fiscalización de sustancias psicoactivas. Asistió a la 61ª reunión de la CND (Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas) celebrada en Viena en 2018. Autor de diversas publicaciones en revistas del sector cannábico. Miembro del consejo técnico del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC). Actual integrante del Estudio Jurídico Brotsanbert.

Brotons, Héctor. Director del Estudio Jurídico Brotsanbert. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Abogado especialista en derecho penal, salud pública y políticas sobre cannabis. Informa y defiende CSCs en todo el Estado. Director Jurídico y Portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC). Asesor jurídico de la ConFAC (Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas). Escribe artículos periódicos en revistas del sector cannábico, e imparte conferencias en multitud de foros nacionales e internacionales. Asesora a instituciones y partidos políticos en el diseño de políticas públicas y redacción de leyes relativas al cannabis. Además, también ha realizado trabajos de asesoramiento técnico a abogados de otras nacionalidades. Ha defendido más de un millar de casos relacionados con cultivo de cannabis y más de 2000 con cannabis en general.

Como últimos casos relevantes podemos destacar el caso Pannagh, donde se ha estimado el recurso de amparo interpuesto ante al Tribunal Constitucional y la interposición en septiembre de 2018 de una demanda frente a España, por el procedimiento administrativo sancionador por presencia de drogas en el organismo (*drogotest*) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Escohotado, Antonio. Pensador, ensayista y profesor universitario español cuyas obras, si bien centradas principalmente en el derecho, la filosofía y la sociología, han abordado una gran variedad de campos. Obtuvo notoriedad pública por sus investigaciones acerca de las drogas y son conocidas sus posiciones antiprohibicionistas. Además de su gran obra al respecto, *Historia general de las drogas*, escribe en 1997 *La cuestión del cáñamo: una propuesta constructiva sobre hachís y marihuana*, donde pone las bases del debate sobre la regulación del cannabis. El leitmotiv de su obra es una afirmación de la libertad como antídoto frente al miedo o las coacciones que empujan al ser humano hacia toda clase de servidumbres.

García de Palau, Mariano. Se licencia en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona en el año 1979. Durante 38 años trabaja como médico de urgencias en el ámbito de la medicina laboral. Su interés por el cannabis surge de manera casual y desde hace unos 15 años se dedica a estudiar el uso terapéutico del cannabis. Actualmente trabaja en Kalapa Clinic, donde asesora en tratamientos con cannabinoides, realiza trabajo clínico con pacientes y colabora con diferentes entidades y asociaciones como Catfac. Es vocal del Observatorio Español Cannabis Medicinal. Miembro regular de IACM.

Madera, Hugo. Director de la revista *Soft Secrets* y presidente del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC). Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca. DEA en Sociología en la UNED, bajo la dirección de Antonio Escohotado. En 2006 funda

el Observatorio del Cannabis, primer observatorio del cannabis de España y probablemente de Europa, siguiendo el ejemplo del Observatorio Geopolítico de las Drogas del periodista y sociólogo Alain Labrousse. Fundador también, entre otras plataformas activistas, de Federación de Asociaciones Cannábicas, FAC, Asociación de internautas del Cannabiscafe, AICC, Regulación Responsable, Manifiestaaccion o RegulacionYa. Desde el 2001 acude a cursos universitarios relacionados con el cannabis, desde los más oficialistas a los que defienden otras políticas.

Sánchez, Noemí. Noemí es licenciada en Psicología por la Universidad de València, Máster en Neuropsicología, Máster en Neurociencias, ha realizado un postgrado de Psico-oncología y Diploma en Peritaje Penal Forense. Ha publicado diversos estudios científicos y capítulos de libro en el área de las neurociencias. Actualmente es profesora asociada de la Universitat de València en el área de Psicología Básica y también asesora a CSCs en materia de prevención de riesgos. Como activista es componente del grupo motor de REMA (Red Estatal de Mujeres Anti-prohibicionistas en Materia de Drogas), miembro del consejo técnico del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) y actual presidenta del Fòrum Cannàbic Valencià.

## **EDITORES**

Agulló Mateu, Rafael. Es Licenciado en Derecho y Diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Alicante, Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Miguel Hernández y Máster en Gestión Pública por la Universidad Complutense. En la actualidad combina su actividad profesional de consultor profesional y abogado en ejercicio en SICAG consultores con la de docente en la Universidad de Alicante, en el área de Ciencia Política y de la Administración, así como en el Máster de Gestión Pública.

Gómez de Castro, Ana. Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas y Licenciada en Comunicación. Ha desarrollado su carrera profesional dentro del mundo de la comunicación, el marketing, el sector de los eventos y la docencia. Ha dirigido durante cuatros años el Máster en Organización de Eventos en la Industria de la Cultura y el Entretenimiento de la Universidad Camilo José Cela y ha sido profesora asociada. En la actualidad es ponente en diferentes programas formativos de la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Complutense y otras, impartiendo materias relacionadas con la organización de eventos.

#### Asesor científico

García, Iñaki. Ingeniero Técnico Agrícola y Licenciado en biotecnología. Lleva desde 1999 trabajando en el sector del Cannabis. Ha desarrollado tareas de asesoramiento en el uso y desarrollo de fertilizantes y aditivos para Cannabis y desempeña en la actualidad el cargo de director técnico y científico del laboratorio de la Fundación Canna. Desde su estancia en la Fundación ha desarrollado métodos analíticos para la cuantificación de cannabinoides y terpenos en diversos productos del Cannabis. También ha diseñado y realizado diversos estudios relacionados con la calidad de dichos productos. Dada su pasión por la planta ha cursado estudios de mejora genética vegetal, dedicando su trabajo fin de máster a métodos analíticos aplicados a la mejora del Cannabis.

¡Gracias por leer hasta aquí! Ayuda a una regulación inclusiva del autocultivo y uso del cannabis dejando comentarios positivos en las plataformas donde compraste este libro, también en tus redes sociales.

Tienes gratis la información más actualizada, próximas presentaciones, vídeos y otros materiales en [www.leycannabis.com](http://www.leycannabis.com)

Participa y opina en [www.encuestacannabis.com](http://www.encuestacannabis.com)

Pronto más iniciativas del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis en  
[www.observatoriocannabis.com](http://www.observatoriocannabis.com)



**Anexo:**  
**Ley catalana de las asociaciones  
de consumidores de cannabis**



**I. DISPOSICIONES GENERALES****COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA**

**9367** *Ley 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.*

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Preámbulo.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Finalidades.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Artículo 4. Definiciones.

Capítulo II. Constitución de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Artículo 5. Constitución, personalidad jurídica y obligaciones registrales.

Artículo 6. Miembros fundadores.

Artículo 7. Objetivos específicos.

Artículo 8. Organización y número de reuniones.

Capítulo III. Condiciones de ingreso a las asociaciones de consumidores de cannabis y derechos y deberes de los asociados.

Artículo 9. Condiciones de ingreso como asociado.

Artículo 10. Requisitos del aval para adquirir la condición de asociado.

Artículo 11. Derechos de los asociados.

Artículo 12. Derechos de los asociados.

Artículo 13. Pérdida de la condición de asociado.

Artículo 14. Prohibición de la transmisión de la condición de asociado.

Capítulo IV. Obligaciones documentales de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Artículo 15. Obligaciones documentales de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Artículo 16. Libro de registro de asociados.

Artículo 17. Libro de registro de autoabastecimiento.

Capítulo V. Autoabastecimiento.

Artículo 18. Producción y almacenamiento para el autoabastecimiento.

Artículo 19. Transporte.

Artículo 20. Distribución del cannabis.

Capítulo VI. Clubes de consumidores de cannabis. Limitaciones en la publicidad de las asociaciones y de los clubes.

Artículo 21. Acceso y privacidad.

Artículo 22. Condiciones de los espacios de los clubes.

Artículo 23. Actividad de los clubes.

Artículo 24. Limitaciones en la publicidad de las asociaciones e identificación de la sede de los clubes.

Capítulo VII. Medidas de control higiénico y sanitario y programas de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños.

Artículo 25. Medidas de control por parte de las asociaciones de la distribución del cannabis.

Artículo 26. Controles periódicos de las condiciones higiénicas y sanitarias de la sustancia.

Artículo 27. Colaboración con organismos y entidades de salud pública y servicios especializados de las asociaciones.

Artículo 28. Información a los usuarios y actuaciones de prevención de riesgos.

Capítulo VIII. Colaboración con otras administraciones.

Artículo 29. Principio de colaboración.

Artículo 30. Competencias municipales.

Capítulo IX. Potestades de inspección y control y régimen sancionador.

Artículo 31. Potestades de inspección y control.

Artículo 32. Principios generales del régimen sancionador.

Artículo 33. Infracciones.

Artículo 34. Sujetos responsables de las infracciones.

Artículo 35. Sanciones aplicables a las asociaciones de consumidores de cannabis.

Artículo 36. Potestad sancionadora.

Artículo 37. Procedimiento sancionador y medidas de carácter provisional.

Artículo 38. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.

Disposiciones adicionales.

Primera. Comisión de seguimiento de la aplicación de la Ley.

Segunda. Negociación colectiva.

Tercera. Equiparación de las asociaciones y los clubes de consumidores de cannabis con los clubes privados de fumadores a que se refiere la Ley del Estado 28/2005.

Cuarta. Promoción de iniciativas científicas de investigación.

Disposición transitoria. Adaptación de las asociaciones de consumidores de cannabis existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Disposiciones finales.

Primera. Análisis de medidas fiscales.

Segunda. Desarrollo reglamentario.

Tercera. Entrada en vigor.

#### PREÁMBULO

El artículo 4 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos que reconocen el propio Estatuto, la Constitución española, la Unión Europea, la Declaración universal de derechos humanos, el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y los demás tratados y convenios internacionales suscritos por España que reconocen y garantizan los derechos y las libertades fundamentales. Asimismo, el artículo 15 reconoce que las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal.

Con relación al encuadre competencial de esta ley, hay que hacer referencia, en primer lugar, al artículo 28 del Estatuto. Este artículo reconoce el derecho a la protección de la salud de los consumidores y usuarios y el derecho a disfrutar de un régimen de garantías de los productos adquiridos. Asimismo, el artículo 49 del Estatuto, reproduciendo lo establecido por el artículo 51 de la Constitución, dispone que los poderes públicos deben garantizar la protección de la salud, la seguridad y la defensa de los derechos y los intereses legítimos de los consumidores y usuarios, y también que deben apoyar a las organizaciones de consumidores y usuarios. Por otro lado, el artículo 123 del Estatuto establece que corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de consumo, que incluye, en todo caso, la defensa de los derechos de consumidores y usuarios, proclamados por el citado artículo 28. Hay que recordar, además, que la Generalidad, respetando las condiciones básicas que el Estado establece, mediante reserva de ley orgánica, para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de asociación, tiene la competencia exclusiva en materia de asociaciones según el artículo 118 del Estatuto, así como en materia de publicidad, sin perjuicio de la legislación mercantil del Estado.

El consumo de cannabis por parte de adultos, en el ámbito privado, ya sea por motivos lúdicos o por motivos terapéuticos, es una opción que forma parte del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la libertad de conciencia y de disposición del propio cuerpo, así como del derecho a la salud y a escoger las terapias y los tratamientos más adecuados al estado de salud de cada persona.

Tras más de medio siglo de políticas prohibicionistas y represivas hacia el consumo del cannabis llevadas a cabo tanto en Cataluña como en buena parte del mundo, existe en nuestro país una parte significativa de la población que consume esta sustancia en una situación de inseguridad jurídica y sanitaria que supone una injusta discriminación y la vulneración de sus derechos fundamentales. Dichas políticas han propiciado tanto la existencia de un mercado clandestino que abastece de cannabis sin ningún control de calidad, con una falta absoluta de información al consumidor sobre las propiedades del producto, como un entorno que dificulta el conocimiento y la aplicación de políticas de salud pública orientadas a minimizar los riesgos y reducir los daños derivados del consumo de cannabis.

La participación ciudadana es una pieza clave en el funcionamiento del sistema democrático. La soberanía popular se ejerce mediante los diferentes canales de participación establecidos por la Constitución, el Estatuto y la legislación de régimen local, tanto la estatal como la autonómica.

En este sentido, la sociedad civil catalana ha sido históricamente un elemento vertebrador y clave en la defensa de los intereses y los derechos de los ciudadanos, y también en la iniciativa de sus aspiraciones.

Desde que en 1991 se fundó en Barcelona la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC), reconocida como la primera asociación de consumidores de cannabis que llevó a cabo un cultivo colectivo, el número de estas entidades ha proliferado. Se estima que actualmente hay cientos de clubes sociales de cannabis en Cataluña. Estas asociaciones se han ido constituyendo a partir del modelo del uso compartido, es decir del autocultivo y el autoconsumo compartidos por los miembros de la asociación. El modelo no está, pues, orientado a terceras personas, sino a la actividad entre los miembros de la asociación. El modelo de asociación de consumidores de cannabis que regula la presente ley se ha construido sobre la base de la capacidad de afrontar retos de la sociedad civil, que reclama un marco jurídico claro y un reconocimiento legal para una actividad que está presente actualmente en nuestra sociedad de forma no regulada.

Asimismo, la sociedad civil, organizada en torno al movimiento cannábico, ha llevado a cabo una labor de autorregulación muy importante y valiosa, con el establecimiento de criterios, pautas y códigos de buenas prácticas. Asimismo, su existencia ha puesto de manifiesto una incontrovertible realidad social respecto al consumo de cannabis y ha construido un modelo, objeto de estudio a nivel internacional, en un momento de debate a nivel mundial sobre la necesidad de un cambio de orientación en políticas de drogas,

basado en la prevención de los riesgos y la reducción de los daños asociados a su consumo y el respeto de los derechos fundamentales.

Las administraciones locales de Cataluña han sido también pioneras. En el año 2012 el Ayuntamiento de Rasquera aprobó un plan para promover la investigación científica, dar solución a los retos que se planteaban las asociaciones y optimizar los recursos, que la ciudadanía apoyó en una consulta popular.

En febrero de 2014 el Parlamento de Cataluña aprobó la Moción 77/X, sobre la seguridad ciudadana, que pedía a la Comisión de Salud que hiciera los trabajos para que el Gobierno regulara las asociaciones de consumidores de cannabis, motivada por los cambios legislativos en España, que causaban aún más inseguridad jurídica a las asociaciones y a las personas que forman parte de ellas y, por tanto, instaba a la regulación desde la perspectiva de la salud pública en el marco de las políticas de reducción de daños, con la voluntad de disminuir también los riesgos derivados de la falta de regulación de esta actividad y de dar un reconocimiento normativo a la actividad regulada de las asociaciones.

El 29 de enero de 2015, el Parlamento aprobó la Resolución 932/X, sobre las asociaciones de consumidores de cannabis, cuyo debate puso de manifiesto la orientación de la Generalidad en políticas de drogas y que instaba al Gobierno, mediante el departamento competente en materia de salud, a regular estas asociaciones y a aprobar los criterios relevantes a los efectos de salud pública con relación al consumo asociativo de cannabis.

En este sentido, la Resolución SLT/32/2015 del Departamento de Salud, de 15 de enero, por la que se aprueban criterios en materia de salud pública para orientar las asociaciones cannábicas y sus clubes sociales y las condiciones del ejercicio de su actividad para los ayuntamientos de Cataluña, no solo respondía a los debates en torno a una sustancia que tiene efectos sobre la salud y que, por tanto, también deben abordarse desde el punto de vista de la salud pública, sino también a las inquietudes del mundo local, que reclamaba unos criterios mínimos y comunes para orientar la regulación municipal.

La iniciativa de la sociedad civil, que nace de la necesidad de buscar nuevas respuestas ante la prohibición, se sitúa en la línea de los nuevos movimientos internacionales, que han constatado la ineficacia de las políticas prohibicionistas para la reducción del consumo y del tráfico ilegal del cannabis, y responde al cambio que se está llevando a cabo en este ámbito, que consiste en orientar las políticas de drogas sobre la base de la reducción de los riesgos y los daños.

Las oportunidades que ofrece la regulación de la actividad de las asociaciones de consumidores de cannabis son importantes: en primer lugar, rompe su opacidad e invisibilidad, por lo que permite un mejor conocimiento de la realidad del fenómeno y, por tanto, una intervención con políticas eficaces; aumenta el grado de conocimiento sobre la sustancia, así como la formación y la información de los consumidores; permite acceder a la población consumidora y mejorar las políticas de prevención y de disminución de daños; facilita prohibir la promoción del consumo de la sustancia; reduce las posibilidades de contacto de los consumidores con el mercado ilícito de cannabis y otras drogas; introduce límites a una realidad hasta el momento sin regulación ni límites claros, lo cual permite actuar sobre los infractores con objetividad y evitando el actual exceso de penalización por parte del sistema judicial.

La presente ley consta de treinta y ocho artículos, que se estructuran en nueve capítulos. El primer capítulo, de disposiciones generales, contiene el objeto, las finalidades, el ámbito de aplicación y las definiciones; el segundo establece las condiciones para la constitución de las asociaciones de consumidores de cannabis; el tercero, sobre las condiciones de ingreso a las asociaciones, trata también los derechos y deberes de los asociados; el cuarto contiene las disposiciones relativas a los libros de registro que las asociaciones están obligadas a mantener; el quinto trata sobre la producción y el almacenamiento para el autoabastecimiento, el transporte y la distribución del cannabis; el sexto contiene las disposiciones sobre los clubes de consumidores de cannabis y las limitaciones en la publicidad de los establecimientos; el séptimo establece las medidas de

control higiénico y sanitario y los programas de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños; el octavo, la colaboración con otras administraciones para la aplicación de una política de drogas basada en la prevención de los riesgos y la reducción de los daños asociados al consumo de cannabis, y el noveno establece el régimen de infracciones y sanciones.

La parte final consta de cuatro disposiciones adicionales, sobre el seguimiento de la aplicación de la Ley, la negociación colectiva entre los representantes de las asociaciones y los trabajadores, la equiparación de las asociaciones y los clubes de consumidores de cannabis con los clubes privados de fumadores y la promoción de iniciativas científicas de investigación; una disposición transitoria sobre el plazo para la adaptación a la Ley de las asociaciones existentes, y tres finales sobre el análisis de medidas fiscales, el desarrollo reglamentario de la Ley y su entrada en vigor.

## CAPÍTULO I

### Disposiciones generales

#### Artículo 1. *Objeto.*

El objeto de la presente ley es establecer el régimen jurídico de las asociaciones de consumidores de cannabis y de sus clubes, la regulación de todas las actividades que llevan a cabo, los derechos y deberes de los asociados, así como los mecanismos de control y de inspección de su actividad desde el punto de vista de la salud pública, con el fin de prevenir los riesgos inherentes al consumo de cannabis y reducir los daños.

#### Artículo 2. *Finalidades.*

Las finalidades de la presente ley son:

- a) Proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a advertir de los riesgos y daños del consumo de cannabis y a minimizarlos.
- b) Velar por que se respeten los derechos de los consumidores de cannabis, garantizar que su ejercicio sea conforme con la legalidad y hacerlos compatibles con los derechos y las libertades de todas las personas.
- c) Establecer los mecanismos para la protección de la salud de los consumidores de cannabis, especialmente para el control y la información sobre la calidad, las características y los efectos de la sustancia que consumen.
- d) Impulsar medidas informativas, educativas, de gestión de riesgos y de prevención sobre las consecuencias y los efectos perjudiciales vinculados al consumo de cannabis.
- e) Establecer las condiciones del ejercicio de la actividad de las asociaciones de consumidores de cannabis.
- f) Establecer mecanismos para mejorar la actividad de las asociaciones de consumidores de cannabis desde el punto de vista de la salud pública, en coordinación con las políticas que lleven a cabo en esta materia las administraciones competentes.
- g) Establecer los mecanismos para la protección medioambiental en el ejercicio de las actividades de las asociaciones de consumidores de cannabis.
- h) Dotar a los entes municipales de los criterios para la autorización de las actividades de las asociaciones de consumidores de cannabis.
- i) Establecer el régimen jurídico de las actividades de las asociaciones de consumidores de cannabis.
- j) Promover mecanismos para garantizar la seguridad pública y privada en el desarrollo de las actividades de las asociaciones de consumidores de cannabis.
- k) Garantizar los derechos de los asociados que integran las asociaciones de consumidores de cannabis.

**Artículo 3. *Ámbito de aplicación.***

La presente ley se aplica a las entidades definidas en el artículo 4 que tienen su domicilio o desarrollan sus actividades en Cataluña.

**Artículo 4. *Definiciones.***

A los efectos de la presente ley, se entiende por:

- a) Asociaciones de consumidores de cannabis: las asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que se autoabastecen y distribuyen cannabis entre sus asociados, todos ellos mayores de edad, los cuales consumen esta sustancia en un ámbito privado, ya sea con finalidad lúdica o terapéutica, reduciendo así los daños sociales y sobre la salud asociados al mercado clandestino y a determinados usos del cannabis.
- b) Consumidor de cannabis: la persona mayor de edad que decide consumir cannabis voluntariamente o la que lo necesita por motivos terapéuticos.
- c) Club de consumidores de cannabis: el espacio de ámbito privado gestionado por una asociación de consumidores de cannabis, que reúne las condiciones idóneas para el consumo de cannabis por parte de sus miembros y donde se lleva a cabo principalmente esta actividad.
- d) Autoabastecimiento: las actuaciones que lleva a cabo una asociación de consumidores de cannabis destinadas a la producción mediante el cultivo y el procesamiento del cannabis, al transporte y a la distribución del cannabis de forma exclusiva para el consumo individual e intransferible de sus asociados y siempre dentro del ámbito de la asociación.

**CAPÍTULO II****Constitución de las asociaciones de consumidores de cannabis****Artículo 5. *Constitución, personalidad jurídica y obligaciones registrales.***

1. Las asociaciones de consumidores de cannabis de Cataluña son asociaciones sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo establecido por la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y el libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril, y gozan de personalidad jurídica propia de acuerdo con lo establecido por estas normas.

2. Las asociaciones de consumidores de cannabis de Cataluña deben inscribirse en el Registro de Asociaciones de la Generalidad de Cataluña, en la clasificación funcional específica creada a efectos estadísticos y de censo de acuerdo con lo dispuesto por el Código civil de Cataluña, y también, si la regulación local lo establece, en el registro municipal de asociaciones o de clubes cannábicos.

3. Las asociaciones de consumidores de cannabis deben respetar las ordenanzas municipales, siempre que no contradigan la presente ley, y obtener la correspondiente autorización del ayuntamiento para realizar sus actividades.

**Artículo 6. *Miembros fundadores.***

Los miembros fundadores de una asociación de consumidores de cannabis deben ser mayores de edad y consumidores de cannabis.

**Artículo 7. Objetivos específicos.**

Las finalidades de las asociaciones de consumidores de cannabis deben hacerse constar en sus estatutos, que deben contener, como mínimo, los siguientes objetivos específicos:

- a) El autoabastecimiento y la distribución de cannabis entre los asociados para el consumo privado.
- b) La prevención de riesgos y la reducción de los daños asociados al mercado clandestino y a determinados usos del cannabis.
- c) La información a los asociados relativa a la sustancia, al consumo y a los riesgos derivados y a todo aquello que desde los programas específicos de salud pública deba transmitirse a los asociados.
- d) El control de la calidad y las propiedades del cannabis en la producción y la distribución a los asociados.

**Artículo 8. Organización y número de reuniones.**

1. Las asociaciones de consumidores de cannabis se organizan de acuerdo con la Ley orgánica 1/2002, el libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y las disposiciones de la presente ley.

2. La asamblea general de las asociaciones de consumidores de cannabis, además de la reunión ordinaria que establece el artículo 322-3 del libro tercero del Código civil de Cataluña, debe reunirse con carácter ordinario una segunda vez al año para hacer el análisis y la valoración de la gestión del órgano de gobierno.

**CAPÍTULO III****Condiciones de ingreso a las asociaciones de consumidores de cannabis y derechos y deberes de los asociados****Artículo 9. Condiciones de ingreso como asociado.**

Las condiciones para poder adquirir la condición de asociado de una asociación de consumidores de cannabis son las siguientes:

- a) Ser mayor de edad.
- b) Ser consumidor de cannabis.
- c) Tener el aval de otro asociado, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 10.4 para los mayores de edad que necesitan consumir la sustancia por motivos terapéuticos.
- d) Firmar un documento en que se declare conocer el objeto y las finalidades de la asociación que establecen los estatutos, así como los derechos como asociado y los deberes que se está obligado a cumplir como miembro de la asociación.

**Artículo 10. Requisitos del aval para adquirir la condición de asociado.**

1. El aval para poder adquirir la condición de asociado a que se refiere el artículo 9 debe hacerse mediante un documento en que consten los datos y la firma del asociado avalador, los datos de la persona avalada y el término aval o cualquier otra fórmula equivalente que establezcan los estatutos.

2. El aval debe formalizarse en las dependencias de la asociación en presencia del asociado avalador y de la persona avalada.

3. El asociado avalador que responde de los datos de la persona que quiere adquirir la condición de asociado debe tener una antigüedad en la asociación de al menos un mes y puede avalar hasta un máximo de quince personas al año. Los estatutos de la asociación pueden establecer un número anual inferior de personas avaladas.

4. El aval no es requerido a los mayores de edad que deciden consumir cannabis por necesidades terapéuticas debidamente justificadas. Las condiciones y el modo de acreditar la necesidad de consumir cannabis por motivos terapéuticos deben establecerse por reglamento.

Artículo 11. *Derechos de los asociados.*

El miembro de una asociación de consumidores de cannabis, además de los derechos que establece la normativa reguladora del derecho de asociación a que se refiere el artículo 8 y de los que puedan establecer los estatutos, tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

- a) Participar en las actividades que organice la asociación y en las actividades en que esta participe.
- b) Recibir una información veraz y actualizada por parte de la asociación con relación a la información y los datos que contienen los libros del artículo 15, con las únicas limitaciones establecidas por la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
- c) Consultar en cualquier momento su ficha de consumo.
- d) Conocer el resultado de las pruebas analíticas periódicas de la sustancia que se distribuye.
- e) Solicitar, en cualquier momento, la disminución de su previsión de consumo o darse de baja de la actividad o programa de autoabastecimiento sin tener que abonar ningún coste.
- f) Participar en los programas de gestión de la prevención de riesgos de la asociación.
- g) Ser informado por la asociación sobre los programas de detección precoz, seguimiento y derivación de casos de consumo problemático o abusivo del cannabis.
- h) Avalar nuevos asociados, con los límites que establece el artículo 10.

Artículo 12. *Derechos de los asociados.*

Los miembros de una asociación de consumidores de cannabis están obligados a:

- a) Consumir la sustancia dispensada estrictamente en el ámbito privado y en las condiciones marcadas por la asociación.
- b) Evitar cualquier situación en que pueda producirse un consumo que pueda perjudicar a terceras personas, sobre todo a menores de edad.
- c) Cumplir la normativa específica de la asociación.
- d) Facilitar la documentación que les requiera la asociación.
- e) Comunicar a la asociación cualquier cambio en sus datos personales de contacto.
- f) Hacer un uso correcto de las instalaciones de la asociación.
- g) Cumplir con el resto de deberes y obligaciones que establezcan los estatutos.

Artículo 13. *Pérdida de la condición de asociado.*

1. La condición de asociado de una asociación de consumidores de cannabis se pierde por alguna de las siguientes causas:

- a) Por baja voluntaria.
- b) Por la transmisión a terceras personas de la sustancia recibida a título personal como asociado.
- c) Por consumir la sustancia fuera del ámbito privado o en condiciones que perjudiquen a terceras personas y, especialmente, a menores de edad.
- d) Por obstaculizar la finalidad y los objetivos de la asociación que establecen los estatutos.

e) Por las demás causas que determinen los estatutos y que no contradigan la Ley orgánica 1/2002, el libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, ni las disposiciones de la presente ley.

2. El asociado debe ser escuchado y conocer los motivos que fundamentan la pérdida de su condición antes de que la asociación adopte la correspondiente resolución. A tal efecto, los estatutos de la asociación deben determinar el órgano competente para acordar la pérdida de la condición de asociado y establecer un procedimiento que garantice su audiencia previa.

Artículo 14. *Prohibición de la transmisión de la condición de asociado.*

Los estatutos de las asociaciones de consumidores de cannabis deben establecer de forma expresa que la condición de asociado de sus miembros es intransferible.

#### CAPÍTULO IV

##### **Obligaciones documentales de las asociaciones de consumidores de cannabis**

Artículo 15. *Obligaciones documentales de las asociaciones de consumidores de cannabis.*

1. Las asociaciones de consumidores de cannabis deben cumplir las obligaciones documentales y contables que establece la Ley orgánica 1/2002 y el libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y están obligadas a tener y a mantener actualizados y custodiados los siguientes libros de registro y control:

- a) Libro de registro de asociados.
- b) Libro de registro de autoabastecimiento.

2. Los estatutos de las asociaciones de consumidores de cannabis deben hacer constar las medidas para garantizar que el derecho de acceso a la información que consta en los libros de registro, especialmente la relativa a los datos de los asociados que lo son por motivos terapéuticos, cumple la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Estas medidas deben establecerse por reglamento.

Artículo 16. *Libro de registro de asociados.*

Las asociaciones de consumidores de cannabis deben hacer constar en el libro de registro de asociados, para cada asociado, nombre y apellidos, número del documento de identidad, número de asociado, fecha de ingreso y, en su caso, los datos que identifican a la persona que lo avaló.

Artículo 17. *Libro de registro de autoabastecimiento.*

1. El libro de registro de autoabastecimiento consta de los siguientes libros:

- a) Libro de asociados inscritos en el programa de autoabastecimiento.
- b) Libro de producción.
- c) Libro de transporte.
- d) Libro de distribución.

2. El libro de asociados inscritos en el programa de autoabastecimiento debe hacer constar la siguiente información de los asociados que, además de querer pertenecer a la asociación, desean estar inscritos en el programa de autoabastecimiento de cannabis:

- a) El número de asociado que consta en el libro de registro de asociados.

- b) La solicitud de participación del asociado en el programa de autoabastecimiento, con su previsión mensual de consumo de cannabis, en que declare que las cantidades retiradas son para su consumo personal y en un ámbito estrictamente privado.
  - c) La fecha de incorporación al programa de autoabastecimiento.
  - d) Las retiradas de cannabis para el consumo, actualizadas mensualmente.
3. El libro de producción debe hacer constar los siguientes datos:
- a) Las fechas y los cultivos programados de cada año, las técnicas que han sido utilizadas y las cantidades recolectadas y aptas para el consumo.
  - b) La fecha de procesamiento de los productos derivados del cannabis, con la identificación y la cantidad de sustancia utilizada y la finalmente transformada.
  - c) La producción anual.
  - d) La fecha del informe técnico y el resultado a que se refiere el artículo 18.
4. El libro de transporte debe hacer constar las autorizaciones por escrito del órgano de gobierno de la asociación, que deben contener, en cada caso:
- a) Los datos de la asociación.
  - b) La identidad del transportista.
  - c) La cantidad y el tipo de producto que se transporta.
  - d) El destino.
  - e) La fecha del transporte.
5. El libro de distribución debe hacer constar:
- a) La ficha de consumo de cada asociado inscrito en el programa de autoabastecimiento, que debe indicar su nombre y apellidos, número de asociado, previsiones mensuales de consumo, cantidades y fechas de retirada de cannabis y su firma.
  - b) La cantidad máxima que puede retirarse de una sola vez en un mismo mes.
  - c) Cualquier otro aspecto relacionado con la distribución que permita garantizar las actuaciones de control y verificación de la asociación y que se determine por reglamento.

## CAPÍTULO V

### Autoabastecimiento

#### Artículo 18. *Producción y almacenamiento para el autoabastecimiento.*

1. La asociación de consumidores de cannabis es la única facultada para el cultivo del cannabis, que debe destinarse al consumo exclusivo e individual de cada asociado inscrito en el programa de autoabastecimiento.
2. La asociación de consumidores de cannabis debe obtener un informe técnico pericial de cada cultivo, que debe elaborar un profesional agrónomo externo con titulación de ingeniería agrícola o de ingeniero agrónomo o con titulación equivalente, que determine que las previsiones de cultivo se ajustan a las previsiones de consumo acordadas.
3. La asociación de consumidores de cannabis debe hacer revisiones cada seis meses para adaptar la producción a la demanda real de los asociados inscritos en el programa de autoabastecimiento, la cual no podrá exceder de la cantidad que establece el artículo 20. La asociación debe regular la manera de ajustar la demanda, en su caso, a la producción máxima permitida.
4. El cultivo para el autoabastecimiento de la asociación no puede superar la producción anual de ciento cincuenta kilogramos de unidades floridas en seco.
5. El almacenamiento del cannabis debe hacerse en las condiciones higiénicas, ambientales y de seguridad que se determinen por reglamento. La seguridad del almacenamiento es responsabilidad de la asociación.

6. Deben establecerse por reglamento el procedimiento para la comunicación del cultivo a la Administración competente; los requisitos de seguridad y las medidas de control higiénico y sanitario del cultivo; las condiciones medioambientales en las que se lleva a cabo la producción; el control de la producción; la preparación del cannabis para el consumo y la producción de productos derivados, y los requisitos y las condiciones para garantizar que el cultivo se hace asegurando su privacidad para evitar que sea visible y accesible.

#### Artículo 19. *Transporte.*

1. Una vez realizado el control pericial del cultivo y cuantificado el volumen final de la producción, el órgano de gobierno de la asociación debe emitir la autorización escrita a que se refiere el artículo 17.4 para el transporte del producto derivado del cultivo desde el lugar donde se produce hasta las dependencias de la asociación donde se llevan a cabo el procesamiento, la distribución controlada y la destrucción, en su caso, del cannabis.

2. El cannabis debe ser empaquetado y sellado para garantizar su integridad en el proceso de transporte. Debe establecerse por reglamento el tipo de empaquetado y la información sobre la trazabilidad y la sustancia que debe contener.

3. El transporte no puede hacerse en medios de transporte colectivo.

#### Artículo 20. *Distribución del cannabis.*

1. La distribución del cannabis debe llevarse a cabo en un espacio privado, siempre dentro del ámbito de la asociación, con acceso restringido y exclusivo para los asociados, y destinado exclusivamente a su consumo personal.

2. Los asociados no pueden transmitir a terceras personas el cannabis que se les dispensa a título personal.

3. Los asociados que deseen participar en el autoabastecimiento asociativo deben solicitarlo por escrito, expresando su previsión de consumo, que no puede sobrepasar los sesenta gramos mensuales, o los veinte gramos mensuales en el caso de los asociados de entre dieciocho y veintiún años, sin perjuicio de lo dispuesto por el apartado 4.

4. La cantidad máxima de cannabis de que pueden disponer los asociados puede ser incrementada si el consumo se realiza por motivos terapéuticos. La manera de justificar esta circunstancia y los términos en que debe hacerse la distribución del cannabis para el consumo terapéutico deben establecerse por reglamento.

5. Entre la fecha de incorporación al programa de autoabastecimiento y la primera dispensación debe transcurrir un período de carencia de quince días, salvo en los casos de asociados que lo necesiten por motivos terapéuticos, que pueden hacer la primera retirada el mismo día de su incorporación.

### CAPÍTULO VI

#### **Clubes de consumidores de cannabis. Limitaciones en la publicidad de las asociaciones y de los clubes**

#### Artículo 21. *Acceso y privacidad.*

1. Los clubes de consumidores de cannabis son espacios estrictamente privados, de acceso restringido a sus asociados.

2. Los clubes de consumidores de cannabis deben comprobar la identidad y la condición de asociado de las personas que acceden al interior del espacio destinado al consumo o a la distribución del cannabis.

#### Artículo 22. *Condiciones de los espacios de los clubes.*

1. Los espacios de los clubes de consumidores de cannabis destinados a la distribución deben estar separados de los espacios destinados al consumo de cannabis.

2. Los clubes de consumidores de cannabis deben cumplir las condiciones de salubridad de los locales establecidas por la normativa vigente y su actividad debe respetar la normativa de protección medioambiental.

3. Los clubes de consumidores de cannabis no pueden instalarse en espacios reservados o compartimentados dentro de otros establecimientos donde se lleven a cabo actividades distintas de las propias de una asociación de consumidores de cannabis.

*Artículo 23. Actividad de los clubes.*

1. Con relación a los derechos de los consumidores y a los del resto de la ciudadanía, la actividad de los clubes de consumidores de cannabis debe:

- a) Respetar la no discriminación en el ejercicio de los derechos fundamentales de asociación, de reunión y a la libertad en un espacio privado colectivo.
- b) Permitir hacer compatible el ejercicio de los derechos de sus miembros con los del resto de la ciudadanía.
- c) Garantizar el derecho a la salud de las personas y el derecho a vivir en un medio equilibrado, sostenible y saludable.

2. En el interior de los clubes de consumidores de cannabis está prohibido:

- a) Consumir otras drogas no institucionalizadas, bebidas alcohólicas y productos alimenticios que contengan cannabis.
- b) Crear espacios reservados o segregaciones o instalar espacios compartimentados destinados a actividades con fines distintos de los que establezcan los estatutos de acuerdo con esta ley.

3. A los efectos de lo dispuesto por el presente artículo, deben establecerse por reglamento:

- a) Los parámetros medioambientales obligatorios, los valores máximos de emisión atmosférica y las medidas correctoras exigibles a los clubes de consumidores de cannabis.
- b) Las distancias mínimas entre dos clubes de consumidores de cannabis, entre los clubes y los centros educativos y entre los clubes y los equipamientos y servicios sanitarios.
- c) Las limitaciones horarias de apertura de los clubes de consumidores de cannabis.

4. Las disposiciones que se establezcan por reglamento para el cumplimiento de lo establecido por el apartado 3 deben respetar la titularidad y el ejercicio de las competencias municipales que correspondan.

*Artículo 24. Limitaciones en la publicidad de las asociaciones e identificación de la sede de los clubes.*

1. Las asociaciones de consumidores de cannabis tienen prohibida cualquiera de las siguientes actividades:

- a) Hacer publicidad del cannabis mediante cualquier forma de comunicación, recomendación o acción comercial cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de las asociaciones de consumidores de cannabis, de los clubes o del consumo de la sustancia.
- b) Hacer actuaciones de patrocinio consistentes en realizar cualquier tipo de contribución, pública o privada, a un acontecimiento, actividad o individuo cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción del consumo de cannabis.
- c) Realizar cualquier actividad de promoción para estimular la demanda del cannabis.

2. Quedan excluidas de la prohibición del apartado 1:

- a) La participación de las asociaciones de consumidores de cannabis en eventos, foros, redes sociales o medios de comunicación de cualquier tipo, relacionados con

programas específicos en materia de salud pública o dedicados de manera única y exclusiva al cannabis, que no comporten ningún tipo de promoción.

b) La mera inclusión de las asociaciones en una lista o guía de direcciones de personas o de organismos.

3. La sede de la asociación y el lugar de emplazamiento de los clubes de consumidores de cannabis deben mostrar únicamente una placa exterior con el nombre de la asociación, el número de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Generalidad de Cataluña, y, en su caso, el del registro municipal de asociaciones, y la indicación de que se trata de un espacio privado de acceso exclusivo a sus asociados.

## CAPÍTULO VII

### **Medidas de control higiénico y sanitario y programas de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños**

Artículo 25. *Medidas de control por parte de las asociaciones de la distribución del cannabis.*

1. En el momento en que el asociado retira una cantidad de cannabis, debe verificarse su identidad, la previsión de consumo aprobada y las retiradas de producto realizadas en el mes vigente, para comprobar que todo ello se ajusta a los parámetros establecidos. Las asociaciones deben contar con los medios técnicos, personales e informáticos que garanticen estas actuaciones de comprobación y verificación.

2. El asociado debe retirar de la asociación la cantidad de cannabis asignada para su consumo individual y transportarla en un embalaje que evite la posibilidad de manipular su contenido y que permita identificar la asociación proveedora, la fecha de retirada y el número de asociado. La asociación debe adoptar las medidas para evitar la manipulación o la alteración del embalaje que contiene el producto.

3. Las asociaciones pueden establecer medios de custodia para que los asociados que lo deseen puedan depositar en sus dependencias el producto dispensado de manera individual e intransferible. Estas cantidades no computan en los límites del almacenamiento a que se refiere el apartado 5.

4. Las determinaciones sobre la cantidad máxima de cannabis que un asociado puede retirar de una sola vez en un mismo mes y cualquier otro aspecto relacionado con la distribución deben ser concretados por reglamento.

5. La asociación no puede almacenar más cannabis del que fija la previsión total colectiva mensual, y debe realizarse en las condiciones higiénicas, ambientales y de seguridad que se determinen por reglamento.

Artículo 26. *Controles periódicos de las condiciones higiénicas y sanitarias de la sustancia.*

1. Las asociaciones de consumidores de cannabis deben velar por que sus miembros de pleno derecho accedan a consumir una sustancia libre de contaminantes, adulteraciones y patógenos, a cuyo efecto deben someterla a los controles analíticos periódicos que se establezcan por reglamento, que en ningún caso pueden ser inferiores a un análisis por variedad y cosecha.

2. Los controles analíticos periódicos de la sustancia que se distribuye y se consume deben realizarse en laboratorios autorizados por la Administración.

Artículo 27. *Colaboración con organismos y entidades de salud pública y servicios especializados de las asociaciones.*

1. Las asociaciones de consumidores de cannabis deben participar y colaborar con el departamento competente en materia de salud y con entidades especializadas para

ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizados en gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños dirigidos a los asociados.

2. Las administraciones públicas pueden promover la creación de órganos o programas de colaboración entre ellas y las asociaciones de consumidores de cannabis o las entidades que las representan, para conseguir una información empírica y estadística más detallada, con valor científico, que permita establecer medidas de control sanitario, participar en la elaboración de planes de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños, y también ofrecer formación sobre el consumo, los riesgos que conlleva y sobre cualquier otra cuestión relativa al consumo de cannabis en Cataluña.

3. Las asociaciones de consumidores de cannabis que tengan asociados que necesitan consumir la sustancia por motivos terapéuticos deben tener los servicios especializados necesarios y ponerlos a disposición de dichos asociados en la forma y las condiciones que se determinen por reglamento.

4. Las asociaciones de consumidores de cannabis deben ofrecer información y asesoramiento profesional en materia de prevención de riesgos y reducción de daños a sus trabajadores y asociados, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento y lo que disponga el departamento competente en materia de salud pública, que debe incluir un programa de información específico dirigido a los asociados de dieciocho a veintinueve años.

5. Las asociaciones de consumidores de cannabis deben remitir al departamento competente en materia de salud y, dentro de este, al organismo responsable del seguimiento de la calidad y la actividad de las asociaciones cuanta información estadística y epidemiológica sea necesaria para el control de la actividad, de la forma y con los criterios que se determinen por reglamento.

#### Artículo 28. *Información a los usuarios y actuaciones de prevención de riesgos.*

1. Las asociaciones de consumidores de cannabis deben informar a los asociados sobre las propiedades del cannabis y sus derivados, sobre las formas de consumo, sus efectos, así como sobre los riesgos y daños que pueden derivarse del consumo de esta sustancia.

2. Las personas de la asociación encargadas de manipular y dispensar el cannabis deben tener la formación necesaria y continua para el cumplimiento de sus tareas y, especialmente, la relativa a las propiedades del cannabis y sus derivados, a los efectos, a los riesgos y a los daños que pueden derivarse del consumo de esta sustancia, en los términos que se establezcan por reglamento.

3. La asociación de consumidores de cannabis debe disponer de información actualizada sobre los servicios y los profesionales que pueden ayudarles a reducir o a abandonar el consumo de cannabis y debe darla a conocer a los asociados que quieran contactar con ellos.

### CAPÍTULO VIII

#### Colaboración con otras administraciones

#### Artículo 29. *Principio de colaboración.*

El Gobierno debe colaborar con el resto de administraciones estatales, municipales, nacionales e internacionales competentes o interesadas en profundizar en una política de drogas basada en la prevención de los riesgos y la reducción de los daños asociados a su consumo y en la evidencia científica, y debe procurar que se alcancen la plena efectividad de los derechos que tutela la presente ley y los objetivos de salud pública y medioambiental que establece.

**Artículo 30. Competencias municipales.**

Es competencia del Gobierno controlar la actividad de las asociaciones y los clubes de consumidores de cannabis, para que cumplan las obligaciones de la presente ley, independientemente de las colaboraciones que puedan establecerse con los gobiernos municipales y sin perjuicio de las potestades de los entes locales en el ámbito de sus competencias, en los términos establecidos por la legislación de régimen local.

**CAPÍTULO IX****Potestades de inspección y control y régimen sancionador****Artículo 31. Potestades de inspección y control.**

1. El control de la actuación de las asociaciones de consumidores de cannabis corresponde a los departamentos competentes en materia de salud pública, seguridad ciudadana y agricultura, según proceda por razón de la materia y de acuerdo con la distribución del artículo 33. Dicho control incluye la potestad inspectora sobre el cumplimiento de todas las obligaciones que establece la presente ley.

2. El personal de la Administración encargado de las funciones públicas de inspección y control tiene la consideración de autoridad, y los hechos constatados directamente por dicho personal, formalizados en un documento público con los requisitos legalmente establecidos, tienen la presunción de veracidad, salvo prueba en contrario.

3. Las asociaciones de consumidores de cannabis y los clubes que sean inspeccionados o controlados están obligados a prestar la máxima colaboración en las tareas de inspección y control, así como a proporcionar los datos necesarios que se les solicite.

**Artículo 32. Principios generales del régimen sancionador.**

1. El incumplimiento de los deberes y de las obligaciones que establece esta ley por parte de las asociaciones, sus clubes y sus responsables conlleva la aplicación del régimen sancionador regulado por el presente capítulo, sin perjuicio del régimen establecido por las ordenanzas municipales que sea aplicable.

2. El régimen sancionador del presente capítulo no se aplica si los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal y tampoco si, de acuerdo con la legislación, puede ser aplicable otro régimen administrativo o jurisdiccional.

3. En todo lo que no determina el presente capítulo son aplicables los principios y las reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador, establecidos por la legislación básica y por la legislación de la Generalidad en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.

**Artículo 33. Infracciones.**

1. Las infracciones por incumplimiento de lo establecido por la presente ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Son infracciones muy graves:

a) En el ámbito de la salud pública:

1.º La admisión de asociados incumpliendo las condiciones y los requisitos establecidos por los artículos 9 y 10.

2.º Distribuir la sustancia con adulteraciones, contaminantes o patógenos o sin realizar los controles analíticos periódicos en los términos que establece el artículo 26, si se pone en riesgo la salud de las personas.

3.º Permitir el consumo de otras drogas no institucionalizadas, bebidas alcohólicas y productos alimenticios que contengan cannabis.

4.º Permitir la entrada de personas no asociadas a los espacios reservados donde se lleva a cabo el consumo o la dispensación de cannabis.

5.º Dispensar cannabis a los asociados inscritos en el programa de autoabastecimiento por encima de las cantidades establecidas por el artículo 20.

6.º No tener los espacios de los clubes de consumidores de cannabis destinados a la distribución separados de los espacios destinados al consumo de cannabis.

7.º No disponer del libro de registro de asociados o de cualquiera de los libros de registro de autoabastecimiento.

8.º Falsear el contenido de los libros de registro de asociados o de cualquiera de los libros de registro de autoabastecimiento.

9.º Llevar a cabo cualquiera de las actividades de publicidad, patrocinio o promoción que prohíbe el artículo 24.

b) En el ámbito de la seguridad ciudadana:

1.º Dispensar cannabis a personas no asociadas o fuera del ámbito de la asociación.

2.º Transmitir un asociado a terceras personas el cannabis que se le dispensa a título personal.

3.º Transportar cannabis sin autorización escrita del órgano de gobierno de la asociación, sin garantizar la integridad del transporte o realizado en un medio de transporte colectivo.

4.º Tener un club de consumidores de cannabis instalado en otro establecimiento que lleva a cabo actividades distintas de las propias de la asociación.

c) En el ámbito de la agricultura:

1.º Superar la producción anual permitida que el artículo 18.4 fija para el cultivo para el autoabastecimiento.

2.º Llevar a cabo las actividades de producción y almacenamiento incumpliendo cualquiera de las condiciones establecidas por el artículo 18.

3. Son infracciones graves:

a) En el ámbito de la salud pública:

1.º Distribuir la sustancia con adulteraciones, contaminantes o patógenos o sin realizar los controles analíticos periódicos que establece el artículo 13, si no supone riesgo para la salud de las personas.

2.º Dispensar cannabis a asociados no inscritos en el programa de autoabastecimiento.

3.º Dispensar cannabis a los asociados inscritos en el programa de autoabastecimiento sin respetar el período de carencia establecido por el artículo 20.

4.º No tener actualizada la información que debe constar en los libros de registro de asociados o en cualquiera de los libros de registro de autoabastecimiento.

5.º No llevar a cabo cualquiera de las actuaciones de comprobación y de verificación con relación a la distribución del cannabis a los asociados a que se refiere el artículo 25.

6.º No disponer de los servicios especializados a que se refiere el artículo 27.3 para los asociados que necesitan consumir la sustancia por motivos terapéuticos.

7.º Tener espacios reservados, segregados o compartimentados destinados a actividades con finalidades distintas de las propias de la asociación.

8.º No facilitar la información, el asesoramiento profesional y la formación en materia de prevención de riesgos y de reducción de daños a los trabajadores de la asociación, así como no facilitar la formación necesaria y continua a las personas encargadas de manipular y dispensar el cannabis.

9.º No facilitar la información a los asociados sobre las propiedades del cannabis y sus derivados y sobre los riesgos y los daños que pueden derivarse del consumo de la

sustancia, así como no disponer del programa de información específico dirigido a los asociados de dieciocho a veintiún años.

b) En el ámbito de la seguridad ciudadana, identificar la sede de la asociación o el emplazamiento del club incumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 24.3.

4. Son infracciones leves el incumplimiento de cualquier otra obligación que no sea calificada de muy grave o grave.

#### Artículo 34. *Sujetos responsables de las infracciones.*

1. Son responsables de las infracciones tipificadas por el presente capítulo las asociaciones y las personas físicas a quienes sea imputable una acción o una omisión tipificadas como infracción por la presente ley.

2. Si un club comete alguno de los hechos tipificados como infracción por la presente ley, el sujeto responsable es la asociación a la que pertenece.

#### Artículo 35. *Sanciones aplicables a las asociaciones de consumidores de cannabis.*

1. Las infracciones tipificadas por la presente ley se sancionan con las siguientes multas:

- a) Por la comisión de infracciones muy graves: una multa de entre 6.001 y 12.000 euros.
- b) Por la comisión de infracciones graves: una multa de entre 2.001 y 6.000 euros.
- c) Por la comisión de infracciones leves: una multa de hasta 2.000 euros.

2. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sanción son los que establece la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo y en función de la existencia de perjuicios para el interés público, del riesgo generado para la salud, de la repercusión social de la infracción, del beneficio que haya reportado al infractor la conducta sancionada y de la reincidencia en la comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, si así ha sido declarado por resolución firme.

3. El Gobierno debe revisar y actualizar periódicamente las cuantías de las multas.

#### Artículo 36. *Potestad sancionadora.*

1. La imposición de las sanciones por la comisión de infracciones graves y leves corresponde a los directores generales competentes en materia de salud pública, seguridad ciudadana o agricultura, según proceda por razón de la materia y de acuerdo con la distribución del artículo 33.

2. La imposición de las sanciones por la comisión de infracciones muy graves corresponde a los consejeros de los departamentos competentes en materia de salud pública, seguridad ciudadana o agricultura, según proceda por razón de la materia y de acuerdo con la distribución del artículo 33.

#### Artículo 37. *Procedimiento sancionador y medidas de carácter provisional.*

1. El procedimiento sancionador aplicable es el establecido por la legislación de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas.

2. En caso de denuncia, el órgano competente debe incoar el procedimiento sancionador si los hechos denunciados presentan indicios mínimamente consistentes o creíbles de infracción, y puede adoptar de oficio o a instancia de parte, mediante acuerdo motivado, medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final en los términos establecidos por la legislación básica y por la legislación de la Generalidad en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.

Artículo 38. *Prescripción de las infracciones y de las sanciones.*

1. Las infracciones muy graves prescriben al cabo de cinco años; las infracciones graves, al cabo de tres años, y las infracciones leves, al cabo de un año.
2. Las sanciones por la comisión de infracciones muy graves prescriben al cabo de cinco años; por la comisión de infracciones graves, al cabo de tres años, y por la comisión de infracciones leves, al cabo de un año.

Disposición adicional primera. *Comisión de seguimiento de la aplicación de la Ley.*

1. El Gobierno debe crear una comisión de seguimiento de la aplicación de la presente ley como órgano asesor del departamento competente en materia de salud pública, con el objetivo de evaluar la aplicación y los efectos de la Ley, proponer disposiciones para su desarrollo y aplicación, así como para cumplir cualquier otra función que le encomiende dicho departamento.
2. El decreto de creación de la comisión de seguimiento debe determinar, al menos:
  - a) La adscripción al departamento competente en materia de salud pública.
  - b) La composición, teniendo en cuenta que deben formar parte de ella representantes de los departamentos competentes en salud pública, seguridad ciudadana y agricultura, así como representantes de las asociaciones municipalistas, de las entidades especializadas y de las federaciones de asociaciones cannábicas.
  - c) El régimen de funcionamiento.
3. La comisión de seguimiento debe elaborar un informe público anual sobre la aplicación de la Ley y su evolución, que debe presentar al departamento competente en materia de salud pública.

Disposición adicional segunda. *Negociación colectiva.*

El Gobierno debe facilitar la negociación colectiva, entre las partes legitimadas que se determinen de entre los representantes de las asociaciones de consumidores de cannabis y los representantes de los trabajadores, con el objetivo de que puedan alcanzar un acuerdo que recoja, entre otros aspectos, las categorías profesionales correspondientes.

Disposición adicional tercera. *Equiparación de las asociaciones y los clubes de consumidores de cannabis con los clubes privados de fumadores a que se refiere la Ley del Estado 28/2005.*

Los clubes de consumidores de cannabis y las zonas de las asociaciones que no tengan club y que tengan un espacio donde se permita el consumo de tabaco son clubes privados de fumadores, de conformidad y con los efectos establecidos por la disposición adicional novena de la Ley del Estado 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Disposición adicional cuarta. *Promoción de iniciativas científicas de investigación.*

El Gobierno debe promover las condiciones para el desarrollo de iniciativas científicas de investigación en los campos de la medicina, la psicología, la epidemiología, la sociología, la agronomía, la botánica, el derecho y la economía, entre otros, a fin de que las actividades de las asociaciones de consumidores de cannabis puedan aportar la mayor cantidad posible de conocimientos científicos a la sociedad.

Disposición transitoria. *Adaptación de las asociaciones de consumidores de cannabis existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.*

1. Al cabo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente ley, las asociaciones de consumidores de cannabis existentes con anterioridad a su entrada en vigor deben adaptar sus estatutos y adoptar todas las medidas que sean necesarias para cumplir las obligaciones y las medidas de control por ella establecidas.

2. El incumplimiento de lo dispuesto por el apartado 1 se considera infracción muy grave, y es sancionado por el departamento competente en materia de salud pública de acuerdo con lo dispuesto por el capítulo relativo al régimen de infracciones y sanciones de esta ley.

3. Si transcurrido el plazo establecido por el apartado 1 las asociaciones no han realizado las preceptivas adaptaciones ni han inscrito las modificaciones de sus estatutos en el correspondiente registro de asociaciones, los miembros del órgano de gobierno responden de los daños que causen a la asociación o a terceros con motivo del incumplimiento de lo establecido por esta ley.

4. Los estatutos y las disposiciones de régimen interno de las asociaciones de consumidores de cannabis que se opongan a lo establecido por la presente ley quedan sin efecto a partir de su entrada en vigor.

Disposición final primera. *Análisis de medidas fiscales.*

1. El Gobierno debe presentar un proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio, con el fin de crear nuevas tasas como consecuencia del nuevo régimen jurídico de las asociaciones de consumidores de cannabis establecido por la presente ley, especialmente el relativo a las actuaciones de inspección y de control, en el que son competentes los departamentos de la Generalidad implicados.

2. El Gobierno debe estudiar la viabilidad técnica y económica de crear un nuevo impuesto propio sobre el cannabis, con el objetivo de reducir los riesgos y los daños vinculados a su consumo, internalizar las externalidades negativas que se derivan del mismo y fomentar los hábitos de consumo saludables.

Disposición final segunda. *Desarrollo reglamentario.*

1. El Gobierno, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley y en el marco de lo que establece, debe aprobar las disposiciones que sean necesarias para su desarrollo y ejecución y adoptar las medidas pertinentes con la misma finalidad.

2. El desarrollo reglamentario debe respetar las competencias de los entes locales en los términos establecidos por la legislación de régimen local.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», y sus efectos económicos en el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a su aprobación.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 6 de julio de 2017.—El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó.

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 7411, de 13 de julio de 2017)

COLABORADOR DIAMANTE



COLABORADOR ORO



**COLABORADOR PLATA**



**COLABORADOR BRONCE**



**ENTIDADES CON LAS QUE COLABOREMOS**



